

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador

Departamento de Asuntos Públicos

Convocatoria 2016-2018

Tesis para obtener el título de maestría de Investigación en Estudios Urbanos

La trayectoria del discurso de pobreza en el Ecuador en los gobiernos nacionales de las décadas
de 1970 a 2010

Darío Toscano Torres

Asesora: Nathalia Novillo

Lectores: Gustavo Durán y María Elena Acosta

Quito, mayo de 2019

Dedicatoria

Al omnipresente espíritu de mi pa.

Tabla de contenidos

Resumen.....	VII
Introducción.....	1
Objetivos	6
Hipótesis	6
Capítulo 1	14
Marco Teórico.....	20
1.1 La relación entre la pobreza y las teorías del desarrollo: una construcción discursiva.	14
1.2 La pobreza desde la marginalidad y el subdesarrollo: La teoría de la dependencia.....	25
y el estado desarrollista.....	19
1.3 La pobreza en relación con el libre mercado: La teoría de la globalización y el.....	29
desarrollo neoliberal	23
1.4 La pobreza y los derechos humanos: La teoría del desarrollo humano en la era post.....	34
neoliberal y el Buen Vivir	28
Capítulo 2	33
Marco analítico sobre la pobreza urbana en su contexto global y local.....	38
2.1 La nueva pobreza urbana: una revisión general	33
2.2 La manifestación de la nueva pobreza urbana en América Latina	39
2.3 Una revisión histórica y política de la pobreza urbana en el Ecuador en siglo XX	44
2.4 La nueva pobreza urbana en el Ecuador: una revisión de la realidad contemporánea	50
Capítulo 3	57
Metodología.....	60
3.1 El análisis de discurso y el análisis crítico del discurso desde una perspectiva.....	60
estructuralista: el discurso de la “pobreza” en las teorías del desarrollo.....	57
Capítulo 4	71
Un discurso de poder: la pobreza urbana y el desarrollo en Ecuador.....	74
4.1 Pobreza y marginalidad urbana: el periodo desarrollista en el Ecuador de los 70’s	72
4.1.1 Contexto, antecedentes y justificaciones	72
4.1.2 El discurso del desarrollismo: la versión ecuatoriana en el marco de la.....	77
dictadura militar	76

4.1.3 Pobreza, desarrollo y Estado: políticas y campos de acción.....	84
4.1.4. Los "beneficiarios" del discurso desarrollista en el Ecuador: la pobreza.....	87
urbana los 70's	86
4.2 Pobreza y la falta de oportunidades: el periodo neoliberal del desarrollo en el.....	91
Ecuador de los 90's.....	91
4.2.1 Contexto, antecedentes y justificaciones	92
4.2.2 El discurso neoliberal: un desarrollo desde los grupos empresariales y la.....	96
liberalización del mercado	96
4.2.3 Pobreza, desarrollo y Estado: políticas y campos de acción.....	103
4.2.4. Los "beneficiarios" del discurso neoliberal en el Ecuador: la pobreza urbana.....	107
de los 90's	108
4.3 Pobreza, derechos y Buen Vivir: el discurso de desarrollo en la "Revolución.....	107
Ciudadana" del 2007.....	115
4.3.1 Contexto, antecedentes y justificaciones	115
4.3.2 El discurso de una alternativa al desarrollo tradicional: el retorno del Estado.....	117
de derecho y la filosofía del Buen Vivir	118
4.3.3 Pobreza, desarrollo y Estado: políticas y campos de acción.....	127
4.3.4. Los "beneficiarios" del discurso del Buen Vivir en el Ecuador: la pobreza.....	129
urbana del 2000's.....	131
Discusión final	140
Conclusiones	143
Lista de referencias	147

Ilustraciones

Tablas

Tabla 1 Esquema de análisis del discurso de la pobreza.....	67
Tabla 2. Esquema de análisis de textos	67
Tabla 3 Síntesis de la tesis y anti tesis en el discurso desarrollista en el Ecuador	83
Tabla 4. Síntesis de la tesis y anti tesis en el discurso neoliberal en el Ecuador	103
Tabla 5. Síntesis de las tesis y anti tesis en el discurso del Post neoliberalismo- Buen.....	132
Vivir en el Ecuador	126

Declaratoria de cesión de derecho de publicación de la tesis

Yo, Darío Toscano Torres, autor de la tesis titulada " La trayectoria del discurso de pobreza en el Ecuador en los gobiernos nacionales de las décadas de 1970 a 2010" declaro que la obra es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de maestría de Investigación en Estudios Urbanos concedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Cedo a la FLACSO Ecuador los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, bajo la licencia Creative Commons 3.0 Ecuador (CC BY-NC-ND 3.0 EC), para que esta universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando con el objetivo no sea obtener un beneficio económico.

Quito, mayo de 2019



Darío Toscano Torres

Resumen

Partiendo de la postura metodológica estructuralista del Análisis del Discurso de Foucault y la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso de Van Dijk, este trabajo pretende un análisis del discurso sobre la pobreza y la desigualdad que se encuentra implícito en los planes y proyectos de desarrollo en el Ecuador, como un discurso que justifica, naturaliza y perdura dicha pobreza y desigualdad, a través del mantenimiento de las relaciones sociales, políticas, económicas y simbólicas de dominación.

En los tres periodos cronológicos de desarrollo analizados: desarrollismo de los 70's, neoliberal de los 90's y post neoliberal-Buen Vivir de los 2000, identificamos como cada proyecto de desarrollo presenta su propia concepción de qué es la pobreza nacional, qué la causa y por ende, cómo se la aborda; justificando, además, el ascenso de uno u otro grupo de poder a la administración estatal. Entre la década de los 60s-70s, el control discursivo estuvo a manos de las dictaduras militares y su plan de industrialización del país, por lo que necesitaron de la generación de una marginalidad urbana, compuesta por migrantes del campo que trabajarían en las industrias, generando una pobreza ruralizada, incivilizada e indigenizada.

En los 80s-90s, el control sobre el discurso del desarrollo se volcó hacia los comerciantes, banqueros y financistas principalmente de la costa, quienes requerían de un tipo de pobreza individualizada, emprendedora y dedicada al consumo para su inmersión en las dinámicas del libre mercado, terminando por establecer una pobreza femenina y ociosa. Y finalmente, para el 2000 se requiere de una pobreza protegida por los derechos del Buen Vivir, pero cuyas expresiones no encuentran reconocimiento ni legitimidad por afuera de dichos derechos. Un proyecto a manos de la aristocracia nacional aliada con financistas.

En cada uno de estos momentos discursivos, evidenciamos como los preceptos de "ciudad", "urbanización" y "ciudadanía" ocupan un rol central en la conformación y materialización del discurso de poder, evidenciando la capacidad que tiene: materialidad de la ciudad, las dinámicas de la urbe y el estatus simbólico-político de la ciudadanía, para la construcción de individuos y sociedades, pues les dota de una apreciación de la realidad y un sentido del ser sobre ella.

Introducción

Los preceptos post socráticos sobre la justicia y la igualdad que dieron forma y origen a las Polis griegas (Pirie 2001) se mantuvieron desapercibidos durante el largo periodo del oscurantismo religioso en el mundo occidental y volverían a retomarse durante el renacimiento, revalorizando los aspectos de la justicia, la libertad, la individualidad, etc. Sería para el periodo de la ilustración que dichos principios se materializarían en revoluciones en contra de los Estados totalitaristas e instituciones religiosas dedicadas al dominio ideológico. Este fue uno de los detonantes del inicio de los procesos de independencia de las colonias europeas a lo largo del mundo que, acompañado con las revoluciones industriales del siglo XIX, comenzarían a moldear una nueva realidad a partir de los preceptos de las libertades ideológicas y económicas plasmadas en el naciente capitalismo industrial. Y con ello un nuevo dimensionamiento derivado de las injusticias de un sistema productivo basado en la explotación de aquellos que no tienen más que su fuerza de trabajo por aquellos detentores de los medios de producción, por expresarlo en términos de Engels (1985).

Los emergentes espacios urbanos, devenidos de estos procesos y principios, se iban nutriendo demográficamente por las poblaciones rurales expulsadas por la falta de inversión para la producción y el avance de la industrialización del campo. Los migrantes se aglomeraban alrededor de las industrias y formaban asentamientos permanentes que eran dotados de infraestructura necesaria para la supervivencia, por la empresa, el Estado o por auto gestión de los pobladores.

En el caso ecuatoriano, la irrupción del capitalismo industrial se incluye en una dinámica económica y productiva previa que se encontraba enfocada en el modelo agro exportador de cacao y banano respectivamente hasta la década de 1960; cuando se comenzó la industrialización nacional (Larrea 1989, Crespo 2015). Esto preparó el terreno para que el Ecuador estableciera su dependencia económica en la explotación petrolera desde la década de los 70's, periodo donde el gobierno nacional se encontraba a manos de la Dictadura Militar y su proyecto desarrollista (Gordillo, 2015). Esto terminó produciendo un proceso de urbanización bicefálico en Quito y Guayaquil (Achig 1983, Carrión 1986, Sánchez 1984) profundizando la polarización de la

población en el país entre ricos y pobres, en las zonas urbanas así como en las gradualmente olvidadas zonas rurales, derivando en el fenómeno de la marginalidad urbana (Báez 1989, Larrea 1989, Boc 1989, Martínez 2007).

Tras el "retorno a la democracia" a finales de la década de 1970 (Boc 1989), los gobiernos de tendencias de izquierda reformista (iniciando con Jaime Roldos Aguilera) quisieron adoptar el poder, pero duró poco tiempo gracias a la propaganda anti comunista y fortalecimiento del modelo pro mercado que se esparcía en el continente, estableciendo el inicio de la aplicación de los gobiernos empresariales con la llegada del presidente León Febres Cordero, un declarado partícipe del proyecto de desarrollo neoliberal. Le seguiría Rodrigo Borja (1988-1992) que continuó con una postura de liberalización económica y reducción del Estado (Paz y Miño 2015, León 2015).

Según los datos disponibles, se vislumbra la población urbana nacional se había multiplicado por seis (aglomerándose principalmente entre Guayaquil y Quito), mientras que la población nacional se triplicó entre 1950 y 1990, donde se estima que para la década de 1990, un 25% de la población nacional se reparte entre estas urbes (Cepar 1993).

Durante el periodo de Borja (1988-1992) ocurrió un evento de implicaciones mundiales que establecería la "victoria" del capitalismo y el final de los Estados centralizados planificadores: la caída del muro de Berlín; el gobierno de Sixto Durán Ballén retomó el modelo empresarial planteado años antes por León Febres Cordero, consolidándolo y estableciendo un Ecuador de libre mercado, entregado a la globalización, promoviendo la propiedad privada, la privatización de servicios y la retirada del Estado. Los posteriores gobiernos de Abdalá Bucarám y Fabián Alarcón se caracterizaron por el aumento a las tarifas de servicios básicos, transporte, la reducción de subsidios dentro del marco político heredado de periodos anteriores (Acosta 2006, Paz y Miño 2015).

Con esta línea continuaría el presidente Jami Mahuad hasta el quiebre de la economía nacional con el feriado bancario y la posterior dolarización de la moneda para finales del siglo XX. Tras la salida forzada de Mahuad, lo sustituye Noboa en un gobierno que trató de organizar el país en

función de la nueva moneda, motivando una mayor apertura al mercado internacional e inversión extranjera (Acosta 2006, Paz y Miño 2015). Para el 2002, Lucio Gutierrez mantiene el avance neoliberal al promover la firma del TLC con Estados Unidos, que no logra concretar por los fuertes levantamientos de los sectores populares, ni tampoco lo haría su sucesor Alfredo Palacios (Acosta 2006, Paz y Miño 2015).

Durante estas casi tres décadas de lo que se denominó la "larga noche neoliberal",¹ el mercado y la empresa privada constituyeron el eje de la economía; el Estado se llenó de partidos políticos conformados por grupos de familiares y socios de negocios que se repartían los poderes según sus intereses; el Estado perdió gran parte de sus funciones y generó un profundo deterioro de las condiciones de vida, trabajo, precariedad, subempleo y aumento de la pobreza y desigualdad en proporciones abismales en la sociedad ecuatoriana (Paz y Miño 2015).

En este contexto, para el 2006 nace la figura de Rafael Correa con Alianza País, un movimiento político que se inscribe en la nueva izquierda latinoamericana post neoliberal que pretende el recuperar el rol del Estado para modificar las estructuras de poder del país, recobrar los mecanismos de planificación y control del Estado, incremento en la inversión social y gasto público, recaudación tributaria y fiscal, entre otros ámbitos; a partir de los principios del Buen Vivir y operativizado desde el proyecto de la Revolución Ciudadana (Paz y Miño 2015).

Hemos iniciado esta exposición histórica que resalta diversos sucesos respecto a la política, la economía, la ciudad, la pobreza y los debates de estos elementos, desde las polis griegas, pasando por la Revolución Francesa, la Revolución industrial y la historia ecuatoriana desde la segunda mitad del siglo XX, con el propósito de evidenciar las interrelaciones profundas, casi esenciales que existen entre estos ámbitos. La ciudad, la pobreza y el poder, articulan procesos que se han venido desarrollando juntos desde hace mucho tiempo, al punto que se presentan como interdependientes en una relación estructural que determina las configuraciones de toda nuestra realidad.

¹ Expresión frecuentemente utilizada por Rafael Correa en sus discursos de campaña pre electorales y durante su periodo presidencial, haciendo referencia principalmente al feriado bancario de 1999.

La pobreza y, específicamente la pobreza urbana desde mediados del siglo XX, no es solamente la manifestación de una carencia de carácter económico, sino una construcción política consecuencia de la aplicación de un modelo ideológico-económico-político y, a su vez, el insumo básico para la construcción de una nueva plataforma política y el siguiente proyecto de desarrollo que viene con ella.

Desde la inauguración de la idea del "Desarrollo", como el mecanismo para eliminar la pobreza a través de la creación de sociedades libres y democráticas, hemos visto un interminable desfile de discursos provenientes de innumerables grupos políticos que buscan establecer su propia interpretación de este fenómeno.

Cada uno con su propio lineamiento político y económico, representando a una versión diferente de desarrollo, con su particular apreciación de los "problemas" y "soluciones" a las dificultades del país, y cada uno con un discurso destinado a ganarse la atención de las grandes poblaciones en situación de pobreza postulándose a sí mismos y a sus partidos como los únicos aptos para dar una respuesta definitiva al problema. La relación entre poder, pobreza y ciudad, como veremos más adelante, es estructural.

La importancia del presente estudio radica en comprender a la pobreza no simplemente como una expresión de la falta de infraestructura y posibilidad de acceso de las poblaciones a servicios como salud, educación vivienda, protección de seguro social, alimentación, ingresos o como una línea que divide a la población o como una carencia del algún tipo.

No, la pobreza es una construcción y un insumo discursivo derivado/generador de las luchas por el poder político y económico de las clases dominantes que poseen los medios para monopolizar un discurso y posicionarlo como una apreciación común de la realidad por parte de toda la población. En el sistema capitalista, post colonial y jerarquizado que encarna la sociedad ecuatoriana, la pobreza existe porque es útil para fortalecer, legitimar y perdurar las hegemonías, y su existencia es necesaria para el desenvolvimiento del juego político nacional. En donde el espacio "ciudad" es el único capaz de producir y reproducir este particular discurso sobre la pobreza, evidenciando su capacidad de generar individuos y sociedades.

Dentro de dicho juego, el concepto de "desarrollo", inventado en la década de los 50's en Estados Unidos, se convierte en el nuevo instrumento hegemónico que promete erradicar la pobreza y desigualdad de los países "subdesarrollados", dando un escenario real para el ejercicio de las libertades y la democracia a través de los *planes de desarrollo*. En estos planes se siembra la semilla discursiva y conceptual que vincularía profundamente la idea de "pobreza" con "ciudad" puesto que toda propuesta de abordaje a la pobreza se relaciona directamente con la ciudad (como el escenario físico), la urbe (como la dinámica que determina las relaciones sociales en la ciudad) y la ciudadanía (como el estatus político que conlleva habitar la ciudad y ser urbano). De esta manera, la pobreza como construcción discursiva, solamente puede comprenderse como una pobreza urbana, es decir, una persona será pobre o no a medida que se vincule con la ciudad, la urbanidad y la ciudadanía.

En el Ecuador han existido tres grandes periodos de "desarrollo" y, por tanto, tres tipos diferentes de configuraciones de la pobreza (urbana): el proyecto desarrollista de la década de 1970 de la mano de la dictadura militar y su pobreza urbana "marginal"; el desarrollo neoliberal de los 90's a mano de banqueros y financistas con su discurso de la pobreza por "falta de oportunidades"; y el post neoliberalismo-Buen Vivir en los 2000 y su apreciación de pobreza como resultado de la "falta de derechos" e insuficiente capital humano. Cada discurso de desarrollo y concepto de pobreza se encuentra condicionado por el anterior y forman una sola cadena de sentidos teóricos y disputas políticas por la apropiación y monopolización del discurso. De aquí proviene el tema de la presente tesis: *La trayectoria del discurso de la pobreza en Ecuador en los gobiernos nacionales de las décadas de 1970-2010*.

Dado que hemos reincidento en resaltar al "desarrollo" y la "pobreza" como un discurso, resulta vital que el análisis de esta investigación se realice desde el método del análisis discursivo, en donde a través de una revisión bibliográfica de los respectivos "planes de desarrollo" de cada uno de los tres periodos mencionados y la concepción de "pobreza" que presentan, podamos evidenciar y comprender las configuraciones de las pugnas de poder político y económico que primaban en cada época y derivaron en la constitución y aplicación de un específico proyecto de desarrollo.

Objetivos

- Identificar el discurso relacionado a pobreza urbana en el Ecuador en los tres periodos de gobierno: desarrollista de 1970, el neoliberal de 1990 y el post neoliberal-Buen Vivir del 2000, desde la perspectiva del análisis del discurso y análisis crítico del discurso
- Analizar las bases y principios teóricos y conceptuales que conforman y fundamentan a cada uno de los discursos sobre la pobreza urbana en el Ecuador en los tres periodos de gobierno mencionados a partir de las construcciones discursivas del desarrollo, y en función de su vinculación con la ciudad, la urbe y la ciudadanía.
- Caracterizar el contexto global y local en el que se formularon los específicos discursos sobre la pobreza urbana en el Ecuador en los tres periodos de gobierno mencionados, como el escenario propicio para el posicionamiento de una postura del desarrollo.
- Realizar un análisis crítico del discurso a los postulados discursivos sobre la pobreza urbana en el Ecuador en cada uno de los periodos de gobierno presentados en función de las relaciones y pugnas de poder político y económico que les subyacen.

Hipótesis

- A pesar de que cada uno de los proyectos sobre desarrollo y planes para la reducción de la pobreza han tenido un rol prioritario en cada uno de los periodos de gobierno en el Ecuador entre 1970-2010, el discurso de pobreza que fundamenta su accionar no tiene una postura holística que constituya el concepto de pobreza de una manera global, sino parcializada según la postura ideológica, política y económica de cada gobierno nacional. Los "vacíos" dentro del discurso de pobreza genera que existan ámbitos de la pobreza que no son abordados ni enfrentados, descuidando aspectos que posteriormente serán los que caractericen a la situación de pobreza y sean el contenido que abordará un posterior discurso sobre la pobreza para el posicionamiento político, económico e ideológico de un nuevo grupo de poder.
- Los esfuerzo que han realizado los gobiernos ecuatorianos en los periodos entre 1970-2010 por reducir la pobreza, no se han planteado modificar los elementos estructurales económicos, culturales, históricos y políticos que conforman la raíz del

fenómeno de la misma, sino en apaciguar los elementos que más resalten y sean vistos como relevantes desde el discurso de la pobreza que manejen. Dentro de las estructuras jerárquicas que deben recrearse para mantener las dinámicas del poder nacional, los "pobres" con capacidad de ejercer el sufragio ("ciudadanos"), son el insumo popular vital para el posicionamiento de un grupo de poder, por lo que la "pobreza" (urbanizada) no puede ser erradicada, sino solamente reinterpretada y reutilizada, desde el punto de vista discursivo.

- El primer discurso de desarrollo surge en la década de 1950 como una solución a la situación de pobreza que vivían las grandes poblaciones de los países cuya economía se centraba en el sector primario, a través de la industrialización y dotación de servicios urbanos, enmarcados en el aura de la "modernidad". Ante el fracaso de esta propuesta, los siguientes proyectos de desarrollo buscaban desconcentrar la atención de crecimiento urbano como mecanismo de reducción de la pobreza y desigualdad, y expandir las oportunidades a todos los territorios. No obstante, desde su origen, el desarrollo es una propuesta basada en las potencialidades de la "ciudad" y lo "urbano", un discurso que mantiene esta premisa axiomática como la medida simbólica, legal y material para medir la evolución de la pobreza en el país.

El presente estudio parte de la postura teórica de la denominada "nueva pobreza urbana", presentada por autores como Wilson (1996) y Soja (2000), que nos contextualizan en la situación de pobreza producida en los países "desarrollados" que hasta la década de los 70's habían construido sus urbes a partir y alrededor de las industrias y otros focos productivos; pero que con la llegada de la globalización, inician procesos de desindustrialización que dejan sin empleo a poblaciones urbanas enteras, generando migraciones, fraccionando el tejido social, produciendo degradaciones espaciales, aumento de la indigencia, peligrosidad, mercado de drogas, delincuencia, etc., incidiendo de manera estructural en el aumento de la desigualdad social, económica y espacial en las sociedades; y profundizado con la participación del Estado, bancos, inversionistas y el mercado inmobiliario.

En este contexto, revisamos el impacto de éstas lógicas de mercado mundial en el periodo post fordista en América Latina, a través de los trabajos y posturas teóricas de autores como Adler

(1977), Davis (2004) Katzman (2001), Ziccardi (2008); Janoschka (2002), Pradilla (2014), De Mattos (2006), entre otros, que nos hablan de la conformación de la pobreza urbana en la región, primero a partir del fracaso de los intentos de industrialización de las economías nacionales y posteriormente a través de la implementación del neoliberalismo, la cual produjo en Latinoamérica efectos similares a los ocurridos en Norteamérica durante la desindustrialización. Así mismo, exponen algunas de las configuraciones urbanas más importantes que se crearon durante este periodo, como las "precarópolis" y las ciudades "difusas".

En el caso ecuatoriano, recurrimos a una revisión histórica de los procesos de urbanización nacional, sus características e implicaciones políticas, sociales, económicas y espaciales, en el siglo XX, desde la visión de autores como Achig (1983), Kingman (2006), Pineo (1994) Uzcátegui (1981), Guerrero (1991), Martínez (2007), Ayala (2008) y Carrión (1986), quienes nos permiten construir una visión de la vinculación entre urbanización, el rol del Estado y las relaciones de poder que primaban en la época.

Paralelamente, entendemos a todos estos procesos como acciones cometidas tras validarse a través de un discurso de desarrollo específico. La comprensión de estos discursos los hemos dividido en tres partes: el desarrollismo de los 70's, el neoliberalismo de los 90's y el post neoliberalismo-Buen Vivir del año 2000. Para la revisión del primero, nos enfocamos en los postulados cepalinos de autores como Prebisch (1963, 1980) y Gunder Frank (1969), y los complementamos con las posturas críticas de Dos Santos (2002), Quijano (2011, 2012) y Roberts (1980), así como la mención a la postura keynesiana que da cuerpo a toda la propuesta.

Para el periodo neoliberal, exponemos las bases teóricas de este proyecto que básicamente provinieron de acuerdos internacionales apoyados por instancias económicas globales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y los principios determinados en el Consenso de Washington (Casilda 2004, Martinez 2012, Reyes 2009, Montufar 2000, Bustelo 1999).

La filosofía y propuesta de desarrollo del Buen Vivir en la primera década del 2000, por su parte, la estudiamos desde la postura de Gudynas (2011) Gudynas y Acosta (2011) y Reyes (2009);

mientras que la postura post neoliberal basado en los principios del capital humano, lo abarcaremos desde la visión de Amartya Sen (1998, 1999, 2001).

Posteriormente, analizamos a la configuración urbana y de la pobreza urbana como un mismo proceso, como una causa-consecuencia provocada por la aplicación de las respectivas teorías de desarrollo en cada uno de los periodos; una relación que observamos a través de las respectivas apreciaciones y aplicaciones que las instituciones nacionales encargadas del desarrollo del país, realizaron durante su mandato: en los 70's le corresponde a la Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA 1972, 1978a, 1978b, 1979a, 1979b), en los 90's al Consejo Nacional de Modernización (CONAM 1994a, 1994b, 1996a, 1996b) y en los 2000 a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES 2007, 2009).

Hemos resaltado que nuestra apreciación de las posturas políticas del desarrollo frente a la pobreza urbana comprendiéndola como una construcción discursiva, este trabajo parte de una metodología hipotético-deductiva desde una perspectiva estructuralista. El método de análisis es el discurso foucaultiano estructuralista (Foucault 1969) que pretende vislumbrar la correlación de opuestos binarios complementarios o tesis-antítesis que conforman la realidad a través de la articulación de sentidos de los discursos en un tiempo, espacio y sociedad determinada. Conjuntamente a las premisas foucaultianas, empleamos el método de Análisis Crítico del Discurso de Van Dijk (1999) que comprende al discurso político como un mecanismo para que los poderes sociales, políticos y económicos se traduzcan en formas de dominio, abusos y desigualdades producidos y practicados desde las construcciones discursivas que proveen a los individuos de un marco de sentidos que dan orden y legitimidad a la realidad, controlando sus mentes y sus acciones.

La técnica de recopilación de información ha sido la revisión bibliográfica, tanto para conocer el contexto social, histórico, político, social y espacial tanto nacional como internacional, en el que surge un discurso de desarrollo específico, como las construcciones discursivas locales en función de dichos discursos de desarrollo en función de las características del contexto y los intereses de los grupos de poder. Los documentos de planes nacionales de desarrollo publicados por las propias instancias gubernamentales competentes (JUNAPLA, CONAM, SENPLADES),

son la fuente primaria de información para descubrir las "tesis" y las "anti tesis" de cada concepción de desarrollo y pobreza en el Ecuador; paralelamente, utilizamos bibliografía que detalla a mayor profundidad teórica y concreta, las transformaciones discursivas del desarrollo en nuestro país desde una perspectiva crítica.

En este punto, vale la pena realizar cierta puntualización. El análisis que pretendemos hacer, como hemos mencionado, se enmarca en la escala nacional, no local: los planes nacionales de desarrollo proporcionan grandes líneas discursivas políticas, económicas, administrativas y legales, que eventualmente deberán aterrizar en el entorno físico, sea urbano o rural. Pero el encargado directo de dicho aterrizaje, no es el gobierno nacional, sino los gobiernos locales a través del diseño y aplicación de instrumentos como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Especiales o Planes Parciales. Entonces, si deseamos comprender las implicaciones de la pobreza "urbana" en los planes de desarrollo, ¿por qué no analizamos directamente los discursos locales sobre la pobreza en ciudades como Quito, Guayaquil o Lago Agrio?

Esta opción fue constatada en un principio, pero se concluyó que sería más adecuado dejarla como una investigación posterior a la aquí emprendida, por un motivo central: los macro discursos de desarrollo nacieron de la mano de los proyectos de industrialización y urbanización en todo el mundo, una estrategia política que pretendía la expansión del capitalismo industrial en América Latina y otras regiones pre capitalistas a mediados del siglo XX. Las ciudades de aquella época no surgen por el deseo y gestión de los pobladores y autoridades locales, sino como un ente político, ideológico e incluso filosófico que hacía referencia al futuro de la "sociedad moderna y civilizada" desde una escala global, pero con aplicabilidad a nivel nacional. Las particularidades económicas, políticas, históricas, físicas, raciales y culturales que habían determinado el desenvolvimiento de las urbes hasta ese momento, son dejadas de lado para la imposición de un nuevo esquema totalizador sobre qué eran las ciudades y para qué servían. La urbe, la ciudad y la ciudadanía se tiñen de los imaginarios, ilusiones y fantasías que no provenían del espacio físico y la gente en el que se han plasmado, sino desde un artefacto ideológico externo denominado "desarrollo", por lo que un análisis de lo local resultaría insuficiente para cumplir nuestros objetivos.

El presente trabajo se divide en 6 secciones. El primer capítulo está destinado a exponer un marco teórico vasto y explicativo que nos brinde las bases generales y contextuales para comprender las teorías del desarrollo que han configurado la realidad económica, política y social en occidente desde mediados de 1950 hasta la actualidad. En el primer acápite puntualizamos los motivos por los cuales consideramos plausible al abordar la pobreza como una construcción discursiva que es instrumentalizada por las teorías de desarrollo como el elemento clave para vincular a la sociedad con el Estado y unirlos para cumplir una meta en común.

Posteriormente, partimos desde una perspectiva histórica para describir y comprender el entorno en el que se produce un tipo particular de pobreza urbana, que es conceptualizada, explicada y abordada desde las respectivas teorías de desarrollo industrial de la década de los 50's, el desarrollo neoliberal en los 80's y 90's y el post neoliberalismo-Buen Vivir del 2000. Para el periodo desarrollista, presentamos los fundamentos que dan origen al "desarrollo" y el "subdesarrollo" desde las teorías de la marginalidad y la dependencia. Para el momento neoliberal, nos enfocamos en las teorías de la globalización y el libre mercado, tanto desde la versión oficial del Banco Mundial y el FMI como desde una perspectiva crítica. Finalmente, para el periodo post neoliberal-Buen Vivir, analizamos los enfoques que dan nacimiento a la teoría del desarrollo humano y los derechos humanos, vinculados con la filosofía del Buen Vivir.

El segundo capítulo está dedicado a comprender las teorizaciones sobre la denominada "nueva pobreza urbana", en su contexto global y local. En una primera parte, realizamos una visión general del nacimiento del concepto de la nueva pobreza urbana enmarcada en el post fordismo, enfocándonos principalmente en el caso norteamericano. A continuación, examinamos cómo esta pobreza post fordista, comienza a configurar las relaciones sociales, económicas, políticas y espaciales en la configuración de las ciudades latinoamericanas. En esta sección hacemos hincapié en la relación de la pobreza con la dinámica espacial urbana, procesos de fragmentación y exclusión, así como acceso laboral, a vivienda y servicios como mecanismos que inciden y perduran las relaciones de desigualdad en la ciudad. En una tercera parte, aterrizamos estas experiencias mundiales y regionales, en el contexto ecuatoriano, realizando una revisión histórica y política de los procesos de urbanización y las características de la pobreza urbana en el país. Finalmente, realizamos una exposición descriptiva de los eventos políticos y circunstancias

económicas de finales del siglo XX e inicios del XXI que incidieron directamente en la constitución de la pobreza urbana actual en el Ecuador.

En el tercer capítulo describimos los motivos por los cuales hemos elegido enfocarnos en la metodología estructuralista foucaultiana de análisis del discurso y la perspectiva del Análisis crítico del Discurso de Van Dijk, para evidenciar la tesis discursiva presente en cada uno de los planes de desarrollo de los gobiernos nacionales, para posteriormente resaltar los discursos anti tesis que permiten tener una comprensión holística a dichos planes de desarrollo, sus intereses y objetivos más allá de los enunciados en función del concepto de pobreza.

El cuarto capítulo corresponde a la sección analítica del trabajo, diseñado en función de los pasos metodológicos expuestos en el capítulo anterior. Se encuentra separado en tres etapas, cada una destinada a abarcar las reflexiones sobre cada periodo de desarrollo en el Ecuador. Dentro de cada etapa, vislumbraremos los mismos elementos:

- En primer lugar, una descripción histórica contextual que brinde un piso concreto sobre el que se implantó una determinada teoría de desarrollo;
- Seguidamente presentamos la interpretación particular que el gobierno central de turno tuvo sobre la teoría de desarrollo aplicada, sus objetivos específicos y metas como gobierno.
- En el tercer acápite, enunciamos las políticas públicas, conceptos, instrumentos, programas, índices, cifras y toda información que permitiera la puesta en acción emprendida por el gobierno para acercarse a la sociedad y materializar su visión de desarrollo.
- Finalmente, con todos estos abordajes teóricos y prácticos, analizamos cómo es que la teoría de desarrollo se encarga de producir discursivamente una idealización de los sujetos que conforman la "pobreza urbana", sus características, deseos y necesidades, y conforman la población objetivo de usuarios a los que el plan de desarrollo pretende beneficiar.

Para terminar con el trabajo, presentaremos una discusión final que recopile los elementos más importantes discutidos a lo largo del texto y un acápite de conclusiones.

Capítulo 1

Marco Teórico

1.1. La relación entre la pobreza y las teorías del desarrollo: una construcción discursiva

El abordar la "pobreza" como una categoría teórica y analítica es una labor compleja y dicha complejidad, a nuestro parecer, nace de un problema incluso etimológico: la génesis del concepto y de la idea misma de "pobreza" para poder expresar una realidad a veces se manifiesta a través del espacio, la política, la economía, lo social, lo étnico racial e incluso lo espiritual; es lo que impide que su esencia pueda ser fácilmente aprehendida. El término "pobreza" es maleable, sus límites conceptuales y espacios de aplicación son tan diversos que definirla a grandes rasgos implicaría limitarla y simplificarla al punto en que sus valiosos contenidos terminarían perdiéndose.

El concepto de pobreza se encuentra generalmente referido a la carencia de unas ciertas condiciones materiales de existencia que permitan al individuo y su comunidad el desenvolverse de una manera socialmente adecuada. Diversos modelos cuantitativos para analizar y medir este tipo de pobreza, se podría debatir respecto a la construcción de los indicadores para medir la pobreza e incluso podríamos ir más allá y cuestionar la fuerte vinculación entre el poder político y económico que utilizaron a la ciencia positivista, evolucionista y funcionalista del siglo XIX para determinar las lógicas de desigualdad que configuraron la realidad actual. Si revisáramos cada teoría y postura que ha analizado las diversas apreciaciones y manifestaciones de la pobreza, terminaríamos con tantas interpretaciones como realidades existen en el tiempo y espacio social. Entonces, ¿cuál es el punto óptimo para comenzar a abordar la pobreza? ¿Dónde se encuentra el tronco de este árbol conceptual que nos permita acercarnos a las raíces de la problemática, para no perdernos en sus frondosas ramas que con el tiempo se marchitarán y darán espacio a unas nuevas dejando a nuestro esfuerzo analítico con una obsolescencia predeterminada a corto plazo? Estas preguntas generan mucho más contenido el momento en que quedan sin una respuesta definitiva por todas las nuevas inquietudes que son capaces de generar, por lo que aquí no pretendemos buscarles una respuesta, sino el explorar una de las líneas más abarcativas y explicativas que nos permiten la comprensión de un fenómeno que cuenta con las características ya mencionadas: la pobreza como una construcción discursiva.

Iñiguez (2003) explica que la relación entre el humano y la realidad solamente puede darse a partir de la construcción del lenguaje que es el que se encarga de contener a pequeñas porciones de las apreciaciones del individuo en la "imagen acústica" (palabras) para posteriormente comenzar a crear conexiones entre ellas que deriven en una explicación del entorno. El contexto, entonces, es la base que brinda los insumos para la construcción de una específica concepción de la realidad, por tanto las palabras solamente adquieren un sentido real el momento en que son comprendidas en el contexto en el que fueron formuladas, a esta relación se le conoce como *Deixis*. La palabra (o imagen acústica) no está cargada en sí de un significado, sino que es un cascarón vacío que debe ser llenado de contenidos coyunturalmente formulados. De esta manera, se comprende que el lenguaje es la esencia que determina un tipo de accionar de los sujetos el momento en que estos deben materializar sus acciones en palabras y sentidos contextualmente válidos, requiriendo formular una coherencia acción-contexto capaz de ser explicada con el lenguaje.

Una forma de operativizar la deixis es a través de lo que el autor (Iñiguez 2003) presenta como etnometodología: un acercamiento metodológico a la construcción de la realidad a partir el lenguaje que toma como marcos explicativos a las actividades prácticas, las circunstancias (contexto) y el razonamiento sociológico de una sociedad. Garfinkel (1967 citado en Iñiguez 2003) explica que los individuos producen y controlan sus escenarios cotidianos a medida que puedan crear las bases lingüísticas para explicarlos, los vuelven visibles, racionales y comunicables al punto que se convierten en las estructuras del razonamiento de una sociedad. Foucault (1969) explica que desde estas estructuras lingüísticas es que se puede apreciar lo que denomina "discurso", que, de manera muy esencial, se trata de una serie de postulados que tienen la capacidad de conectar contenidos independientes entre sí, para crearles un nuevo sentido articulado.

El contexto, según Foucault (1969), se encarga de brindar, agrupar y posibilitar la articulación de un conjunto de relaciones que conforman un discurso a través de una serie de estrategias que permite vincular unos enunciados en detrimento de otros, en una lógica que va normando la plausibilidad de las relaciones de contenidos y su aplicación. Los discursos no son espontáneos, sino que nacen siempre como un derivado histórico-espacio-temporal, desde una construcción

discursiva previa que le dio un marco de nacimiento y ciertos parámetros para su posterior desenvolvimiento.

Foucault (en Navia 2007) plantea que el discurso se logra constituir gracias a la conjunción de tres elementos: el saber, el poder y la subjetividad; los cuales forman parte de la estructura de accionar del sujeto: siendo el sujeto el que produce el discurso, luego el discurso acciona al sujeto, y así sucesivamente. La relación de este trío de elementos deben presentarse un momento y un lugar específico, en donde los contenidos del discurso (sean producidos con una mayor presencia del saber, poder o subjetividad) tengan una relación coherente con las estructuras y relaciones organizativas y valorativas de la realidad, para poder ser legitimados a través de la mediación de instituciones, normas, clasificaciones, saberes, entre otros mecanismos de producción y reproducción social. El discurso se apropia de los postulados científicos, morales, éticos cargados de poder para legitimar su veracidad y plantear su carácter de irrefutabilidad (Foucault 1976, 1992).

El discurso es aquel que se encarga de crear un vínculo entre una variable dependiente y una independiente, gracias a las relaciones de lenguaje (atravesadas por las condicionantes del contexto) para crear una explicación a la realidad, así como generar prácticas humanas. Si, por ejemplo, presentamos el caso de una persona que tiene fuertes dolores de cabeza y acude a diferentes médicos: el psiquiatra le podrá decir que su malestar se debe a estrés y le recetará un medicamento; el psicólogo afirmará que se debe a un problema emocional y le recetará terapia, y un médico shamán es capaz de afirmar que la enfermedad se debe a un desequilibrio cósmico por lo que le realizará una limpieza espiritual.

Como lo presenta Santander (2011), el discurso sirve como un puente que explica la relación entre lo subjetivo y lo objetivo, lo pensado y lo sentido. Es una explicación construida desde una teoría, un saber, un poder, etc., que puede unir en un mismo marco lógico a varios elementos que por sí mismos no tienen potencial explicativo y vinculatorio con la realidad.

Desde una postura crítica, Van Dijk (2009) resalta la importancia de tener en claro que los discursos se encargan de dar una explicación a la realidad, lo que implica el poder de construirla

y significarla. Si bien todos somos capaces de producir y modificar discursos (al menos a escala micro), son los grandes grupos dominantes quienes tienen un control generalizado en la producción de discursos ejerciendo un abuso que produce desigualdades. Los grupos hegemónicos utilizan sus capacidades y recursos para tener una influencia directa en la construcción y difusión de unos discursos diseñados para satisfacer sus intereses personales. El control sobre el discurso, implica tener el control sobre la mente de los individuos (las apreciaciones y comprensión que tienen sobre la realidad) y, por tanto, el control sobre sus acciones, lo que incluye su conocimiento personal, sus experiencias, opiniones, ideología y actitudes. El manejo del discurso es capaz de generar el tipo de historia que conocemos, nuestra concepción de ubicación en el tiempo, el tipo de interacción con los individuos, y todas las valoraciones políticas, económicas, de género, sociales, morales y éticas que constituyen nuestra comprensión de la realidad.

El discurso hegemónico (el generalizado, el promovido a grandes rasgos) se encuentra siempre detentado por las élites simbólicas de la sociedad. En cierto momento las élites que controlaban el discurso eran los grupos monárquicos, en otro momento era la nobleza, luego fueron los políticos de profesión. Estos grupos ocupan y heredan un puesto simbólico en la sociedad que les da un directo y legitimado acceso a la construcción de discursos. En el contexto de la globalización, el poder sobre el control del discurso pasó a ubicarse en las manos de quienes tienen capacidades de difusión gracias a su tenencia de recursos económicos y políticos. Los discursos dejan de ser aplicados solamente a niveles locales (contextualizados en un tiempo y espacio) para ser aplicados a niveles regionales y globales, que carecen del entorno tan necesario para que exista la *deixis*, la articulación real entre los contenidos discursivos y la realidad cotidiana (Van Dijk, 2009).

La capacidad de esparcir e imponer visiones de la realidad a partir de los discursos a niveles regionales, requiere presentarlo como una apreciación natural de la sociedad y la realidad como si se enunciara la esencia infinita e inmutable de lo humano. Naturalizar un discurso requiere el divorcio lingüístico entre los significados y el contexto que los generó, creando en los individuos un vacío de significados empíricos que es llenado por idealizaciones que acciona a los individuos en función una percepción imaginada (neutral, no política) de su contexto. Esta postura "neutral"

sobre el manejo del discurso es parte del aparataje político e ideológico que utilizan las clases dominantes, aquellas que poseen los medios de producción y comunicación, para justificar a nivel global las relaciones jerárquicas y desigualdad, como una situación ajena a su control y competencias, sino como un orden de la naturaleza (Van Dijk 2009).

Este hecho evidencia algo importante: los intereses de los poderosos grupos económicos y políticos han encontrado en el contexto de la globalización un marco discursivo (apoyado por el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación) en el que pueden expandir los límites geográficos de construcción de la deixis, para promover un proyecto discursivo aespacial y atemporal que pretende generar una serie de apreciaciones y acciones generalizadas por territorios totalmente desarticulados entre sí. No es coincidencia que justamente que en el auge de las lógicas de la globalización, haya nacido la dinámica dicotómica de los países desarrollados-subdesarrollos como un discurso político e ideológico destinado a explicar el motivo de la riqueza o la pobreza de la población por países o regiones.

Como comenzaremos a detallar a profundidad en las siguientes páginas, el discurso sobre el "desarrollo" se convierte en uno de los elementos eje de la gestión política y económica en todo el mundo alrededor de la problemática de la "pobreza" que aquejaba a cada territorio de diferente manera y por diferentes motivos históricamente y espacialmente constituidos. No obstante, se formulan unas teorías del desarrollo que pretenden abarcar y explicar de una manera muy general y poco integral, las causas de la pobreza y las formas de accionar frente a ellas desde los gobiernos centrales.

Las teorías del desarrollo se centran principalmente en dar una explicación a la situación de pobreza que se vive en los diferentes países (desarrollados y subdesarrollados) y con ello, una serie de recetas que se encargaría de solucionar el problema. La pobreza, por tanto, es la variable dependiente que se encuentra explicada y concebida de diversas maneras en los diferentes periodos temporales, gracias a la construcción discursiva propuesta por los grupos dominantes que, en este caso, se encuentran representados a través del Estado (retomando las tesis marxistas). Las teorías del desarrollo son discursos que adoptan y legitiman los Estados para promover una comprensión específica sobre la realidad del país para la creación de acciones concretas que

pretenden el abordaje principalmente de una deuda heredada: la pobreza. No obstante, tal como exponen Dorfman y Mattelart (1983) los discursos promovidos desde los grupos hegemónicos nunca tendrán la intención de vulnerar su posición privilegiada, sino de naturalizarla y perdurarla con la autorización de las grandes mayorías. Con esto podemos concluir en que la adopción y gestión de una concepción que explique la pobreza desde las teorías del desarrollo, estará determinada por una serie de contenidos teóricos explicativos que no generan transformaciones en las dinámicas estructurales que son las que mantienen la separación entre ricos y pobres, desarrollados y subdesarrollados; sino que están diseñados para el mantenimiento de las desigualdades y las dicotomías.

1.2 .La pobreza desde la marginalidad y el subdesarrollo: La teoría de la dependencia y el estado desarrollista

Tal como presentan Gudynas y Acosta (2001), la idea de “progreso” y “modernidad” se enmarcó dentro del concepto de “desarrollo” a mediados del siglo XX con el discurso del presidente norteamericano Harry Truman que presentó a Estados Unidos como un país desarrollado y avanzado cuyo deber con la humanidad consistía en guiar a los países atrasados hacia el camino del desarrollo que les permitiera mejorar sus condiciones de vida en un entorno de democracia y libertad. Un proyecto ideológico, político y económico que se comenzaría a expandir por todo el mundo.

Para la década de 1960, según Egas (1975) y Ayala (2008), el nuevo contexto económico mundial empujaba a los países a la industrialización enmarcada en el modelo imperialista de EEUU que se basaba básicamente en la creación lazos (redes comerciales y flujos de capitales) entre zonas centrales y periféricas. El gobierno nacional ecuatoriano, vislumbrando las profundas y estructurales estratificaciones sociales y económicas que rigen la sociedad ecuatoriana frenando la movilidad social, presenta un plan propone ciertos principios que rompan la estratificación. La formulación de este proyecto requirió una previa revisión teórica y empírica que diera luces para comprender las particularidades de la sociedad, economía y política ecuatoriana. De ello, podemos observar que dentro de los discursos de desarrollo ofrecidos desde la Junta Nacional de Planificación a través de sus publicaciones oficiales, que la situación de desigualdad y pobreza en el país era explicada con los conceptos de *dependencia*, *subdesarrollo* y *marginalidad*. Estos

términos devienen de las teorías sociales y económicas propias de la época y serán la base teórica para el análisis de este periodo político ideológico que implicaba a toda América Latina (JUNAPLA 1972).

La Segunda Guerra Mundial generó una nueva serie de conexiones políticas y económicas globales, principalmente mediante flujos de capitales y el comercio; que interrelacionaron a los países en nuevos modelos de comparaciones mutuas respecto a su calidad de vida, recursos, población, etc. A partir de ello comienzan a crearse relaciones de interdependencia comercial entre regiones, que conllevarían también vínculos políticos y culturales. En la década de 1960, autores como Quijano (2012, 2011), Gunder Frank (1973, 1969), Dos Santos (2002), entre otros; formulan y desarrollan la denominada Teoría de Dependencia.

Dicha teoría, exponía que en esta nueva configuración a nivel global, se recreaban una serie de relaciones neo coloniales entre los llamados países "periféricos" y "centrales": los primeros se caracterizaban por haber sido países que, generalmente, hasta el siglo pasado o el presente habían reclamado su independencia de los imperios europeos, por lo que mantenían su rol económico de producción agrícola, manufacturas, materia prima barata y el consumo de tecnología productiva externa. Mientras que los segundos, usualmente eran aquellos que tenían colonias en los países "periféricos", se posicionaban como potencias económicas debido a la concentración de excedentes de las viejas colonias, y se caracterizaban por poseer y desarrollar tecnología productiva. La gran diferencia y complementariedad entre ambos, por tanto, era el nivel de tecnología, la fuerza de trabajo en los sectores productivos y el volumen de capital de producción e inversión (Roberts 1980).

Debido a estas relaciones de complementariedad, Roberts (1980) presenta que en esta lógica de interdependencia, a cada país y región se le asigna un rol dentro de la división mundial del trabajo en función de los recursos geográficos, naturales, económicos y humanos que posea. No obstante, aquellos que por sus características no posean una producción lucrativa, poseen una dependencia económica y política con los países centrales y se les denomina "subdesarrollados". Esta dependencia se determina por los niveles internos y externos de relaciones laborales y clases socio económicas, donde las minorías dominantes y aristocráticas se centran en el sector terciario

de la economía, mientras que las clases bajas se enfocan en las labores manuales. Esta dinámica se da a nivel nacional interno, como en la interacción internacional.

Debido justamente a que los países con poca población educada tienen grandes dificultades para desarrollar e innovar tecnologías productivas, sus productos no pueden competir en el mercado extranjero pues son aplastados por la calidad superior de las mercancías de los países centrales. Las naciones subdesarrolladas, por ende, no son capaces de obtener control suficiente sobre sus propios recursos para obtener un rol de centralidad y capacidad de acumulación de capitales, perdurando así la relación de dependencia y desequilibrio económico entre un país y otro (Roberts 1980).

Debido a estas características, Gunder Frank (1969) y Dos Santos (1973) sostienen que las teorías de modernización que se instauró desde la década de los 30's (Reyes 2001, 2009) en occidente, provienen de una visión funcionalista evolucionista lineal que legitimaba el dominio de los países centrales (desarrollados) sobre los periféricos (subdesarrollados), como una consecuencia natural de las relaciones económicas y políticas; una forma de abuso por parte de los países centrales para acumular capitales a costa de los periféricos en una relación determinista mutua en donde el bienestar del uno iba en función del detrimento del otro.

Dentro del ámbito de las zonas periféricas, un país puede encontrarse en una situación de subdesarrollo, pero aun así albergar una cierta cantidad de población acomodada, frente a otra que no ha logrado acceder a los beneficios de la economía mundial industrializada, a estos se los denominó como "marginados".

Roberts (1980) afirma que la manera de comprender a las nuevas formas de pobreza dentro del concepto del subdesarrollo y la marginalidad, es a partir de la exclusión (o marginalidad) de un grupo de población a ingresos, infraestructura y servicios públicos; y se presenta de manera estructural todas las zonas subdesarrolladas debido al abrupto crecimiento espacial y demográfico de las ciudades receptoras de migración campesina-rural. De esta manera, el sujeto "marginado" se desenvuelve en un escenario de precariedad laboral, falta de acceso a vivienda, bajos o nulos niveles educativos, desnutrición, no acceso a servicios básicos (agua potable, alcantarillado, luz

eléctrica, etc.), altos índices de mortalidad, baja esperanza de vida en comparación al resto de la población, entre otros elementos. Otra situación que caracteriza a la marginalidad es su inexistente vinculación con la participación política en el país.

Según lo presentado por Cortés (2013) y Quijano (2011, 2012) la forma más drástica de la marginalidad se expresa en lo que Quijano (2011) denomina la "masa marginal", que se refiere a una población que se encuentra tan alejada de su inserción en los procesos productivos de la sociedad nacional, que ya ni siquiera puede entrar dentro del concepto marxista de *ejército industrial de reserva*, pues no cumple las funciones de mantener bajos los salarios de los trabajadores al no resultar una amenaza a los individuos empleados en un entorno altamente profesionalizado.

En una aproximación realizada por Inedes (1972) hacia la realidad de la marginalidad en América Latina, se afirma que toda la región se caracteriza enormemente por formas de marginalidad multidimensional (Cortés 2013, Quijano 2011, 2012), económicas, política y sociales, pero que además muestran un fuerte componente étnico y racial que se expresa tanto a nivel espacial, acceso a servicios-recursos y de participación social-política; lo que termina profundizando las relaciones dicotómicas y jerarquizadas expresadas en la lógica desarrollado-subdesarrollado, urbano-rural, blanco-indígena, sector primario-secundario/terciario.

Una visión más cercana al individuo marginado ha permitido que se produzca una caracterización de sus apreciaciones y modos de vida. A partir de lo que se ha denominado como "cultura de la pobreza" (Lewis 1961) se ha caracterizado a los grupos marginados como "clases populares" (Inedes 1972) pues se establece que son un tipo de población históricamente constituida, que tiene sus propios valores y aspiraciones, pero no dispone de mecanismos eficientes para concretarlos tanto a nivel individual, como en su interacción con la sociedad general. A partir de estos principios se ha establecido que el marginado posee (dentro de sus propias estructuras de pensamiento y forma de vida) los impedimentos de auto organización, participación política-social y capacidades de desarrollo individuales, que le dificultan su salida de la marginalidad. Por ello, la única forma de superar la marginalidad se presenta en la acción política desde el Estado, que debe proporcionar los medios de vinculación real y efectiva a través de una vía: la

configuración de un "plan de vida" donde a los marginados se les provea de formas de participación social para que se conviertan en los propios protagonistas del cambio social. Para ello, es indispensable la creación de lazos de solidaridad (a nivel del tejido social) y la subsidiariedad (promovido desde el Estado), ambos con el objetivo de promover el bien común en donde se reconoce la necesidad del otro para el cumplimiento del plan de vida particular (Inades 1972, Lewis 1961).

Esta forma de comprender la pobreza a partir de las nociones del subdesarrollo y marginalidad, provocaron que para la época se comenzara a utilizar ciertos índices cuantitativos para poder distinguir los niveles de pobreza en una zona o por una población. Es de allí que tanto en nuestro país, como en la región en general, se popularizó el uso del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) donde se prioriza la medición de ámbitos como la alimentación, el vestido, la vivienda y salud, que corresponden a las necesidades biológicas, así como el acceso a educación, seguridad social, trabajo y salud, que en el entorno urbano del contexto estudiado, se convierten en elementos básicos para el bienestar del individuo (Feres 2001).

Esta postura de desarrollo, planteaba una organización y rol estatal dentro del desarrollismo que requiere la concentración de poderes del Estado como el eje que promueve y regula el desarrollo. Se requería de una postura neo marxista y desde el proteccionismo keynesiano que busca desarrollar la demanda efectiva interna en términos de mercado nacional, fortalecimiento del sector industrial, e incremento de los ingresos de los trabajadores para aumentar su capacidad de consumo de la producción nacional (Reyes 2009, 2001).

1.3. La pobreza en relación con el libre mercado: La teoría de la globalización y el desarrollo neoliberal

Tras la Segunda Guerra Mundial, como lo presenta Cabrero (2000), las lógicas del capitalismo industrial que promovían un mercado mecanizado, de optimización de los recursos y uso del tiempo para aumentar rentabilidad y bajar los costos productivos, comenzaron a salirse de los límites geográficos nacionales para interferir directamente en la economía, política y administración de otros países. Los planes de desarrollo nacional de los países del recién creado "primer mundo", presenta Aguilar (2009), se percibieron como obsoletos el momento en que las

lógicas del mercado internacional comienzan a sugerir que el Estado debe ser administrado como una empresa con alcances transnacionales.

El rol del Estado centralizador del poder económico, político y administrativo, por tanto, no permitían la libertad de los flujos de capitales por todos los entornos geográficos, dificultando los desarrollos focalizados y regionales que si eran promovidos por las entidades privadas. La gestión pública del estado desarrollista industrial, se presentó como demasiado controladora y reguladora por lo que no generaría el verdadero desarrollo de la nación (Aguilar 2009, Cabrero 2000).

La transformación de los roles del Estado en función de estos nuevos intereses, fue apoyado por instancias financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Las entidades privadas a cargo del mercado financiero local y mundial, adquieren un papel directo fundamental en la vida económica, política y social de los países, a través de los flujos de capitales extranjeros, el comercio y la innovación tecnológica como los elementos sobre los cuales posar el bienestar de las poblaciones (Aguilar 2009).

Esta nueva dinámicas de Estados descentralizados promovían un desarrollo equilibrado y diseminado por todos los territorios, al contrario que el desarrollo promovido por los Estados centralizados que beneficiaban la acumulación de capital en las zonas productivas industriales (urbes), relegando a los demás espacios (rurales), negándoles elementos como seguridad social, salud, vivienda, educación, empleo formal, etc. Se generan gobiernos regionales y seccionales enfocados en abordar de manera especializada y focalizada el desarrollo de cada espacio geográfico, explotando y promoviendo la generación de empleo, servicios y emprendimientos acordes a cada contexto y las características de su población. Paralelamente, esto permitía un cambio de la democracia representativa (propia de los gobiernos centralizados) a una democracia directa y participativa (Cabrero, 2008, Méndez 2016, Rofman 2006).

Permitir a las regiones el consolidarse como entes productivos, con una administración local en el marco del desarrollo económico, político y social con miras a triunfar en las economías del mercado globalizado a nivel nacional y regional; se presenta como el paso a la "modernización"

de los países. Las ciudades dejarían de ser aquellos espacios con fuerza de atracción de capitales para brindar esta capacidad a cualquier entorno capaz de producir una innovación productiva y generar competitividad, creando tejidos socio productivos en regiones cercanas, suplementarias y complementarias a su ejercicio productivo (Méndez 2016, Rofman 2006, Turok 2004).

Toda esta nueva dinámica que buscaba la expansión mundial de la eliminación de las fronteras Estado-nacionales para el libre flujo de capitales, mercancías y servicios, fue encabezada políticamente por instancias privadas como la Organización Mundial de Comercio, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Tras haber sucumbido el "socialismo real" representado por la Unión Soviética, la fórmula neoliberalista occidental encuentra su espacio de entrada al mercado oriental con un nuevo paradigma de desarrollo mundial que lograría el eventual bienestar de los habitantes de todo el planeta a través del cumplimiento de la agenda y las recetas del desarrollo expresadas en el Consenso de Washington y enmarcado en las Teorías de la Globalización (Pradilla 2009, Carrión 2003).

Dichas "teorías de la globalización" fomentaban la integración mundial mediante vínculos económicos, aunque también toma como elemento central la vinculación cultural y políticas como las herramientas para la conformación de una comunidad internacional vinculada gracias a las mismas tecnologías de la información y comunicación, redes comerciales, consumos y políticas internas-externas; insumos y formas de vida que pretendían expandirse a lo largo de todos los rincones del mundo, materializando la integración global y desapareciendo las formas de marginalidad (Reyes 2009, Bustelo 1999).

Unir al mundo mediante las TIC, implicaba transformaciones profundas en las dinámicas económicas sociales y culturales de cada región. En lo económico, las redes de información facultarían a pequeños negocios y emprendimientos locales el poder conectarse y negociar directamente y sin restricciones con instancias privadas internacionales (comerciales o financieras), generando un entorno amigable, justo y amplio para el intercambio de productos, servicios e ideas. A nivel político, la escala Estado-nación se reorganiza político-administrativamente para facilitar dichas interacciones entre entidades de comercio. Y a nivel social-cultural, la libre circulación de información, servicios y productos, incidiría directamente

en las formas de vida de las personas, sus tipos de consumos, apreciaciones de la realidad, prácticas cotidianas, etc., derivando en la conformación de una cultura global, una cultura más homogénea (Reyes 2009, 2001).

En contra parte, Cicolella (2005) comprende a la globalización más como un proceso de expansión mundial del modelo neoliberal mediante mecanismos de privatización, la desregulación y descentralización del Estado central, la disminución de inversión pública y fortalecimiento de la disciplina fiscal, financiera y monetaria. Los medios de comunicación masivos se fusionan con la venta y compra de productos y servicios de grandes cadenas transnacionales, mientras que el consumo de los mismos, se torna en un elemento socio cultural que encarna la forma de vida de los individuos.

Este proceso, en el fondo meramente economicista, se materializa con la organización global a partir de la estandarización del uso de ciertas tecnologías productivas, enmarcados en la unicidad de la técnica, tiempo y motor de la producción. Es decir, que diversos países del mundo ocupen un rol especializado y compartido en la producción y consumo de un mismo bien (Reyes 2009, 2001, Cicollella 2005).

Vale realizar cierta puntualización. Si bien estas particularidades propias del neoliberalismo-globalización se forjaron materialmente en su totalidad con las recetas del Consenso de Washigton; este es un proceso que sentó sus bases a mediados del siglo XX. Tal como presenta Martínez (2012), para promover la estabilidad financiera, de liquidez, enfrentar la crisis financiera y arrancar con los procesos de reconstrucción de los países y poblaciones mermados por la Segunda Guerra Mundial, diversos países "vencedores" de la guerra (encabezados por Estados Unidos), crean el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (después renombrado Banco Mundial) destinado a la entrega de préstamos y libre circulación de productos a las naciones más necesitadas.

Los países "desarrollados" (involucrados en la guerra) comienzan a verse beneficiados de estos créditos, préstamos y la reducción de los precios de los productos (debido a los tratados comerciales); mientras que en América Latina de 1980, esta misma situación repercutió

negativamente por el decaimiento del modelo de producción industrial taylorista-fordista basado en la lógica de sustitución de importancias y el mercado de producción local que, nuevamente, no podían competir con los precios y calidad de los productos extranjeros ahora comercializados y producidos con la mejor tecnología e innovaciones compartidas entre las potencias económicas mundiales (Martínez 2012, Casilda 2004).

En la postura de Monares (2008) y Harvey (2005), parte vital del éxito y la expansión del proyecto neoliberal a nivel global, se debe a que fue presentado como un mecanismo no politizado ni ideologizado, sino como un proceso cuantitativo y sistemático diseñado y probado para el crecimiento económico de un país.

En ese sentido, vale resaltar que, a diferencia de otros planes de desarrollo, el proyecto neoliberal no se enfoca directamente en un abordaje a las formas de pobreza y desigualdad, sino que propone un plan de desarrollo económico que como parte de su naturaleza misma, reduciría las formas de pobreza de una sociedad.

Sin embargo, Monares (2008) sostiene que el neoliberalismo parte de una postura ideológica y política muy fuerte que ha podido desenvolverse de la manera en que lo ha hecho, debido al momento histórico en el que surgió. Plantea que esta idea de maximización de las formas de producción en un entorno liberalizado no es una propuesta ideológicamente neutral, sino que se basa en esencia en el concepto de libertad como la forma en que las personas tienen el derecho a reconocerse a sí mismos como seres virtuosos y capaces de guiar el pensamiento y las acciones de una manera razonable, emprendedora y ambiciosa para la satisfacción de necesidades y deseos. De esta manera, el individuo depende de su voluntad para explotar al máximo sus capacidades y recursos para la consecución de sus objetivos individuales a partir de la maximización de sus esfuerzos y la minimización de las pérdidas.

La economía moderna capitalista-financiera y neoliberal, basado en el mercado como el ente regulador de la misma, la distribución de recursos, producción de bienes y satisfacción de requerimientos de consumo; a nivel esencial funcionan gracias a la percepción liberal individual propia de la lógica norteamericana. Según Monares (2008) el capitalismo moderno parte de la

búsqueda por la satisfacción de las necesidades y deseos personales, va de la mano de la satisfacción de las necesidades ajenas. En este contexto, el egoísmo es considerado un elemento positivo para el bienestar colectivo, necesario e inexorable, debido a que la regulación de los precios de las mercancías, bienes y servicios de encuentran fijados por las leyes de oferta y demanda, las cuales se condicionan por la agencia de los individuos sobre el mercado mediante la su pugna y libertad de introducir nuevas mercancías y servicios al mismo. Todos tienen la oportunidad de trabajar, emprender e innovar por su bienestar autónomo y, con ello, reducir costos, proponer nuevos productos, dar empleo, descentralizar los recursos, etc.

Tal como presenta Harvey (2005) los ideólogos del neoliberalismo utilizaron una postura desde los valores e ideales de la dignidad y libertad como los ejes centrales de la civilización moderna (capitalista); conceptos que fueron bien recibidos puesto que se presentaban, como en el caso de gran parte de América Latina, después de periodos de fuertes dictaduras. Así pues, el utilitarismo se presenta como el ejercicio de la libertad fundamentada en apreciaciones que han llegado a conformarse como sentido común.

En cuanto a las formas de medir la pobreza en este periodo, podemos observar como la idea de que la "pobreza" se encuentra concentrada en ciertos sectores, las mediciones de la misma se enfocan en la localización específica de estas a partir de métodos como el NBI y encuestas de condiciones de vida, para analizar las falencias productivas y de conectividad que éstas tienen con el mercado interno y externo. Y, a partir de ello, el Estado y el sector privado se encargarían de proporcionar formas de superación de estas limitaciones a partir de créditos, préstamos y asistencias (Feres 2001).

1.4. La pobreza y los derechos humanos: La teoría del desarrollo humano en la era post neoliberal y el Buen Vivir

Los trabajos respecto a temas de igualdad, distribución y bienestar de Amartya Sen (2001, 1999) han sido algunas de las bases para la construcción de la Teoría de Desarrollo Humano (Reyes 2009), la cual expone que el desarrollo económico y social no puede centrarse únicamente a partir del mercado internacional, sino desde lo nacional y regional, pues estos son los espacios donde se materializa el desarrollo humano. Así, retorna la importancia del concepto de Estado-

nación como el eje fundamental para lograr el principal objetivo de esta postura de desarrollo: la inclusión social. Se comprende como exclusión social al no acceso efectivo a servicios y bienes directamente relacionados con la supervivencia humana en el contexto social y cultural específico, como es la alimentación, salud, vivienda, educación empleo y actividades productivas. De esta manera, la inclusión social se basa en la capacidad de que las personas tengan la oportunidad concreta de insertarse de una manera real y efectiva a los sistemas de producción, distribución y consumo con el fin de proveer la satisfacción de las necesidades a individuos, familias y grupos sociales, independientemente de sus características sociales, políticas o geográficas.

Este enfoque convergente y multidisciplinario del desarrollo humano basa sus postulados en la intención de cumplir con los derechos humanos universales expresados en primera instancia por la recién conformada Organización de las Naciones Unidas a mediados del siglo XX, principalmente referidos a los primeros artículos que establecen que el humano nace igual en dignidad y derechos independientemente de sus características sexuales, raciales, étnicas, religiosas, políticas, etc. (Reyes 2009).

Reyes (2009) afirma que los mecanismos y espacios de acción del desarrollo humano se presentan en dos elementos concernientes a nuestro trabajo: 1. El desarrollo económico se debe enfocar en la situación sub sistémica de los países, a lo interno y doméstico de los mismos. 2 Una propuesta que logre articular el ámbito de las aplicaciones macro económicas con medidas de desarrollo locales.

Para el caso de América Latina, las teorías del desarrollo pretenden enfocarse en:

- *Potenciación*, el desarrollo de la libertad de la persona en función de aumentar sus capacidades de decisión. Lo cual no puede ser ejercido por gente que se encuentra en situación de pobreza, hambre y marginalidad. Por lo que es primordial la tarea de la inclusión social.
- *Cooperación*, donde el sentido de pertenencia y solidaridad a un grupo es la base de la sensación y la construcción de la lógica del bienestar, y para la posterior constitución de

redes de estructuras sociales que van desde la familia hasta el Estado. La cooperación es lo que permite el enriquecimiento conjunto y no individual.

- *Equidad*, que no se encuentra limitada a una relación con la riqueza, sino en cuanto el humano pueda desarrollarse de igual manera, según las particularidades necesidades de cada persona o grupo. Donde, por ejemplo, una persona con discapacidad va a requerir mayores ingresos comparados, que una persona sin discapacidad para lograr el mismo desarrollo.
- *Sustentabilidad*, a partir de un desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer los recursos ambientales para las generaciones futuras.
- *Seguridad*, concebido como uno de los elementos más básicos para el bienestar, debe ser abordada para construir entornos en donde las personas no se sientan amenazadas por situaciones de delincuencia, violencia o desempleo (Reyes 2009).

En el caso ecuatoriano, los principios de la teoría del desarrollo humano se han fusionado con un movimiento ideológico latinoamericano denominado del "Buen Vivir". Gudynas (2011) y Gudynas & Acosta (2011) afirman que este concepto ha tomado relevancia dentro de los debates sudamericanos, especialmente por sus formulaciones constitucionales, como es el caso de Ecuador y Bolivia. Esta es una visión desde los "marginados" de la historia colonialista latinoamericana, donde se presenta al Buen Vivir como la oportunidad de construir una sociedad nueva orientada a la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza, reconociendo los diversos valores culturales en cada país. Por ende, se comprende que esta propuesta deviene de la revalorización de los saberes ancestrales, de aquellos grupos culturales que han sido alejados y negados de participación en la construcción de la sociedad desde las prácticas coloniales. La pluralidad y diversidad cultural que conforma el Buen Vivir requiere de procesos de "hibridación" entre las diferentes posturas críticas al desarrollo que permita unificar lo tradicional y lo moderno, fomentando la construcción y el fortalecimiento de identidades en donde todos tienen participación en la constitución de la realidad (Gudynas y Acosta 2011). En este aspecto, los pueblos indígenas andinos aportan a la definición del término a través del Sumak Kaway que, según la cosmovisión indígena, la noción del desarrollo, como un ámbito temporal no existe, puesto que conciben el tiempo de forma cíclica, no lineal. Esto hace referencia a que al mirar al frente, estamos echando una revisión al pasado, donde lo que seremos

depende de quienes fuimos. Esta visión resalta la importancia del "nosotros", en vez del "yo" que resalta el capitalismo neoliberal (SENPLADES 2009, Ibarra 2010).

Independientemente de si se establece como el Sumak Kawsay ecuatoriano o el Suma Qamaña boliviano, este es un concepto en construcción que evidencia las limitaciones y errores de las anteriores "teorías del desarrollo", cuestionando la concepción mono cultural, unitemporal, unilineal y unicausal del concepto tradición del progreso y desarrollo, que ha invisibilizando a toda forma de expresión que no forme parte del discurso y práctica hegemónica, categorizando a los países en la categoría de desarrollados o subdesarrollados (Gudyna 2011, SENPLADES 2009, Ibarra 2010). Una visión de progreso contenida en el ethos que forma parte del origen de la modernidad europea, en donde la naturaleza debía ser dominada y manipulada, que establece esa dicotomía occidental entre lo humano y lo salvaje (Gudyna 2011). En esencia, el Buen Vivir no reconoce, por tanto, la divisiones dicotómicas que deben ser resultados (como riqueza-pobreza), por lo que no promueve el desarrollo desde allí, sino que promueve el desarrollo como un mejoramiento social en permanente construcción y reproducción. En tanto, los principios de ideológicos y de acción del Buen Vivir se manifestarían en:

- Descolonización de saberes, que consiste en respetar, reconocer y aprovechar la diversidad de saberes; rompiendo con las relaciones de poderes dominantes. Se pretende la creación de una epistemología de conocimientos legítimos y consecuentes con la realidad que permitan reconfigurar la dinámica política, social y económica del país.
- Superar la racionalidad de manipulación e instrumentalización que buscaba el aprovechamiento y explotación máxima de la naturaleza, para convertirlo en medios para conseguir el fin de una vida de bienestar y equilibrio.
- Vocación orientada al encuentro, diálogo e interacciones de diferentes saberes para reemplazar las ideas hegemónicas europeas dentro de nuestras concepciones acerca del progreso y desarrollo
- Promover una concepción de la naturaleza como algo que es interno a nosotros y nosotros internos a esta, por lo que se debe reconceptualizar la idea occidental de dominar a la naturaleza.

- Comunidades políticas ampliadas que den cabida y voz a todos los actores sociales y sus formas de expresibilidad política (Gudyna 2011).

-

Para finalizar, de manera puntual la propuesta del Buen Vivir en la constitución ecuatoriana del 2008 y en los planes de SENPLADES se define como:

...la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno —visto como un ser humano universal y particular a la vez— valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros— entre diversos pero iguales— a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido» (Ramírez 2008, 387 en SENPLADES 2009, 10).

Paz y Miño (2015) nos muestra como el rol del Estado ecuatoriano en el periodo de la “Revolución Ciudadana” se concentró en el fortalecimiento del aparato tributario, esto en función de satisfacer las necesidades cuantitativas y cualitativas de la población, dentro de los principios y el marco del Buen Vivir. Por tanto, los aparatos para medir la situación de pobreza, no solo se han concentrado en los aspectos de acceso a servicios e infraestructura, sino al nivel de “bienestar” del individuo, conjuntamente con los estudios de NBI y encuestas de condiciones de vida.

Capítulo 2

Marco analítico sobre la pobreza urbana en su contexto global y local

2.1. La nueva pobreza urbana: una revisión general

Para la década de 1970 en EEUU, el desempleo de larga duración llegó a cifras nunca antes vistas, donde los principales afectados eran los habitantes de los slums y guettos en ciudades grandes como Chicago y Detroit.² Estos espacios urbanos albergaban una población mayormente obrera que a pesar de no tener abundantes recursos económicos, sus ingresos les permitían cubrir sus necesidades básicas (Wilson 1996). Sin embargo, la especialización productiva, el aumento de movimiento e inversión de capital financiero y el desarrollo tecnológico impulsaron nuevos procesos de industrialización envueltos de la dinámica post fordista (Soja 2000) reestructurando el rol de las ciudades en los procesos productivos dentro del contexto de la globalización, marcando una tajante división espacial y social del trabajo; de la mano de estas transformaciones se requería una particular especialización educativa y de competencias laborales de acuerdo a las necesidades de las reformadas industrias. Quienes no podían afrontar estos cambios geo económicos y socio laborales, se veían sumidos en una emergente forma de empobrecerse, la cual se ha manifestado de formas abruptas en las zonas industriales que solían estar determinadas laboralmente por las industrias enmarcadas dentro las dinámicas del fordismo clásico. A esto se le conoce como la "nueva" pobreza urbana.

La dinámica del "fordismo clásico" presentaba que la rentabilidad de una industria dependía de su localización estratégica en un punto que redujera las externalidades y optimizara las ganancias concentrando todas sus operaciones productivas en un mismo espacio. Así, por ejemplo, una ensambladora de automóviles se situaba en una zona industrial cerca de los fabricantes de tornillos, de vidrios, placas metálicas, etc., para reducir los costos del transporte de insumos. En la misma planta trabajan tanto los obreros que manejan la maquinaria, como técnicos de control

² Para David Harvey (Giddens 2009, Harvey 2014) el espacio urbano es un entorno creado para el adecuado desarrollo de capitalismo industrial, en donde las transformaciones sociales, espaciales, económicas y políticas se encuentran determinadas por los movimientos de capital a partir de los intereses de los grandes dueños del aparato productivo. Harvey (2014) hace especial énfasis en resaltar los efectos devastadores que las contradicciones del capitalismo tiene para las sociedades, sobre todo en las poblaciones que, por varios motivos, están destinados a la pobreza: desempleo, áreas degradadas, ausencia de servicios, zonas periféricas, entornos inseguros, ocupación ilegal, etc.

de calidad, los diseñadores de autos, los inversores de la industria y los dueños de la misma. La organización y determinación del uso del espacio requerían de una minuciosa planificación (racionalista) de la cual se encargaba el Estado central enmarcado en el modelo keynesiano, instancia competente de garantizar el equilibrio tanto en el bienestar de las empresas privadas y de la población trabajadora (Abramo 2011).

El sistema post fordista viene de la mano de la globalización, los flujos internacionales de capitales, información y conocimientos, imponiendo un modelo industrial en donde la rentabilidad ahora se encontraba en la deslocalización de los procesos productivos: los diseñadores de autos se encontraban en oficinas en Los Ángeles-EEUU, las placas de acero y tornillos se producirían en China, el automóvil se ensambla en Argentina y los dueños de la industria viven en Alemania. Cada nueva zona productiva se encargaría de especializarse en una labor puntual y específica dentro del proceso productivo (Soja 2000, Wilson 1996).

De esta manera, las industrias “tradicionales” que determinaron el diseño de las ciudades norteamericanas³ desde principios de siglo XX cierran y se trasladan a otro lugar dejando a la población que la circundaba y dependía económicamente de su contratación, en el desempleo. Así también, la fracturación y repartición espacial de los distintos procesos productivos volvía obsoletas a varias profesiones y conocimientos, gran parte de los obreros ya no eran requeridos para la producción o sus conocimientos no tenían el suficiente nivel de especialización para realizar las nuevas tareas (Abramo 2011).

Las altos índices de desempleo debilitaban los lazos internos en una comunidad y disminuían el valor de renta del suelo transformando a los barrios obreros en un sitio marginal social y económicamente, donde existen pocas estrategias para garantizar ingresos monetarios.

Comienzan a generarse actividades ilícitas y delincuenciales, grupos como pandillas emergen y

³ Las ciudades industrializadas en el modelo fordista y tayloristas priorizaban los diseños urbanísticos que optimizaran la variable espacio-tiempo. La construcción de redes viales, la ubicación de zonas residenciales, infraestructura educativa, de salud, de alimentación, entretenimiento y administrativo-política se emprendían en función de reducir los tiempos de traslados de la población entre un punto y otro, así como minimizar los costos en transporte, combustible, mantenimiento vial, etc. Esto derivaba en la constitución de ciudades compactas en donde pueda medirse y generalizarse un manejo del tiempo y con ello el establecimiento de jornadas laborales propicias, horarios de entrada y salida, tiempos de descanso, entre otros aspectos (Abramo 2011).

se fortalecen al integrar a niños y niñas que asisten a las escuelas, seduciéndolos de diversas maneras. La peligrosidad aumenta y la estigmatización sobre éste espacio hace que los pequeños negocios quiebren y se interrumpa la inversión privada, situaciones que dificultan todavía más la búsqueda de empleo y la posibilidad de generar un puesto de trabajo. Quienes pueden salir de estos lugares y radicarse en un sitio de mayores posibilidades, suelen vincularse al mercado laboral por medio de los servicios, en empleos de baja remuneración y sin beneficios de seguridad social, o en el sector informal. El barrio poco a poco se transforma y se consolida en un área híper degradada (Soja 2000, Wilson 1996).

Estas áreas degradadas, tal como lo manifiestan los estudios de Katzman y Retamoso (2005) y Sabatini (2006), además producen procesos de segregación espacial que coadyuvan a profundizar la desigualdad social y la intensidad de la pobreza, así como la mayor acumulación de riqueza en las zonas residenciales de alta renta. La segregación se encarga de fraccionar el tejido social a través de diversas maneras: en sí por una distanciamiento territorial considerable entre las clases bajas y las acomodadas; a través del auto enclaustramiento residencial de las poblaciones acomodadas en conjuntos residenciales cercados y altamente vigilados; y hasta a través de la construcción de murallas que separan territorial y simbólicamente a los barrios bajos de los barrios altos, como es el caso del "Muro de la Vergüenza" en Lima y otros países (Vega 2017).

Los barrios habitados por población en situación de informalidad económica, reciben poca atención de las autoridades públicas, las fuerzas del orden, los negocios y emprendimientos, lo que consolida su situación de segregación incluso a nivel institucional, por lo que es común que la atención y control del espacio sea tomado por sus propios habitantes y, comúnmente, se transforman en escenarios de actividades ilegales, como el tráfico de droga (Davis 2004, Katzman 2001, Gassul 2017).

En los diversos trabajos etnográficos de Wacquant (2008, 2011) en EEUU y Europa podemos observar las devastadoras consecuencias de la degradación de barrios que terminan convirtiéndose en guetos. Todas las formas de marginalizaciones, exclusiones sociales y económicas se manifiestan por medio de la segregación que puede tomar cara de discriminación racial, étnica y monetaria. El autor afirma, que el espacio "barrio" tiene un significado cívico, un

simbolismo que representa a sus habitantes. El hecho de dejar degradar su entorno solamente manifiesta una aceptación de su población a adoptar un sentido de inferioridad social, ciudadanos de segunda indignos de la intervención estatal para la regeneración urbana.

Castells (1974) y Harvey (2013) afirman que en esta situación de constantes degradaciones de los espacios urbanos, los mercados inmobiliarios han adquirido una enorme importancia al momento de transformar la ciudad. Debido a alianzas del Estado y grupos financieros, las políticas que regulan el avance de las industrias post fordistas y el empobrecimiento de las zonas urbanas son pocas e incluso nulas, han permitido que el sector de la construcción tome las riendas de la planificación y crecimiento urbano.⁴

A nivel global, este nuevo modelo de producción generó una enorme expansión del mercado internacional, aumento de la movilidad poblacional, donde las ciudades del primer mundo se convierten en simples nodos de paso de capital financiero y comercio, desapareciendo la lógica preestablecida de centro-periferia, donde el empleo se centra básicamente en el sector terciario y el financiero (De Mattos 2006, Davis 2004).

Cabello (2013) afirma que el establecimiento de tratados como de los derechos humanos y la conformación de organizaciones como las Naciones Unidas, cumplía el rol de socializar y relevar el concepto de "libertad" en las interacciones humanas. Este fue uno de los detonantes para la expansión de la producción post fordista a nivel mundial. El neoliberalismo se convirtió en el ente ideológico, político y económico que promulgaba el concepto de libertad basado en la libre circulación de capital y productos, lo que configuró una serie de políticas económicas y promovió la firma de tratados de libre comercio en relación de dependencia entre los centros financieros y los productivos.

⁴ Según Harvey (2013) este proceso se da, generalmente, de la siguiente manera: El empobrecimiento de los barrios reduce la plusvalía y la renta de los mismos, se abarata el costo del suelo a precios atractivos para los inversores que en determinado momento inyectarán de capital privado al barrio. Los altos costos de vida que se generarían, impedirían que los residentes puedan mantenerse en sus viviendas y terminarían siendo expulsados, concretándose el proceso de gentrificación. La población saliente se hundirá aún más en su situación de pobreza, trasladándose a otro barrio hiper degradado dentro del casco urbano o en la periferia.

Las ciudades del "capitalismo global", como las denomina Cicolella (2005), se ven en la necesidad de presentarse como una mercancía, un espacio propicio para la inversión internacional que inyecte algo de capital en el entorno y permita el desarrollo económico de la comunidad al explotar algún tipo de potencial atractivo para que en ella se establezca alguna de las partes de los procesos productivos. La construcción de la ciudad comienza a darse de forma espontánea, poco planificada y en función de los intereses temporales de los inversionistas extranjeros, imponiéndose un cambio de paradigma de planificación que cambiaba la lógica racionalista del diseño, por la de los intereses del libre mercado.

Este ascenso del capitalismo financiero en un marco de libre mercado, como lo presenta De Mattos (2016), significó para los países del primer mundo el fracaso del modelo de Estado de bienestar keynesiano fordista, donde, entre otras cosas, el Estado central va perdiendo recursos, legitimidad y control sobre los procesos de inversión y producción de ciudades, para pasar la posta al desarrollo de los intereses más locales, específicos y privados determinados por las redes comerciales que los territorios lograran crear nacional e internacionalmente. Este "ajuste estructural" estaba guiado por el capital financiero bancario que al fin encontraba un campo sin restricciones burocráticas ni mayores fronteras político administrativas que frenaran su pretensión y naturaleza expansionista.

Los sistemas bancarios se modernizaron con el fin de aumentar sus capacidades operativas a escala regional y mundial (principalmente en función del capital crediticio y ficticio) creando poderosas redes entre los mercados de valores que fueron produciendo diferentes jerarquizaciones en función de las capacidades de flujos de los respectivos nodos ubicados en las ciudades globales, que se iban convirtiendo en espacios de acumulación de capital y, por tanto, generadores del efecto de atracción poblacional. La abundancia de capital promovió la inversión en pasivos inmobiliarios, enormes crecimientos urbanos dentro del paradigma de la "destrucción-creativa" que cambiaban drásticamente la valorización del suelo y del suelo edificable (debido al drástico aumento de la demanda de vivienda, servicios e infraestructura) profundizando las desigualdades sociales previas y generando unas nuevas manifestadas principalmente en enormes complejos residenciales privados en contraparte a grandes zonas degradadas (De Mattos 2016).

Estas polaridades en cuanto al desenvolvimiento urbano durante el fordismo y el post fordismo, corresponden a las dinámicas que Harvey (2014) denomina como desarrollos geográficos desiguales, lo cual concibe como la piedra angular para la reproducción del capitalismo y las desigualdades sociales. Afirma que el paisaje geográfico capitalista no es un producto pasivo, sino un agente siempre cambiante que evoluciona a la par de las formas de acumulación de capital que generan los avances tecnológicos que reducen los costos que implican el espacio y tiempo.

Mientras que la lógica del Estado keynesiano busca acumular capital de manera permanente en los espacios (lo que implica servicios, vivienda e infraestructuras varias) como medio para garantizar el desarrollo y bienestar social, la lógica del libre mercado requiere que el capital se encuentre en constante movimiento por los territorios, concentrándose temporalmente en ciertos espacios y ciertas personas. La implementación de nuevas tecnologías e innovaciones productivas tomarían el rol de deslocalizar y mantener los capitales en permanente flujo. Comprendiendo que no todas las etapas de los procesos productivos producen una misma rentabilidad para quienes trabajan en ellas, unas zonas siempre acumularán mayor capital que otras, lo que consolida y perdura la relación de desigualdad (Harvey 2014).

A lo largo de estas breves páginas hemos dado un contexto que dé cuenta a grandes rasgos de las transformaciones urbanas, las tecnologías productivas y el rol de la globalización del neoliberalismo financiero en los países industrializados del "primer mundo" y cómo esto tuvo un impacto directo en la constitución de la desigualdad y la pobreza en las ciudades. El capitalismo necesita de la reproducción de sus modelos de desarrollos asimétricos como la base de su mantenimiento y fortalecimiento de grupos privados. El bienestar de los habitantes urbanos queda a merced de los caprichos y azares del libre mercado y las capacidades que los individuos tengan para vincularse en éste. Las zonas marginadas y degradadas, envueltas en el desempleo, delincuencia, ilegalidad, informalidad, la falta de recursos, servicios, educación y oportunidades de activación económica formal se osifican al cuerpo de la ciudad central que concentra los recursos regionales. Si bien, justamente por el fenómeno de la globalización, este proceso tuvo un carácter mundial, las particularidades de cada región jugaron un rol determinante en la

configuración de la nueva pobreza urbana, como es el caso de América Latina que trataremos en el siguiente acápite.

2.2. La manifestación de la nueva pobreza urbana en América Latina

Como explican las teorías de la post colonialidad (como a las que se ha hecho referencia implícitamente en el acápite referido a las teorías de desarrollo dependiente), la historia de la región latinoamericana conlleva cientos de años de formas de explotación colonial que condicionaron una particular relación política, económica e ideológica dentro y fuera de sí. El crecimiento económico europeo desde los años de 1500's y, en casos, hasta la segunda mitad del siglo XX, se encontró condicionado por la explotación de materias primas provenientes de las colonias creando relaciones estructurales persistentes en el tiempo entre los países receptores de recursos y los productores (Pradilla 2014).

Las demarcadas y tajantes relaciones jerárquicas entre los colonizadores y colonizados se configuraban por complejas alquimias de estatus racial y étnico, poder político y económico, formas de ocupación del espacio, rol dentro de los procesos productivos y lugar de residencia, que no se vieron mayormente transformadas después de las luchas de independencia, sino que el rol dominante recayó sobre quienes seguían en el escalafón de mando después de las fuerzas monárquicas, tomando la posta de mantener la estratificación de la sociedad.

Hasta mediados del siglo XX, el espacio urbano latinoamericano era lugar de habitación y trabajo de las clases dominantes que se encargaban de labores políticas, comerciales y administrativas (con un cierto nivel de industrialización, dependiendo mucho de cada ciudad y país) mientras que la mayor parte del territorio y su población se asentaba en lo rural, dedicándose a la labor que habían desempeñado por cientos de años: la agricultura, pesca, ganadería, minería, entre otras actividades similares que no requerían mayor preparación ni especialización escolarizada, sino la herencia familiar de conocimientos y de insumos de trabajo. La ruralidad se configuraba como un entorno en donde no se concebía mayormente "necesaria" la presencia de infraestructuras que eran vitales en el espacio urbano (escuelas, hospitales, alcantarillado, luz eléctrica, etc.) por las mismas características del entorno y su población, por lo que la idea de "pobreza" en estas áreas se fundía con los estilos de vida y formas culturales. Por tanto, era en la relación interdependiente

entre el centro de las ciudades y sus marginalidades, en donde las diferencias de estratificaciones sociales se hacían más evidentes y la idea de "pobreza" era vinculado con la carencia de los beneficios materiales y de interacción que si gozaban los centros urbanos.

No obstante, estos vínculos interaccionales entre los individuos urbanos con los peri urbanos, comenzaron a cambiar de forma abrupta debido a las transformaciones económicas y financieras instauradas en el periodo de la post guerra a mediados de siglo XX y posteriormente, con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, propias de los procesos de globalización.

Desde las décadas de 1960-1970 la falta de regulación estatal debido al debilitamiento del modelo del Estado de bienestar permitieron que lógicas neoliberales impacten de maneras devastadoras a las economías en desarrollo que no poseían la estructura productiva industrial fordista (como si era el caso de países como EEUU), pero que de todas maneras fueron afectadas debido a su vinculación con el mercado mundial. La implementación de esta filosofía de la planificación y la modernización traída desde Europa y Estados Unidos (Gorelik 2014) en los países tercermundistas, condición general de América Latina, se materializó por medio del modelo de *sustitución de importaciones* que implicaba una concentración de recursos en la industrialización; generando enormes olas migratorias por parte de campesinos atraídos por las nuevas plazas laborales y ventajas de la "modernidad" que ofrecía la ciudad. Si bien los Estados estaban a la espera de dichas migraciones, los flujos de personas resultaron excesivos para las capacidades de dotación de gobierno, derivando en procesos de híper urbanización (formal e informal), hacinamiento poblacional, incremento drástico de la marginalidad y la pobreza, el comercio informal y del sector de servicios, degradación del espacio por contaminación ambiental, además del aumento de las brechas entre ricos y pobres en las ciudades. Para el siglo XXI, Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo, con un 80% de su población habitando en las ciudades (Davis 2004, Katzman 2001, Ziccardi 2008, Janoschka 2002, Pradilla 2014).

La gigantesca población migrante enfrenta una directa forma de marginalidad respecto a las poblaciones acomodadas en cuanto a severos casos de desempleo de larga duración, inestabilidad

económica y procesos de segregación social y espacial que suelen ser compensados con lógicas de supervivencia muy vinculadas con la informalidad (Ziccardi 2008). Esta división socio espacial genera una relación de fragmentación y segregación dentro de las urbes que modifica las concepciones de sus habitantes respecto a la interacción de las personas y el espacio, reduciendo la interacción y debilitando la integración social (Sabatini 2006), y con ello la posibilidad de implementar mecanismos de cohesión social destinados a reducir desigualdades.

Similar a lo sucedido en este periodo en los países del “primer” mundo, la inyección de capital extranjero y privado a las economías subdesarrolladas en el campo productivo industrial (principalmente para la producción de materias primas), así como la especialización de la producción, renovaron las maquinarias y tecnologías industriales de manera abrupta y desindustrializaron barrios para trasladar las operaciones a espacios que permitieran dichas renovaciones. Esto condena a los obreros industriales tradicionales (poco escolarizados) al desempleo, engrosando la población en situación de pobreza y reduciendo la clase media. Así, la competencia para acceder y mantenerse en el mercado laboral se vuelve más encarnizada y el factor educativo adquiere una creciente relevancia, donde la gente que no pueda mejorar sus destrezas, encontrará mayores probabilidades en sector terciario (Harvey 2014, De Mattos 2006, Ziccardi 2008). Durante el periodo de los 70`s y 80`s la presencia de estas poblaciones marginales se convierten en una constante de la mayoría de ciudades latinoamericanas, marcando un comportamiento urbano particular que determinó la agenda política, económica e ideológica que tenía el objetivo de abordar las especificidades de esta problemática.

Como mecanismo político económico se comienza a implementar de manera generalizada, la idea del *desarrollo* en la relación dicotómica de relaciones desarrolladas-subdesarrolladas para identificar el rol de un país dentro de las dinámicas económicas globales, así como su posición histórica en función de ser colonizados-colonizadores, demarcar las estructuras económicas basadas en el sector primario contra el secundario-terciario, así como aquellos países inversionistas internacionales y los espacios de inversión (Pradilla 2014). Así también, como lo presenta Gasull (2017) la situación de los millones de latinoamericanos que se anclaron a la situación de marginalidad desde los 70`s, implicó que necesidad de creación de “hábitat popular” o vivienda social se tomara un espacio permanente en las agendas políticas y económicas de los

países. Esta competencia fue abordada desde el Estado central durante el periodo desarrollista, pero con el paso del tiempo y el aumento de los capitales extranjeros, se pasaría la responsabilidad al sector privado.

El posicionamiento espacial, político y social de los capitales extrajeros produjeron una privatización de la ciudad a través de las inmobiliarias que se dedicaron a la producción de una urbe diseñada para el consumo barrios y condominios privados y cerrados, centros comerciales, grandes cadenas hoteleras, restaurantes y otros espacios desinados al flujo de capitales para aquellos capaces de formar parte de los círculos económicos formales. Esta "privatopolis" se encargaba de crear mayores procesos de segregación y desigualdad social al crear mecanismos que impedían a los grupos marginales su vinculación formal con la urbe a través de la adquisición legal de vivienda. Frente a ello, el Estado procuró la dotación de vivienda social, pero en función de optimizar las unidades residenciales, prioriza la cantidad a la calidad, fabricando viviendas en espacios alejados del centro urbano, con poca infraestructura (educación, salud), vialidad y fuentes de empleo lo que no asegura un mejoramiento del nivel de vida de su población, estableciendo las "precarópolis estatal" (Hidalgo 2008, 2011).

Las poblaciones dentro de estas "precarópolis" se caracterizan por su aislamiento espacial y social respecto a los centros de la ciudad central que se encuentra en permanente transformación por su relación económica con lo global. La segregación no solamente es consecuencia del afán neoliberal de la optimización del uso del suelo (reservando los espacios centrales a los mejores postores económicos), sino una expresión de la ruptura del tejido social y la individualización de la vida urbana. Produce una configuración mental y social propicia para la degradación ambiental, económica y política local que se legitima además gracias a la indiferencia de las autoridades locales y organismos de control social (como la policía) que poca o ninguna atención presentan a estas zonas. Esta fractura espacial y humana provoca que los pobladores marginales no puedan acceder al consumos tecnológicos, culturales, educativos, de formas laborales, etc., que les permitiría vincularse (al menos de maneras más abstractas) al centro urbano y a sus dinámicas, por lo que las brechas entre grupos sociales ya no se limita a las condiciones materiales, sino en si a la conformación de una apreciación distinta de la misma realidad (Hidalgo 2011). Los espacios segregados, en términos de Davis (2004) se conforman en los centros de

acumulación de la población excedente de la sociedad, entornos de reunión de la "masa marginal" a la que se refiere Quijano (2011).

Esta ruptura de la relación entre la sociedad y la realidad, tal como expone Márquez (2003a, 2003b), Zibechi (2015) y Adler (1977) implica varios efectos. De manera general, esta sensación de ser la población "sobrante" de la sociedad, crea procesos de estigmatización tanto desde afuera como desde adentro: el grupo segregado comienza a auto identificarse como tal y rechaza todo aquello que implique la intervención de cualquier entidad de control público externo, produce sus propias formas de organización interna que se generaliza por la una actitud hermética que homogeniza las manifestaciones culturales, políticas, económicos, ideológicas e incluso religiosas dentro del espacio. Las lógicas de supervivencia de los marginales requieren de una mayor capitalización de las relaciones familiares y comunales, de solidaridad, confianza, sociabilidad, manejo de valores y las prácticas cotidianas llenas de rituales y simbolismos que expresan una identidad colectiva local que se crea por una realidad material y simbólica distinta. La complejización de las formas de manifestación y constitución de los espacios de pobreza y de pobres urbanos requirió un abordaje más integral respecto a la relación entre los marginales con la sociedad hegemónica general, superando las barreras de la visión economicista que sesgó durante mucho tiempo a las reflexiones sobre la pobreza. Los mecanismos de creación y perduración de las formas de supervivencia de los grupos segregados conlleva la comprensión del funcionamiento de la sociedad en todo su conjunto (Bayón 2012).

Como afirma Pradilla (2014), esta premisa va en contra de la filosofía neoliberal de la globalización que busca homogenizar al planeta entero, y a sus problemáticas, para poder presentar "soluciones" generalizables y aplicables a todo contexto, con el fin de establecer una misma agenda política y económica en todas las regiones. Si bien es cierto que la situación de pobreza latinoamericana posee unas características comunes (como la pérdida del dinamismo económico por desindustrialización, aumento de la importancia económica del sector terciario y el ámbito de la informalidad, poca exportabilidad de servicios y productos urbanos, caída del nivel de consumo de sectores populares, bajo acceso a educación, salud y vivienda, desvalorización de la fuerza de trabajo asalariado, etc.), las causas de la reducción de la calidad de vida y el sometimiento a la pobreza pudieron provenir de factores externos a los locales, pero

es desde lo local, desde la micro esfera social donde las formas de pobreza y los mecanismos sociales, económicos, políticos, espaciales e ideológicos que produce, dependen totalmente de las configuraciones contextuales previas, las particularidades de su población y la trayectoria histórica de su entorno.

Tomando en cuenta esta realidad, algunos países latinoamericanos han decidido dar un vuelco a su forma unidimensional del abordaje de la pobreza y han optado por mecanismos más multidimensionales e interdisciplinario persiguiendo una propuesta de desarrollo diferente a aquella impuesta desde las generalizaciones neoliberales, para anclarse más en las particularidades y necesidades de cada territorio (Gasull 2017).

2.3. Una revisión histórica y política de la pobreza urbana en el Ecuador en siglo XX

De manera similar al capítulo anterior, en esta sección pretendemos realizar una revisión descriptiva al proceso que fue generando una particular forma de pobreza urbana, pero enfocándonos en el caso del Ecuador, abordando los grandes elementos estructurales y coyunturales, internos y externos que fueron configurando la realidad ecuatoriana dentro de los procesos de América Latina y el mundo. En determinado momento, tras presentar una visión general, iremos mencionando ciertos nombres y eventos específicos de relevancia en la política y economía nacional que posteriormente nos servirán de base para realizar las periodizaciones que estructuran la línea argumental de nuestro análisis.

Históricamente, Ecuador ha estado muy ligado a la comercialización de su producción agrícola (banano, cacao, flores) y petrolera (a partir de la década de los 70's) como principal forma de vinculación al mercado internacional. Sin embargo, su sector industrial clásico, aunque poco representativo a nivel de macro economía, ha tenido y sigue teniendo una influencia importante en desarrollo económico local, principalmente para los grupos de escasos recursos que habitan dentro del casco urbano, pero dentro de las lógicas de marginalidad urbana (Achig 1983, Kingman 2006, Pineo 1994).

La crisis fiscal iniciada durante el periodo presidencial de Eloy Alfaro, se acrecentó debido a la baja en las exportaciones por la primera guerra mundial en 1914. Para mejorar la solvencia fiscal,

el Estado se endeuda por escandalosas sumas con los bancos, nutriendo a los grupos financieros en el Ecuador. Una doctrina burguesa se ve instalada de manera fuerte en el poder (Uzcátegui 1981, Guerrero 1991).

Desde la primera mitad del siglo XIX, el sector agrícola (mediado por el sistema de hacienda), había sido el mayor pilar económico del país bajo una modalidad meramente fisiocrática. Pero ahora, con el aumento de la inversión de capital por parte de la burguesía, el sector primario iba tomando un creciente tinte capitalista e industrializado desde mediados del siglo XX, modificando las relaciones sociales, económicas y políticas hasta entonces instauradas (Striffler 2000, Guerrero 1991, Hurtado 1988). Mientras que, por otra parte, los grupos de financieros y banqueros (principalmente radicados en la costa) se iban fortaleciendo económica y políticamente gracias a la deuda que el Estado había adquirido con ellos tras la Primera Guerra Mundial.

El acelerado crecimiento demográfico de las zonas urbanas debido a las migraciones rural-urbanas de trabajadores, son una de las consecuencias directas más representativas de los procesos de industrialización de las economías. En el caso ecuatoriano, las cifras evidencian que para la década de 1950, el 71,5% de la población nacional se encontraba en lo rural; mientras que para 1980, el 50% ya se encontraba en las urbes, principalmente Guayaquil y Quito. Los imaginarios de "progreso", "desarrollo" y "modernidad" seducían a los campesinos quienes produjeron un proceso migratorio sostenido durante varias décadas. Las ciudades, incapaces de generar plazas de trabajo formal y seguro para tantos nuevos trabajadores, abandonaron económicamente a esta población, derivando en que los "pobres" de las zonas rurales, se convirtieran en los "nuevos pobres" de las zonas urbanas, quienes atestaban zonas periféricas carentes de servicios e infraestructura básica (Martínez 2007, Achig 1983, Carrión 1986, Uzcátegui 1981, Hurtado 2001).

Es durante el periodo de las crisis cacaoteras, que el barrio de Chimbacalle al sur de Quito (por ejemplo) se forjó y desarrolló gracias a la industria y el comercio⁵ sobre los terrenos de hacienda. El hecho de albergar lo que fue la primera estación de trenes de la ciudad (a principios

⁵ La formación del barrio obrero de Chimbacalle, quedó consolidado a mediados de siglo gracias a la intervención urbana de Jones Odriozola. Véase: Plan Regulador de Quito (1948) *Memoria descriptiva: Opiniones de los técnicos nacionales y extranjeros*. Quito. Municipio de Quito.

del siglo XX), la convirtió en la parada obligada para los trabajadores, maquinarias, materiales y mercancías, tanto nacionales como extranjeras, que llegaban desde el puerto en Guayaquil. Desde ese entonces, la producción industrial capitalista ha generado y dinamizado ininterrumpidamente la vida productiva del barrio y su población, atrayendo capital, implantando servicios básicos, siendo escenario para las primeras formaciones sindicales, expandiendo las redes urbanas, el transporte, etc.; situaciones que se han ido transformando en distintos de estos ámbitos con las innovaciones productivas. Fue en parte estas infraestructuras y conexiones comerciales previas, las que fortalecieron económicamente a ambas ciudades y fueron espacio predilecto para el establecimiento de los capitales financieros internacionales (Achig 1938, Kingman 2006, Cuvi 2011).

Las dinámicas de la economía agro exportadora que había determinado el desenvolvimiento del Ecuador desde mediados del siglo XIX, comienzan a transformarse estructuralmente con la irrupción del capitalismo industrial a través de la industrialización de las ciudades, la capitalización del campo, las reformas agrarias, la aplicación del modelo de sustitución de importaciones, entre otros aspectos (Larrea 1989, Crespo 2015); lo que preparó el terreno para que el Ecuador estableciera su dependencia económica en la explotación petrolera (Gordillo 2015). El oro negro otorgó una bonanza nunca antes vista en el país en términos macro económicos, pero los beneficios de dichos recursos se concentraron en el sector industrial y terciario (gracias a la nueva capacidad de crédito ecuatoriano en instituciones como el FMI y el resaltar como un país atractivo para la inversión extranjera) un proceso bicéfalo que comenzó a urbanizar al país y a la población nacional (Achig 1983, Carrión 1986, Sánchez 1984). No obstante, esto terminó por profundizar la polarización de la población en el país entre ricos y pobres, tanto en zonas rurales como las crecientes zonas urbanas (Báez 1989, Larrea 1989, Bocc 1989).

Esto se transcribe en una serie de complicaciones: sectores sociales sin servicios básicos con todos los problemas que la insalubridad acarrea, venta y tráfico ilegal de tierras, hacinamiento poblacional, incremento de la delincuencia, aumento del trabajo informal y actividades ilícitas, el estancamiento y la imposibilidad del desarrollo, entre otros (Ayala 2008).

Martínez (2007) explica cómo con la Junta Militar en los 70's se produjo una propaganda que se vendía a la gente de campo la idea de que la ciudad era modernidad, progreso-desarrollo y bienestar (centros de salud, escuelas, trabajo fijo y estable), a través de las oportunidades del consumo de lo producido industrialmente, el acceso a las tecnologías y los derechos ciudadanos. Este imaginario tuvo un profundo impacto en las poblaciones campesinas que, a través de los medios de comunicación y el contacto directo, comenzaban a verse seducidos por lo urbano, siendo un factor determinante para el arranque de los procesos migratorios.

En el caso principalmente de las poblaciones migrantes campo-ciudad proveniente de las zonas andinas del Ecuador, su organización familiar determinó que su desplazamiento a las urbes se diera con familias enteras, lo que implicaba la unidad familiar del trabajo, las lógicas de herencia y ocupación del espacio, concepciones sobre la solidaridad y reciprocidad, entre otros elementos propios del entorno rural pero que ahora se veían amenazados por las condicionantes de la urbe (Martínez 2007). Una condición que se convirtió en una barrera socio cultural que se sumaba a las económicas, educativas, espaciales, etc., que generaban y mantenían los procesos de marginalidad.

Tras el retorno a la democracia a finales de la década de 1970 (Bocch 1989), los gobiernos de tendencias de izquierda reformista (iniciando con Jaime Roldos Aguilera) quisieron adoptar el poder, pero duró poco tiempo gracias en parte a la propaganda anti comunista que se esparcía en el continente, estableciendo el inicio de la aplicación de los modelos desarrollistas y empresariales con la llegada del presidente León Febres Cordero, un declarado partícipe del proyecto neoliberal. Le seguiría Rodrigo Borja (1988-1992) que continuó con una postura de liberalización económica y reducción del estado (Paz y Miño 2015, León 2015).

Según las cifras presentadas por Cepar (1993) el aumento en las tasas de fecundidad y la reducción de los índices de mortalidad en las zonas periféricas y marginales de las ciudades, provocaron que entre una grave situación de hacinamiento población, que se sumaba a los ya presentes problemas de desempleo, falta de vivienda, servicios, contaminación ambiental y otros aspectos que se volvían cada vez más dramáticos; esto tomando en cuenta que para la década de 1990, un cuarto de la población nacional se encontraba repartida entre Guayaquil y Quito.

El "fracaso" del comunismo, con la caída del Muro de Berlín y el fin de los soviéticos, coincide con el periodo de gobierno de Rodrigo Borja, que aunque con un discurso pro Estado, no puede irse en contra de la avalancha neoliberal que se le venía; con esta "victoria" mundial del capitalismo liberal, el gobierno de Sixto Durán Ballén encuentra un momento propicio para retomar de lleno el modelo empresarial planteado años antes por Febres Cordero, consolidándolo y estableciendo un Ecuador de mercado libre, entregado a la globalización, promoviendo la propiedad privada, la privatización de servicios y la retirada del estado. Los posteriores gobiernos de Abdalá Bucarám y Fabián Alarcón se caracterizaron por el aumento a las tarifas de servicios básicos, transporte, la reducción de subsidios dentro del marco político heredado de periodos anteriores (Acosta 2006, Paz y Miño 2015).

Para 1998, el presidente Jamil Mahuad toma las riendas de un país totalmente inmerso en la lógica neoliberal, continuó con la reducción de subsidios al gas, electricidad y gasolina. La desregularización bancaria y financiera iniciada desde finales de la década de 1980, llegó a su punto de quiebre con el feriado bancario, el cierre de varias instituciones financieras y los procesos de dolarización de la moneda nacional. Tras la salida forzada de Mahuad, lo sustituye Noboa en un gobierno que trató de organizar el país en función de la nueva moneda, motivando una mayor apertura al mercado internacional e inversión extranjera (Acosta 2006, Paz y Miño 2015).

Para el 2002, Lucio Gutiérrez llega al poder con el respaldo de grupos indígenas y movimientos de izquierda, pero el coronel se declara aliado de los Estados Unidos, reactivando el desarrollismo empresarial, introdujo la flexibilización laboral por medio de la tercerización. Parte de sus últimos actos como presidente, previo a su destitución, fueron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con EEUU; pendiente que su sucesor Alfredo Palacio trataría de continuar pero no logró consolidar debido a fuertes levantamientos indígenas, grupo que había tomado mayúscula relevancia política desde el levantamiento nacional de 1990 (Acosta 2006, Paz y Miño 2015).

Durante estas casi tres décadas de la política neoliberal, el mercado y la empresa privada constituyeron el eje de la economía; el Estado se llenó de partidos políticos conformados por

grupos de familiares o aliados en negocios que se repartían los poderes según sus intereses; el gobierno central perdió gran parte de sus funciones y, como punto de partida importante para nuestro trabajo, se dio un deterioro de las condiciones de vida, trabajo, incremento de migraciones, precariedad, subempleo y aumento de la pobreza y desigualdad en proporciones abismales en la sociedad ecuatoriana (Paz y Miño 2015).

Con estos antecedentes y contexto nacional, surge el personaje de Rafael Correa con un proyecto político llamado la "Revolución Ciudadana" (que se enmarca en el tipo de proyectos descritos por Gassull 2017). Una postura que se manifiesta en contra de las lógicas neoliberales, apoyándose y promoviendo en la nueva izquierda latinoamericana. Se pretendió la recuperación de la institucionalización del Estado,⁶ se desprivatizaron numerosas instituciones relegadas al sector privado, se crearon diversos mecanismos de planificación y control, incremento de la inversión estatal y el gasto público, se crearon relaciones diplomáticas con nuevos países, aumento de la recaudación fiscal y tributaria, entre otras cosas (Paz y Miño 2015).

Todo esto se vio enmarcado en los principios del "Buen Vivir", expresados en la constitución del 2008, una filosofía de implicaciones políticas, económicas, ambientales, sociales y culturales que manifiesta que la visión desarrollista colonizadora y neoliberalista que se ha impuesto en América Latina, ha tenido efectos devastadores para la región a partir de un desenvolvimiento basado en el desarrollo económico que ha invisibilizado y pisoteado a las poblaciones nativas en función de cumplir con una agenda lineal y eurocéntrica, creando una diferenciación dicotómica que separa al mundo entre civilizados-incivilizados, progresados-retrasados, etc. En contra parte, el principio del Buen Vivir, plantea un desarrollo humano que se enfatiza en la calidad de vida expresado como un proceso de acceso a oportunidades y capacidades humanas, que pretenden la satisfacción de necesidades diversas: subsistencia, afecto, participación, libertad, identidad, recreación, etc. Esto debe hacerse a partir de una lógica de sustentabilidad que no atente contra los individuos, permitiendo la unificación del pueblo protegido por los derechos. Para ello se requiere del retorno del uso de ciertos principios del Estado de Bienestar (keynesianista), que comprende a la inversión y protección del estado como elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad (SENPLADES 2009, Cortés 2013, De Souza 2010, Quijano 2011).

⁶ Véase el Capítulo 1. "Elementos constitutivos del Estado", en la constitución nacional del 2008

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, arroja que la primera década del año 2000, existió un acelerado crecimiento del PIB per cápita de entre el 2,3% y 2,5%. El precio normal del petróleo aumentó un promedio 15,42 dólares por barril a finales de siglo, a 80,66 dólares para el año 2007, gracias a las renegociaciones y reformas en los contratos con las empresas petroleras que recuperaban gran porcentaje de las ganancias para el país. Uno de los destinos prioritarios de estos recursos, eran la inversión social en diversos ámbitos, lo que permitió un marcado descenso de los índices de pobreza y desigualdad en el país. No obstante, afirman que a pesar de este importante avance en la lucha contra la pobreza nacional, la mitad de la población rural es pobre. A pesar de que el país continúa urbanizándose, la incidencia de la pobreza urbana es del 30% (INEC 2014).

Como presentaremos con mayor detalle en el acápite a continuación, la pobreza nacional generada por la crisis económica de 1999, implicó una transformación sumamente fuerte en el escenario político, económico y principalmente ideológico, que permitiría al Ecuador convertirse en uno de los tres países de la región (junto con Bolivia y Venezuela) que forman parte de lo que Pérez (2014) denomina como *el tercer momento rousseauiano de América Latina*, refiriéndose a aquellos gobiernos de carácter progresista que se volcaron por una propuesta contra hegemónica, contra norteamericana y anti neoliberal.

2.4. La nueva pobreza urbana en el Ecuador: una revisión de la realidad contemporánea

El abordaje político-ideológico que el gobierno del "Buen Vivir" emprende en el 2007 requirió de un específico contexto político y económico previo que justificara y lograra el apoyo de las masas sociales empobrecidas y clases medias precarizadas debido a la gestión interna del gobierno nacional neoliberal, que se venía fraguando desde mediados del siglo XX y conllevaría la crisis financiera del 99.

Desde los primeros años de la década de los 90's el país había tratado de ganarse el visto bueno del Fondo Monetario Internacional para poder acceder a sus préstamos, por lo que el desarrollo nacional se configuró por la aplicación de políticas de estabilización y ajuste estructural, pre determinadas por argumentos neoliberales enmarcados en las líneas del Consenso de Washington (ILDIS 2006)

Estos elementos implicaron diversas transformaciones del rol del Estado y el crecimiento de las potestades del sector privado sobre la economía y política nacional. La desregulación bancaria local, unida a una crisis financiera en Asia y Europa, terminó en un salvataje bancario en el año de 1999, el cual golpeó fuertemente a las clases bajas y medias con el congelamiento de depósitos recortes fiscales, macro devaluación, entre otros aspectos (ILDIS 2005).

Esta crisis macroeconómica estuvo acompañada de los impactos negativos del fenómeno de El Niño que chocó con las poblaciones urbanas y rurales de la costa ecuatoriana, generando millonarias pérdidas en recursos materiales, viviendas, vialidad y producción agrícola-ganadera. Entre 1998 a 1999 la población económicamente activa pasó del 46% al 29%, reduciendo la capacidad de consumo y poder adquisitivo de la población, caída de las inversiones sociales (salud, educación, vivienda, desarrollo), aumento de la delincuencia e inseguridad y, finalmente, el deterioro de la calidad de vida. Durante este periodo, los índices de pobreza ascienden enormemente (se calcula que entre 1990-2001, la pobreza nacional aumenta en un 80%), aunque no de manera homogénea en todo el territorio, sino focalizado en ciertas zonas (principalmente en aquellas de escaso capital financiero y captaciones de inversiones extranjeras). Se comienza el siglo XXI con un incremento de la pobreza urbana de 1,1 millones a 3,5 millones de personas, siendo la primera vez en la historia nacional que los pobres urbanos superan numéricamente a los rurales (ILDIS 2006, Banco Mundial 2005).

Según cifras regionales presentadas por la CEPAL, entre 1980 y el 2001 la población latinoamericana en general tuvo un incremento del 0,27% de ingreso por habitante al año, mientras que en el Ecuador se presentó un decrecimiento del -0,44% anual. En el mismo periodo, la población latinoamericana había alcanzado duplicar su capacidad adquisitiva, mientras en el Ecuador esta había caído en un 15%. La crisis económica, por tanto, no era un problema de la región, sino consecuencia del manejo interno del gobierno ecuatoriano, un elemento que produjo una enorme desconfianza de las grandes masas votantes por sus dirigentes (ILDIS 2005).

En enero del 2000 se dio un nuevo golpe. Durante la presidencia de Jamil Mahuad, el FMI aprovechó la fidelidad de los políticos ecuatorianos para establecer una serie de ajustes en

función de sus intereses. El quiebre ecuatoriano fue abordado desde la dolarización de la moneda nacional, que se presentaba como la única medida para frenar la debacle económica en la que habían caído. Muchos ecuatorianos/as pierden la esperanza y comienzan el primer gran éxodo que ha visto la historia ecuatoriana: más de 1 millón de personas (el 20% de la Población económicamente Activa) migra al extranjero, principalmente a países como Estados Unidos, España e Italia. A nivel nacional también se dieron grandes procesos migratorios que repetían la misma dinámica de los últimos 50 años: las poblaciones rurales ensanchando los centros urbanos a pesar de no tener un anclaje laboral que les asegure una inclusión "formal" a la ciudad, principalmente las ciudades grandes. El súbito incremento de la economía informal afecta laboralmente a las clases medias urbanas debido a las lógicas de competencia, creando un efecto dominó de pauperización de los salarios y condiciones de vida urbana (ILDIS 2005, Banco Mundial 2005).

Estas migraciones internas crearon una nueva población pobre urbana, caracterizada por el bajo nivel educativo de los individuos de la familia en edad laboral, pues a pesar de que la mayoría de sus miembros se constituyen en fuerza laboral (costumbre rural) la ciudad no los reconoce como tal, por lo que el sector informal se convierte en la única opción viable: entre 1997 y el 2002, la informalidad laboral nacional aumenta en un 50%, donde las mujeres tuvieron una mayor oportunidad de acceso al mercado de trabajo informal, que los hombres. Además, el ingreso de estas familias se mantiene por debajo de la línea de pobreza, profundizando las desigualdades en la sociedad general (Banco Mundial 2005).

El clima económico y político era tenso y la población se encontraba en una situación crítica. Para abordar este problema, durante los gobiernos de Gustavo Noboa (compañero de fórmula del destituido presidente Mahuad) y del Crnl. Lucio Gutierrez, se trató de implementar una nueva oleada de agenda neoliberal que promovía la firma de Tratados de Libre Comercio, principalmente con EEUU, así como la reducción de barreras arancelarias para mejorar la capacidad de consumo de las familias. Así también, se pretendía incrementar los fomentos a la innovación tecnológica productiva y reducir las dificultades burocráticas para pequeñas y grandes empresas, mejorando así su capacidad de respuesta ante los cambios y requisitos del mercado. Se esperaba que esto aumentara la empleabilidad, por lo que además se presentaron diversos

programas educativos y de capacitación para incorporar nueva mano de obra (enfocándose en aquellas poblaciones que se encontraban en la situación de pobreza más drástica). No obstante, estos ajustes son recibidos con rechazo por varios sectores poblacionales (entre los que resaltan los indígenas) por la insuficiente capacidad real que la producción nacional tiene para involucrarse y competir favorablemente en los mercados internacionales (Banco Mundial 2005, ILDIS 2006).

Durante los primeros cinco años de dolarización, Ecuador se mantuvo en una latente fragilidad económica y política. Las reformas implementadas desde el gobierno se encontraban respaldadas básicamente por los grupos económicamente poderosos ligados a los mercados financieros internacionales y la exportación de recursos primarios. Las promesas que ofreció el cambio de moneda no se habían cumplido: no hubo recuperación económica, continuaba la desindustrialización, la capacidad de consumo de las familias seguía bajando (aún a pesar de que el país recibe divisas extranjeras), los capitales aún huían del país y las tasas de interés del dólar se mantenían altas. Mientras las cifras macro económicas mostraban un favorable y sostenido aumento en cada año, la situación real de la población iba decayendo por la casi nula inversión del gobierno nacional en el sector público y el desarrollo humano (educación, salud, vivienda, etc.) debido a su preferencia por el pago de la deuda externa (ILDIS 2005).

Durante el gobierno de Alfredo Palacio (sucesor de Gutiérrez tras su derrocamiento) emerge con fuerza Rafael Correa, en ese entonces Ministro de Economía y Finanzas, quien de inmediato expresó la necesidad de replantear las relaciones del Ecuador con los organismos internacionales, una lógica diferente de la política nacional sobre endeudamiento y una reorientación de los fondos de ahorro del país, nuevos criterios sobre el pago de la deuda. La postura de Correa cautivó a los sectores políticos populares y medios, pero causó el malestar de los grupos económicos hegemónicos por la caída de 120 puntos del "riesgo-país" ante los mercados financieros internacionales, lo que implicaba una reducción del atractivo de inversión nacional. Este descontento produjo que su cargo en el Ministerio no superara los tres meses de trabajo (ILDIS 2006), pero le sirvió de impulso para catapultar su posicionamiento político para las elecciones presidenciales de 2006, en las que venció en segunda vuelta al magnate bananero Álvaro Noboa.

Rafael Correa presentaba un proyecto de país que iba en contra de las décadas de visión neoliberal, que enaltecía el crecimiento económico per sé como un mecanismo que promovería el desarrollo y la constitución de una sociedad en la que prime el bienestar, debido a los evidentes y reincidentes fracasos que este modelo había tenido en el país y la región. Su postura general, implementaba principios provenientes de la filosofía del Buen Vivir, como una medida de desarrollo alternativo (o una alternativa al desarrollo), con un modelo de Estado de Bienestar de carácter proteccionista que resaltaba la importancia de la autonomía política del Estado-nación (post neoliberalismo). De esta manera se recuperaba el rol de planificación del Estado en materia económica, sobre la cual había perdido su potestad durante décadas de gobiernos en pro del libre mercado (SENPLADES 2017).

Una vez más, la incidencia y preocupante situación de la pobreza en el Ecuador se presentó como punto central en la agenda del nuevo gobierno. La implementación de políticas de Estado (que se enfocaron en una enorme inversión pública) provocó que durante el periodo del 2006 al 2012, la pobreza nacional se redujera del 37,62% al 27,31%, principalmente en la costa en donde hubo una disminución del 52,82% al 36,99%. Estas transformaciones en los índices de pobreza se atribuyen al mejoramiento de los ingresos de los trabajadores como un aumento sustancial del salario nominal y real en la economía nacional que deviene de un crecimiento económico controlado y sostenido, así como de la adecuada redistribución de recursos y oportunidades (Burgos 2013, INEC 2016, Albornoz 2012).

Detallando, la meta del gobierno de Rafael Correa era la de erradicar la pobreza por ingresos, reducir la desigualdad del ingreso y disminuir la pobreza multidimensional de una manera sostenida y sustentable (económica, política y ambientalmente) a través de: una revolución productiva (cambio de matriz que permita abandonar la dependencia al sector primario), trabajo y empleo, ejercicio pleno de derechos humanos y del Buen Vivir, fortalecimiento de capacidades y oportunidades, así como de la participación ciudadana y poder popular. Este último elemento se considera como la piedra angular de la construcción de una sociedad justa y solidaria (SENPLADES 2017).

A lo largo de este capítulo, hemos revisado cómo cada periodo de "desarrollo", se ha conformado por una misma idea esencial (el mejoramiento de las condiciones de vida), siempre enfocándose en satisfacer prioritariamente las necesidades de los más "pobres", pero aumentando o quitando variables y proponiendo mecanismos propios para ello. Los 70's promovían fuerte inversión social (salud, educación, vivienda, etc.) e industrialización de la economía mediante el modelo de sustitución de importaciones; los 90's con su crecimiento económico y libre mercado, impulsados por instancias como el FMI y Banco Mundial; y el 2000 con su postura "alterna" al desarrollo desde el Buen Vivir en el marco del post neoliberalismo.

Desde los 70's, entonces, el desarrollo nacional y local se transforma en una medida siempre comparativa con los países ya desarrollados y siempre tras de éstos. Por motivos estructurales (como el rol económico mundial y la producción de tecnología), los países "subdesarrollados" se encuentran condenados a la marginalidad y pobreza por motivos discursivos. La globalización concibió la posibilidad de un mismo futuro homogéneo alcanzable para todos, a costa de dejar de lado la heterogenidad de los pasados locales y específicos, obviando con ello que las características históricas, culturales, sociales, espaciales, etc., se imprimen y configuran a las sociedades desde su más profunda esencia.

Los modelos e ideales del *desarrollo* se diseñaron a imagen y semejanza de las particularidades de los países del norte (principalmente EEUU), calcan el estilo de vida y los modos de pensar de la sociedad norteamericana, y arbitrariamente se la auto denominada como "desarrollada" y crean su propio alter ego de los "subdesarrollados". Elementos propios del capitalismo liberal industrial (como la democracia y la libertad individual) se expanden discursivamente como la carta de invitación a los países de economías primarias, a formar parte de ese nuevo mundo político y económico que se estaba consolidando. De esta manera, volverse parte de ese proyecto capitalista industrial implicaba entrar al club del mercado y política internacional, rehusarse significaba no obtener los "beneficios" del mismo (nótese el caso de las décadas de bloqueo económico y político a Cuba por negarse a tener un gobierno basado en la "libertad" y la "democracia").

Instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se vuelven el brazo económico, mientras que instancias como la Organización de Naciones Unidas y los Derechos

Humanos son la fuerza ideológico-política, para la expansión del modelo norteamericano por los países del sur. Los rezagos de los vínculos post coloniales revisados en el acápite anterior, se evidencian como todavía muy presentes en las relaciones locales-mundiales; donde las intervenciones políticas y económicas de espacios específicos, deben contar con la veña y legitimidad discursiva de organismos extra locales que poco o nada comprenden las particularidades del entorno de acción.

Tal como se presentó en la introducción, el "desarrollo" es un discurso de poder que encontró, por su propio contexto de origen, en las economías urbanizadas e industriales su campo de expansión. Las ciudades latinoamericanas, al igual que las norteamericanas (como las mencionadas Detroit y Chicago), ya no surgen, crecen, cambian y caen por la gestión de sus habitantes, sino por los grandes movimientos políticos y económicos de escala mundial, sobre los cuales, los poblados locales, tienen poca o ninguna ingerencia.

A partir de mediados del siglo XX, se inaugura el interés mundial por la pobreza y específicamente por la pobreza urbana. Discursivamente, el campo es y seguirá siendo lo pobre, lo primitivo y atrasado, pero la ciudad es el símbolo de bienestar, progreso y modernidad. De allí en adelante, la prosperidad de una sociedad se mide en función de elementos provenientes de lo urbano (infraestructura, servicios, ciudadanía, democracia, tecnología, etc.) como el mecanismo para legitimar y mantener el discurso de las élites políticas y económicas que lo detentan y propagaron por la región.

Capítulo 3

Metodología

3.1. El análisis de discurso y el análisis crítico del discurso desde una perspectiva estructuralista: el discurso de la "pobreza" en las teorías del desarrollo

Este trabajo inició resaltando la pertinencia de abordar a la "pobreza" como una construcción discursiva diseñada para mantener ciertas relaciones de poder y una forma específica de organización política, económica y social de las sociedades capitalistas. Los aportes de Iñiguez (2003) nos expusieron al "lenguaje" como la forma esencial de interacción entre el humano y la realidad y, por tanto, como el medio para enfrentarla y explicarla. Foucault (1969, Navia 2007) por su parte, plantea al discurso como una construcción social, contextualmente conformada, que vincula a las variables dependientes con las independientes de los fenómenos para crear una explicación coherente y colectivamente aceptada en un marco de relaciones de poder.

Finalmente, Van Dijk (2009) retoma las afirmaciones foucaultianas y se asevera que el discurso tiene el potencial de crear (imponer) en la mente de los sujetos, una forma específica de apreciar el entorno y su rol dentro de ellos, generando acciones concretas de abusos y desigualdades. En el presente acápite metodológico es importante profundizar en la temática discursiva y puntualizar cómo pretendemos implementarla. En este caso, hemos decidido realizar un abordaje desde una perspectiva constructivista estructuralista e hipotético-deductiva en el marco del análisis crítico del discurso, elementos que explicaremos a continuación.

A diferencia de los análisis semióticos que pretenden construir una metodología de comprensión directa de la objetividad del "objeto" en cuestión para descubrir sus sentidos esenciales y materializados, la perspectiva fenomenológica estructuralista no considera al objeto en sí como su centro de atención, sino en las interacciones entre varios nodos de cruce de sentidos dentro de las posibles redes de interacción social. Se considera que el humano, debido a su parcial desconexión con la naturaleza lograda gracias al uso del lenguaje, no es capaz de nombrar la esencia de las cosas, o por parafrasear a Levi-Strauss en el *Pensamiento Salvaje*: el nombre que Dios les dio a las cosas al crearlas. Por ello, el sentido de las cosas es siempre una construcción social determinada por las interacciones de dichas cosas con otras en un campo contextual específico

que se plasma en las significaciones (Abril 2007, Pereña 2007, Levi-Strauss 1994). El discurso, dentro de ésta lógica, no es más que el hilo, el trozo de red, el vínculo, que conecta un objeto con otro y les brinda un sentido compartido y construido en la complementariedad. Las palabras por si mismas carecen de un sentido propio, pero es el elemento fundamental para la constitución y organización de sentidos en la realidad a través de su vinculación discursiva que se encargan de inyectarlas de significados específicos. Los nombres de las cosas pueden cambiar, pero su capacidad organizativa y significativa del mundo se mantendrá intacta en tanto no haya una modificación en la red de discursos (Pereña 2007, Rueda 1987).

Esta visión relacional de la realidad como una estructura que no se enfoca en los contenidos en sí, sino en la interacción de elementos que construye los contenidos, deviene de la lógica más básica con la que está construida la estructura algebraica. Por ejemplificar:

- 1) $1 + 2 = 3$
- 2) $X + Y = Z$
- 3) $\& + \$ = *$

Estas tres operaciones simples guardan total coherencia lógica. No hemos utilizado los mismos contenidos para cada una de ellas (ni hemos definido su valor o significado) y sin embargo, la misma operación puede ser aplicada a todos los casos; la matemática no está interesada por lo que representan los símbolos, puesto que la importancia radica en las relaciones lógicas que están mediando entre ellos. En nuestra ilustración, son los signos de *más* (+) y los de *igual* (=) los que determinan el comportamiento y las interacciones entre los contenidos, y producen un único tipo de resultante de la relación. Estos signos que determinan la operación dan cuenta de que en la realidad existen unas estructuras lógicas que permiten sumar, restar, dividir, etc.; los signos matemáticos no son más que representaciones para materializar estas posibilidades lógicas (Parain-Vial 1969). Esta misma lógica puede ser empleada en la lingüística, aunque, como veremos, al utilizar enunciados sintácticos la operación requiere de mayores precisiones para mantener su lógica gramatical:

León macho + león hembra = crías de león

Asumiendo que el signo de *mas* (+) estuviera refiriéndose a la suma de las capacidades reproductivas de este animal en función de su complementariedad biológica para procrear y el signo de *igual* (=) expresara el resultante de esta interacción, hemos mantenido la misma estructura lógica que se expresa en las operaciones matemáticas anteriores. Esto no quiere expresar otra cosa más que independientemente de los contenidos que utilicemos, la realidad apreciable es el resultado de una serie de estructuras lógicas que se encargan de añadir, disminuir, separar, deducir, reducir, implicar, etc., los distintos contenidos que existen en ella. ¿Acaso el signo + tiene un sentido y significado propio? No. Pues tal como planteó Pereña (2006) los discursos no tienen contenidos ni significados por sí mismos, solamente se encargan de articular unos ciertos elementos (palabras).

Las funciones gramaticales, que se refiere a la capacidad de articulación lógica discursiva de una serie de contenidos, permiten que una serie de elementos posean solamente un número limitado de formas de combinación semántica para que puedan mantener el mismo sentido. Por ejemplo, si proponemos el enunciado: "*La casa de la esquina es verde*", podemos comprender su mensaje de manera clara; no obstante, podemos modificar el orden de sus contenidos sintácticos y aun así mantendríamos el sentido original:

1. *Es verde la casa de la esquina*
2. *La casa de la esquina verde es*

Sin embargo, con los elementos que poseemos no podemos realizar un mayor número de combinaciones si es que pretendemos mantener el sentido del enunciado; pues, como afirma Parain-Vial (1969), si bien el lenguaje es un depósito para todos los sentidos y expresiones posibles, la articulación de los contenidos (discursos) no puede ser realizada de manera arbitraria, sino que solamente se presenta cuando vincula de manera coherente a los elementos que posea el enunciado.

Con estos pilares teóricos centrales de la postura estructuralista, podemos comenzar a analizar cómo funciona. Si bien la visión más ortodoxa y drástica del estructuralismo podía llegar al punto reduccionista de afirmar que todo accionar y pensar humano es derivación de la estructura,

aquí pretendemos tomar las versiones estructuralistas que conceden una misma importancia a la estructura y a la agencia de los individuos (fenomenología), como lo son las posturas de Foucault y Van Dijk.

El estudio "arqueológico" de la reconstrucción epistemológica de las ciencias sociales realizado desde la lingüística por Foucault, permitió demostrar que la construcción de la sociedad va de la mano del lenguaje y, en el fondo, de las estructuras lógicas que se encuentran mediando el posicionamiento de los discursos en un tiempo-espacio particular y en una sociedad específica. Por ejemplo, el periodo renacentista de occidente inicia, a nivel epistemológico, con el reencuentro entre el humano y la naturaleza: la postura idealista del dogmatismo religioso instaurada durante siglos, planteaba que era la relación del ser con el mundo espiritual lo que configuraba al individuo y determinaba su accionar, puesto que la realidad es solo una apreciación engañosa mediada por los sentidos, lo único real era la existencia de Dios; la visión materialista que se instauró en el renacimiento, partía de afirmar que la realidad es ajena a la consciencia del sujeto y que, por tanto, tiene sus propias reglas y leyes que funcionan más allá de las apreciaciones de los individuos (Sobrevilla 1995, Marías 1980, Foucault 1969).

Para posibilitar este divorcio de la relación Dios-humano y permitir la interacción entre humano-naturaleza, fue necesario de un posicionamiento discursivo que retomó la herencia lógica euclidiana (desde la geometría) y aristotélica (causa-efecto lineal), dos visiones naturalistas que afirmaban que la realidad concreta, ajena a la consciencia humana, poseía y funcionaba bajo sus propias leyes lógicas, por tanto el humano, como parte de esta naturaleza, debía regirse bajo los mismos principios más allá de que sea consciente de ello. A partir de aquí es que las ciencias exactas y naturales adquieren (nuevamente) vital importancia para explicar la realidad natural y social, puesto que coincidía metodológica e instrumentalmente con estas intenciones de replantear y superar el discurso obsoleto del idealismo. Y dentro de ello, el álgebra se convierte en el método predilecto para proporcionar signos a la naturaleza y la explicación de cómo operan estos signos (Foucault 1968).

Esta lógica racionalista (lineal, causal y medible de la realidad) se extiende hasta convertirse en el modelo epistemológico de la época. Para la llegada del siglo XVIII la filosofía crítica al

racionalismo de autores como Hume y Kant, cuestiona el problema de la "causalidad" como el mecanismo diacrónico de producción de la realidad, para establecer a las relaciones de identidad y distinción como el eje de este proceso. La tesis y anti tesis que producen la síntesis, se ven atravesadas por la posibilidad de verse ligadas de representaciones, atribuciones, articulaciones y proposiciones ajenas a los elementos previamente constatados dentro de la causa-efecto. Es decir, se pone en tela de duda la esencia epistemológica del racionalismo aristotélico, el cual estaba diseñado para evidenciar solo un tipo de relaciones lógicas que no vislumbran los elementos subyacentes, adyacentes y paralelos que configuran la causalidad (Foucault 1968).

Esto quiere decir que en la realidad existen diversos discursos visibles, legitimados y naturalizados que se pregonan por ser el elemento de vinculación de los contenidos de la realidad. No obstante, la conformación misma de este discurso lógico, lineal y coherente, solamente pudo hacerse en función de crear procesos de división, deslegitimación, ocultamiento e invalidación de otras posibles articulaciones discursivas. Esto lo deja en claro James Scott (2000) quien demuestra que la realidad se encuentra conformada por dos tipos de discursos: el público y el oculto; el primero es el que se lo presenta a las masas, se lo discute abiertamente, se lo reforma y se naturaliza. El oculto, en contraparte, corresponde a eso de lo que no se habla, es anti tesis de la tesis, aquello que tiene la capacidad de poner en tela de duda la validez y deslegitimar al discurso público, por tanto se lo mantiene en las sombras. Es aquel que nos da cuenta que la veracidad y falsedad legitimadas, no son más que puntos de vista manipulados por quien evoca el discurso. Abordar de manera paralela esta relación esencial entre la tesis (afirmación) y la anti tesis (negación), como lo presenta Foucault (1969), es la única forma de comprender el proceso de producción de la síntesis, desde una perspectiva estructuralista. Esta dicotomía se va a presentar en los diferentes espacios de análisis por la necesidad de los contenidos y discursos de construirse en base a la diferenciación: el blanco solo existe porque existe el negro, la maldad es la otra cara de la bondad, la pobreza solamente puede comprenderse en función de entenderla como un estado opuesto complementario a lo que se entiende como no pobreza (o riqueza).

El discurso está en permanente construcción en un tiempo, un espacio y determinado por las características sociales de quienes lo enuncian y las relaciones de poder de quienes se han posicionado como los socialmente elegidos para ello. El análisis del discurso implica reconocer

esta perspectiva histórica que entiende a los discursos como mecanismos temporales de articulación de la sociedad, por lo que todo el tiempo se estarán redefiniendo y readecuando a medida que se vayan creando (voluntaria o involuntariamente) la necesidad de nuevas articulaciones. Estos momentos de ruptura entre un discurso obsoleto y la formulación de otro (*anulación sistemática de las unidades*), corresponden a momentos en donde todos los contenidos disponibles tienen la misma capacidad de entrar y salir de escena, los que encuentran una coherencia con el nuevo paradigma discursivo se establecen como los nuevos nodos de sentido y los que no, se convierten en la anti tesis, desvalorizada y metida bajo la alfombra (Foucault 1969).

No obstante, hay que tener muy en claro que el borrón y cuenta nueva que implica el rechazar un discurso agotado para imponer uno nuevo, no significa que todas las conexiones discursivas ya establecidas deban o vayan a ser rechazadas para la reinstauración, sino que se trata de una tarea de reciclaje: la sociedad no va a saltar al vacío al auto imponerse unas relaciones discursivas totalmente nuevas y sobre las cuales no se tienen ningún certeza empírica, sino que guarda ciertos elementos, conexiones e interacciones que ya conoce y sobre las que (aún) asienta confianza y certidumbre para tener un suelo firme sobre el cuál poder decidir sus futuros pasos hacia el entorno no explorado. Los elementos que aún parezcan útiles del antiguo discurso, son retomados y se desechan aquellos considerados inadecuados para la nueva articulación discursiva (Foucault 1969).

Habiendo dejando en claro estos grandes principios que guían el análisis del discurso desde el estructuralismo, hay que resaltar un último aspecto antes de comenzar a plantear las técnicas de recolección y análisis de datos. Tal como se presenta en el acápite 1.1, el punto de partida y los objetivos que persigue este trabajo nos delata como partícipes de una postura política e ideológica, debido a un motivo, vale redundar, estructural: el momento mismo en que hemos optado por realizar un análisis del discurso recurriendo a una perspectiva que saca a relucir ese *discurso oculto*, nos estamos yendo en contra de aquellas fuerzas que lo enviaron a la oscuridad y, por tanto, posicionando una postura respecto al tema y a las relaciones de poder en éste envueltas. Esta inevitable síntesis nos conduce directamente a lo que se ha denominado como el Análisis Crítico del Discurso.

Van Dijk (1999) plantea que el Análisis Crítico del Discurso (ACD), es un abordaje metodológico que vislumbra los modos en los que el poder social, político y económico que se traduce en dominio, abusos y formas de desigualdades, son producidos, practicados y reproducidos (y a veces también combatidos) a través de las construcciones discursivas. Esta postura que nace del reconocimiento axiomático de la existencia de un problema estructural que se manifiesta de diversas maneras de dominación, inequidades e injusticias en las sociedades, propone que cualquier análisis del discurso debe partir de este postulado por lo que además, es contradictorio pretender la neutralidad del investigador, quien forma parte de estas relaciones de poder y está ejerciendo una agencia política el momento en que analiza los discursos.⁷

El discurso implica poder sobre las instituciones y las personas, la capacidad de crear nociones de verdad, organizar el mundo y establecer sentidos; controlar el discurso significa controlar la mente de los sujetos y sus acciones. Por ello, el espacio de producción del discurso se convierte en un entorno de pugnas a los que solo unos privilegiados de grupos minoritarios tienen acceso. Dentro de las redes sociales y de poder, el juego de los individuos consiste en moverse entre esta telaraña hasta encontrar un espacio temporal donde puedan tener una mayor influencia sobre la producción del discurso. El *contexto* se transforma en ese escenario que impone las reglas del juego (la estructura) que anteceden y superan a la voluntad de los sujetos, pero los sujetos tienen la capacidad de moverse según sus capacidades en los diferentes espacios de ejercicio del poder e imponer unas nuevas reglas (agencia). Quien haya logrado acceder al espacio más influyente dentro de las redes, será quien posea más poder y la capacidad de imponer su visión de la realidad (Foucault 1969, Van-Dijk 1999).

Estas ideas son puntualizadas por Fairclough y Wodak (citados en Van Dijk 1999) en los ocho principios esenciales para entender al Análisis Crítico del Discurso, que serán tomados como la base de la comprensión y competencias discursivas en nuestro análisis:

⁷ No obstante, resalta el autor, la objetividad analítica no depende de la postura del autor, sino de su fidelidad al método científico, por lo que no hay que temer (mayormente) que el discurso académico sea instrumentalmente utilizado para fines políticos, sino más bien ser críticos en las formas en las que el investigador es capaz de abordar la temática de una manera adecuada que reconoce incluso que históricamente el discurso académico y científico han sido partes fundamentales de los ejercicios de poder dominante, pero así también pueden servir como medios de liberación (Van Dijk, 1999).

- 1) Trata problemas sociales
- 2) las relaciones de poder se manifiestan en los discursos,
- 3) el discurso constituye la sociedad y la cultura,
- 4) el discurso tiene un rol ideológico,
- 5) el discurso es una construcción histórica,
- 6) el discurso es un enlace directo entre el texto y la sociedad,
- 7) el análisis del discurso es interpretativo y explicativo
- 8) el discurso es una acción social (Van Dijk 1999: 185-186) .

Para comenzar a descender en nuestra construcción metodológica, queremos retomar las palabras de Santander (2011) quien afirma que no existe per sé una metodología ni técnicas para el análisis del discurso debido a sus características intrínsecas; lo que sí existe y debe ser el eje de la construcción metodológica, son una serie de principios organizativos y esquemas de trabajo que permiten abordar de manera adecuada la problemática en cuestión.

De esta manera, yendo de lo general a lo particular, el presente ejercicio investigativo se enmarca en la base hipotético-deductiva desde una perspectiva estructuralista: esto, en principio, significa que utilizaremos las hipótesis inicialmente planteadas como las guías de nuestro análisis, que limitarán las competencias reflexivas y los campos de análisis, y a partir de ellas emprenderemos una tarea deductiva e interpretativa⁸ para encontrar los mecanismos que validan o niegan las hipótesis; a esto se suma la visión estructuralista, que nos impone realizar esta validación o negación a partir de vislumbrar las estructuras binarias opuestas y complementarias (tesis y anti tesis) para encontrar y entender el resultado de esta interacción (síntesis).

Las hipótesis que guían nuestro trabajo se enfocan en varios elementos que pueden resumirse en unas ciertas apuestas centrales: los discursos sobre el desarrollo son mecanismos de dominación del Estado que utilizan el permanentemente cambiante concepto de "pobreza" como una

⁸ Interpretativa porque no se pretende una traducción del enunciado, sino comprender que dicho enunciado tiene un campo específico de nacimiento, conformación y funcionalidad que no es autónomo en sus sentidos y aplicaciones (Foucault 1969)

herramienta política para el posicionamiento de un discurso diseñado a medida de los intereses de un grupo de poder con capacidad de acceso al gobierno, en un momento histórico en que lo "urbano" y lo "ciudadano" se establece como la medida de lo rico y lo pobre.

La dicotomía respecto a lo dicho y lo no dicho sobre la pobreza en cada periodo discursivo, se convierte en la base material e ideológica para la conformación del siguiente discurso. El sujeto "pobre", por ende, es un medio de capitalización política y económica de los aspirantes al poder estatal, un actor estructuralmente necesario para mantener las polaridades en la organización social, económica y política dividida entre unos individuos "pobres" (supuestos beneficiarios toda la reorganización estatal y administrativa del país que implica la aplicación concreta de una postura del desarrollo) y otros sujetos "no pobres" (cuyos intereses se encuentran "invisibilizados", pero siempre presentes como parte del discurso oculto).

Los "pobres", por motivos ya explicados, no tienen la capacidad de acceso a la conformación del discurso, no opinan ni pueden determinar (a nivel político-administrativo e ideológico) su propia realidad ni los mecanismos para el mejoramiento de su "calidad de vida"; sino que esta tarea compete a los "no pobres", aquellos grupos que ven la realidad de la pobreza como una construcción ajena a ellos, pero sobre la cual tienen el poder de configurar pues detentan los elementos de configuración del discurso occidental moderno: las verdades "científicas" e ideológicas. Los planes de desarrollo, pensados y escritos por estos "no pobres", pretenden mostrarse como apreciaciones objetivas de la realidad, como si quienes lo formulan fueran seres omnipresentes neutrales que levitan sobre las problemáticas sociales y ofrecen mecanismos para su resolución. Pero la postura crítica del Van Dijk (1999) niega esta posibilidad y presenta a los "no pobres" como sujetos siempre presentes por su ausencia en las enunciaciones sobre el desarrollo. Los intereses, apreciaciones y principios de organización y división de la realidad es aquella anti tesis no dicha, pero nunca ausente en los discursos sobre el desarrollo. La esencia de nuestra labor metodológica y analítica, por tanto, consiste en descubrir este discurso "no dicho" para entablar las relaciones con el discurso público que nos permitirán llegar a comprender la constitución de la síntesis.

Para ello, y siguiendo la línea de Foucault (1969), debemos identificar: 1) quién o quienes tienen derecho a emplear el discurso, quienes le imprimen legitimidad y son los beneficiarios del rol jerárquico socialmente aceptado que conlleva, 2) los espacios institucionales o sociales desde los que se pregona el discurso y encuentra su legitimación y formas de aplicación. Este reconocimiento de que los discursos no son "puros" ni autónomos, sino que engloban una agencia, se denomina *función enunciativa*.

Una vez identificado esto, se debe comprender el régimen de existencia de los discursos: nacen de un lugar y momento específico que permitió, justamente, que se brinden las condiciones de su nacimiento (*campo enunciativo*); el desenvolvimiento del discurso requiere de unas ciertas instancias de delimitación que definan sus características específicas y campos de acción a través de la conformación de redes que pregonan una sola verdad (*campo asociativo*); y, finalmente, el discurso debe producir un sistema de clasificación, separación y agrupación de la realidad (Foucault 1969).

Esto en cuanto a podamos decir de cómo clasificar la génesis y las características del surgimiento del discurso, pero en cuanto a la clasificación de los discursos en función de aplicabilidad, utilizaremos el siguiente esquema:

1. Las *macro estructuras semánticas*: organizan globalmente el significado del discurso general, conlleva las "grandes verdades" y se encarga de posicionar una forma amplia y adaptable de apreciación de la realidad.
2. Los *esquemas discursivos* o *superestructuras*: brindan la primera organización y aterrizaje del discurso general para traducirse en ciertas formas prácticas, igualmente amplias y generalizadas.
3. El *significado local*: es el momento en que los discursos llegan a los espacios concretos y comienzan a generar acciones puntuales al punto en que comienzan a generar modelos mentales de apreciación de la realidad (Van Dijk 1999).

Por motivos operativos, a continuación presentamos un cuadro de sistematización de los pasos metodológicos a ser empleados que nos servirán, además, como el esquema de redacción del capítulo de análisis:

Tabla 1. Esquema de análisis del discurso de la pobreza

Principio metodológico del análisis de discurso	Definición	Aterrizaje
Función enunciativa	Quién y desde donde se enuncia el discurso centrado en la idea de "pobreza" para justificar la existencia y función del mismo.	Gobierno estatal a través de: -Junta Nacional de Planificación (Junapla) -Consejo Nacional de Modernización (Conam) -Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades)
Campo enunciativo	El contexto (local y regional) histórico, político, económico y social desde que se enuncia el discurso y se legitima una perspectiva específica sobre la "pobreza".	Periodos: -Petrolero y desarrollismo de los 70's -Neoliberalismo y globalización de los 90's -Post neoliberalismo, Buen Vivir y desarrollo humano del 2000
Campo asociativo	Las redes de sentidos que se crean en el discurso a partir de los elementos constitutivos del campo enunciativo y la función enunciativa alrededor de la "pobreza"	Este espacio es, justamente, lo que debe ser revelado con el análisis crítico del discurso desde una visión estructural: los mecanismos y relaciones discursivas

Fuente: Datos tomados de Foucault 1969

Los textos que utilizaremos para encontrar lo "no dicho" alrededor de la construcción discursiva de la "pobreza" en los distintos planes de desarrollo (constituidos por los "no pobres"), están organizados de la siguiente manera:

Tabla 2. Esquema de análisis de textos

Macro estructuras semánticas	Grandes líneas ideológicas	Planes de desarrollo y constituciones nacionales propuestas por el gobierno central en cada uno de los periodos mencionados
Esquemas discursivos	Primer aterrizaje operativo de las líneas ideológicas	Políticas públicas, objetivos puntuales de desarrollo, designación de competencias

		político administrativas y establecimiento de líneas jurídicas direccionados al tema de la pobreza
Significado local	La formulación de una aplicación puntual de los esquemas discursivos	El mecanismo en sí para el abordaje a la pobreza: bonos de desarrollo, asistencias, subsidios, reducciones tributarias, entre otros. Hay que tomar en cuenta aquí quienes son, exactamente, las poblaciones "beneficiarias": mujeres, ancianos, indígenas, etc.

Fuente: Datos tomados de Van Dijk 1999

En estos esquemas estamos vislumbrando las categorías de análisis y los textos discursivos, en los que pretendemos evidenciar los mecanismos por los cuales unos sujetos con acceso al poder del discurso y su legitimación, construyen, en un contexto específico y desde una posición particular, un determinado discurso sobre la pobreza. Con ello, establecen unas categorías entre quién es pobre (unos otros) y quienes son "no pobres" (ellos mismos) como los principios de división y organización de la sociedad, la economía y la política. Los textos a ser analizados a través del esquema de: *macro estructuras, esquemas discursivos y significado local*, nos darán cuenta del proceso de acción del discurso para llegar de la superficie abstracta e ideológica a acciones concretas de impacto directo en la sociedad.

En este punto vale recordar que nuestro interés investigativo no se encuentra en el estudio de la "pobreza" como un genérico conceptual, sino de la "pobreza urbana" como una construcción discursiva espacio y temporalmente específica. El ámbito temporal será abarcado con la trayectoria en el tiempo del término que se expresa en los distintos planes de desarrollo formulados e implementados en el Ecuador. En cuanto al aspecto "espacial" requiere cierta especificación. Naranjo (1980) afirma, en primer lugar, que es diferente hablar de "ciudad" y de "urbe": la ciudad es en sí el espacio físico, mientras que la urbe se refiere a las dinámicas ocurridas sobre dicho espacio. No todos los fenómenos "urbanos" ocurren en las ciudades, ni en todas las ciudades hay solo fenómenos urbanos. En segundo lugar, plantea que realizar estudios

urbanos requiere abordar y clarificar la diferencia entre las problemáticas DE la ciudad y EN la ciudad. La violencia, por ejemplo, no es un problema DE la ciudad, puesto que ella se puede manifestar también en el espacio rural. Por otra parte, la marginalidad es una particularidad DE la ciudad, puesto que fue en este entorno donde la problemática nace y cobra sentido en un momento específico.

De esta manera, nuestro *campo asociativo y enunciativo* (Cuadro 2) y *significado local* (Cuadro 3) deben enfocarse en posicionar las conexiones de los macro discursos del desarrollo con las problemáticas DE la ciudad y la población urbana, tanto si dichas problemáticas se presentan discursivamente como una situación estructural o coyuntural que genera/perdura la pobreza, ésta debe presentarse con unas características que la ligen íntimamente a las relaciones del sujeto con el espacio urbano.

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, obviamente utilizaremos como base a los grandes textos que expresan las ideas sobre el desarrollo y la pobreza: tales como los planes de desarrollo de cada periodo y las constituciones vigentes el momento en que éstos se establecieron como parte del proyecto del Estado. No obstante, debido a que cada plan de desarrollo tiene la capacidad de reformular las instituciones del Estado y sus instancias (a veces la pobreza es un problema de derechos, otras es económico, etc.) y cada abordaje de la pobreza se realizará desde un esfera político administrativa permanentemente cambiante, tendremos que escoger los textos que evidencien los *esquemas discursivos* y el *significado local*, según vayamos reconstruyendo las redes de significados y justificaciones (*el campo significativo*). La misma naturaleza del estudio impide que podamos pre seleccionar la bibliografía competente, sino que esta tendrá que ser identificada y escogida a medida que sea necesario para el análisis del discurso.

De esta manera, obtener la información necesaria requiere un extenso trabajo de revisión bibliográfico y de archivo para recoger todos los textos pertinentes. En este caso, no utilizaremos fichas bibliográficas o temáticas para organizar la información para su posterior análisis, puesto que nuestro análisis en sí requiere del ir descubriendo las conexiones entre los textos que vayamos encontrando y las temáticas que se vayan vinculando. Sino que nos basaremos en la organización presentada en la **Tabla 2**, que va de lo general a lo particular, para ir encontrando

los hilos cada vez más pequeños y minuciosamente entretreídos que conforman el discurso alrededor de la pobreza.

Finalmente, aclaramos que la periodización presentado para dividir los momentos discursivos en el país: desarrollismo de los 70s, neoliberalismo de los 90s y post neoliberalismo-Buen Vivir del 2000, no fue realizada en función de metodologías historiográficas, sino a manera de un periodización funcional a medida que nos permita identificar la década en el que el respectivo discurso encontró su mayor esparcimiento, desenvolvimiento y modificación de la realidad.

Capítulo 4

Un discurso de poder: la pobreza urbana y el desarrollo en Ecuador

Siguiendo el esquema presentado en los últimos párrafos del acápite metodológico, la sección analítica que ahora nos corresponde debe estar organizada a partir de sentar un contexto general de la situación económica, política, social e ideológica del Ecuador en el momento de la instauración de un respectivo discurso de desarrollo. Si bien escoger de entre las innumerables aristas que configuran una realidad nacional es una tarea minuciosa, la misma se da suficiente abasto al enfocarnos en vislumbrar los elementos de la realidad ecuatoriana que fueron resaltados y empleados para construir un entorno adecuado para la instauración de una propuesta por el desarrollo.

Cada periodo (desarrollista, neoliberal y post neoliberal-Buen Vivir) que analizaremos, se posiciona en el país tras evidencia/formular un problema de implicaciones nacionales que se ha ido construyendo por una inadecuada gestión (por motivos ideológicos principalmente) constituida históricamente por aquellos que han estado al control del gobierno nacional, conduciendo al país a una situación en donde un "cambio" en el discurso de desarrollo se presenta como inminente.

La instauración efectiva de dicho "cambio", propuesto desde las clases altas y gobernantes, requiere del apoyo de las clases mayoritarias de las sociedades subdesarrolladas: aquellas masas empobrecidas y cruzadas por las *desigualdades estructurales*, por utilizar las palabras de Fitoussi y Rosanvallon (1997), que legitiman el discurso y posicionan políticamente a un grupo hegemónico que aspira al poder estatal. Una vez afincados en el Palacio de Carondelet y con el apoyo de los grupos sociales "beneficiarios" del "cambio" ofrecido, se presentan los objetivos generales y las líneas de trabajo que guiarán el accionar del nuevo gobierno plasmados en los "planes de desarrollo", que para su materialización a veces requieren de la formulación de una nueva Constitución Nacional.

Consolidado su poder jurídico y administrativo, las nuevas competencias del Estado y la ideología de gobierno, se inicia el descenso de estos debates discursivos a formas concretas de

acción en la sociedad, hasta que (teóricamente al menos) se llega al individuo para mejorar sus condiciones de vida sumida en formas de pobreza y desigualdad por medio de los mecanismos planteados desde el gobierno. En otras situaciones, no es necesaria la reformulación de una Constitución, sino que la ya establecida es alineada con las metas de su gestión.

Es justamente esta transición entre el discurso y su materialización en una población específica lo que debemos exponer en las páginas a continuación, donde la vinculación entre el discurso de "pobreza" y la "ciudad" se presentan como siempre un eje rector para el desenvolvimiento del discurso. Para ello presentaremos la versión discursiva legítima del desarrollo proporcionada por gobierno de turno anclada en el Estado y las instituciones que le competen (lo dicho, la tesis, el discurso público), mientras que paralelamente llenaremos el vacío de lo "no dicho" (la anti tesis, discurso oculto, el contrapoder) a través de lecturas que justamente critiquen y manifiesten las luchas de poder que se encuentran tras bambalinas en la pugna por el acceso al Estado a través del manejo discursivo de una propuesta de desarrollo. Así, observaremos además, como la idea de "pobreza" se transforma de la mano de la transformación del rol de la urbe, la ciudad y la ciudadanía.

4.1. Pobreza y marginalidad urbana: el periodo desarrollista en el Ecuador de los 70's

Como veremos a continuación el periodo desarrollo de los 70's en el Ecuador, se enfoca en abordar lo que el discurso de desarrollo presenta como lo opuesto al "desarrollo", las economías primarias no industrializadas y las poblaciones carentes de servicios básicos e infraestructura necesaria para una calidad de vida deseada por el Estado. Las poblaciones rurales y más que nada las indígenas rurales, se convierten en la principal población objetivo (los "pobres") a beneficiar con el desarrollo del país, gracias a la gestión del gobierno de la dictadura militar quienes se apropiaron del dicho discurso y se posicionaron política y económicamente como los únicos capaces de llevarlo a cabo.

4.1.1 Contexto, antecedentes y justificaciones

Campo Enunciativo

Desde la segunda mitad del siglo XIX el Estado Oligárquico ecuatoriano se consolidó gracias a las acciones conjuntas de los grandes terratenientes, banqueros, comerciantes y poderes religiosos

del país. Dentro de éstos existían unos grupos de corriente más liberal y otros conservadores, cuya separación y pugna por el poder se había originado en las guerras de independencia entre los independentistas y los monarquistas. Este enclaustramiento de las fuerzas económicas y políticas estatales bipartidas se mantuvo hasta finales del siglo con la llegada de la Revolución Liberal liderada por Alfaro que posicionaría políticamente a las clases bajas trabajadoras, pequeños comerciantes, naciendo grupos de obreros y artesanos. Ante esta insurrección, las fuerzas militares tomaron partido en el juego y fueron vitales para el derrocamiento del gobierno de Alfaro y su posterior asesinato. Con la iglesia separada del Estado y la inclusión de nuevos actores al escenario político, el siglo XX de la historia nacional arranca con una aparecida oligarquía liberal que amasa su fortuna y acumula poder en función del capitalismo comercial que se iba implantando, la mayoría apostaba por las ya establecidas y rentables estructuras agrarias que se perfilaban hacia el mercado internacional, y otros, más relacionados al entorno urbano, se enfocaban en las crecientes industrias promovidas gracias al desarrollo de nuevos medios de transporte y la importación de tecnologías productivas en el Ecuador (Ayala 2008, Hurtado 1977, Espinosa 1979).

Los banqueros y comerciantes costeños (principalmente de Guayaquil) se habían fortalecido enormemente gracias al comercio de productos agrícolas, hasta que en 1925, en un contexto de crisis económica agroexportadora, un grupo de jóvenes militares progresistas derrocan al conservador y oligarca Gustavo Córdoba e instauran una Junta Militar de Gobierno, la cual pretendía crear reformas estatales de cierto carácter socialista y pro-trabajadores que dejaran de concentrar los beneficios político-legales y administrativos en los grupos poderosos; una postura que fue aplaudida y apoyada por el pueblo. Los años siguientes mantuvieron tensas pugnas políticas por el control del Estado entre las crecientes masas populares y de estratos bajos que deseaban representación, los burgueses comerciantes y banqueros costeños que ansiaban mayores facilidades para el comercio, y los latifundistas serranos que pretendían mantener el control de las tierras agrícolas y renegaban el crecimiento industrial. Para 1933 surge la figura de José María Velasco Ibarra cuya capacidad de liderazgo y carisma le ganó el apoyo de los crecientes sectores populares urbanos y logró realizar parciales alianzas con los conservadores y liberales para llegar a la presidencia, pero que durante los siguientes años se encargarían de derrocarlo tras sus reincidentes intentos de auto proclamarse dictador (con el apoyo de grupos comunistas,

progresistas y de izquierda), posicionando arbitrajes y gobiernos militares que le recuperaran terreno político a los conservadores serranos o costeños quienes para mediados del siglo XX se habían refortalecido con el inicio de la exportación del banano aprovechando las nuevas redes comerciales mundiales creadas tras al final de la II GM. Con el tercer periodo velasquista (1952-1956) se dieron algunos intentos por "modernizar" (tecnológicamente) al Estado y al país, a través de alguna inversión en infraestructura vial, educación y dotación de servicios, pero el proyecto se vio coartado con la llegada del presidente conservador Camilo Ponce (Ayala 2008, Barrera 2001). Para la década de los 60's una crisis bananera puso en jaque nuevamente al modelo agro exportador del que dependía enormemente la economía nacional. Para solventar el momento crítico se apeló a la integración latinoamericana y al pacto de nuevas formas de comercio interno. La década estuvo marcada por la industrialización del agro, fortalecimiento de los mercados financieros y crecimiento de la industria urbana, resquebrajando varias de las estructuras de poder de los hacendados serranos, dando mayor lugar a los comerciantes costeños y sectores populares. Inspirados en la Revolución Cubana, estos sectores sociales de trabajadores y artesanos intensificaron sus peticiones de representatividad política y de un cambio de modelo, eligiendo como presidente nuevamente a Velasco Ibarra, quien promoviendo la ideología anti imperialista norteamericana no pudo sostenerse en el poder, sería derrocado en 1961 y sustituido por su alterno: el banquero guayaquileño Carlos Julio Arosemena hasta 1963, momento en que se instauraría una nueva dictadura militar abierta y fervorosamente en contra del proyecto velasquista, presentándose a sí mismos como la "última esperanza de la patria" (Ayala 2008, Peñaherrera 1980).

Entre 1963 y 1966 la Junta Militar de Gobierno se consideraba a sí misma como "revolucionaria" puesto que pregonaba que se mantendría en el poder por máximo dos años, hasta reestructurar el Estado y preparar el escenario para la llegada de un gobierno verdaderamente democrático, por el bienestar de las grandes mayorías. Con estos principios se emprendió una fuerte campaña anti comunista (apoyada desde la Iglesia Católica que poseía una gran influencia en la población), y en pro del modelo de capitalismo industrial promovido por EEUU desde el norte (con la "Alianza para el Progreso") y la CEPAL desde el sur, a través de la consolidación de la industrialización de lo rural (que necesariamente vendría acompañada por una reforma agraria), crecimiento de la tecno burocracia del Estado que requería una mayor presión fiscal e impuestos al comercio

exterior, convirtiendo a las ciudades industrializadas en nuevo foco de desarrollo nacional; detonando un conflicto con los grandes comerciantes quienes orquestarían un plan en contra que terminaría derrocando a los militares. Tras la conformación de una Asamblea Constituyente se escoge a Otto Arosemena (primo hermano del ex presidente Carlos Julio Arosemena), vinculado a la derecha, como presidente interino hasta una ajustada, nueva y última victoria presidencial de Velasco Ibarra que tendría que enfrentar un gobierno inestable y lleno de conflicto hasta que en 1972 un nuevo golpe militar se asentaría en Carondelet con el mandato de General Guillermo Rodríguez Lara (Ayala 2008, Peñaherrera 1980).

El Gobierno Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas Armadas inicia su gestión con firmes intenciones de consolidar el proceso de modernización del país en el contexto de mayor bonanza económica de la historia hasta la fecha, por el inicio de la vida petrolera del Ecuador en un momento donde el precio internacional del barril se encontraba muy alto (Ayala 2008). Con un gobierno políticamente monopolizado y buena estabilidad económica, el gobierno militar tuvo la capacidad de crear un sostenido proyecto de desarrollo del Ecuador enmarcado en los principios del desarrollismo impulsado desde la CEPAL que no había podido concretarse en la dictadura militar de 1963, pero en la que ya se habían dado algunos pasos importantes para abordar la drástica situación de pobreza que yacía en el país y se iba acentuando en el espacio urbano gracias a la creciente industrialización y migraciones campesinas (Peñaherrera 1980, Hurtado 1977, Espinosa 2003).

A diferencia del proyecto de desarrollo de la Junta Militar del 63', el nuevo Gobierno Militar del 72' no requería mayormente del apoyo económico de los grupos oligárquicos y burgueses tradicionales para costear los proyectos nacionales, sino que sería el dinero del petróleo y las nuevas relaciones con los mercados internacionales y conexiones con financistas extranjeros quienes financiarían la materialización del desarrollo ecuatoriano. En el primer periodo del Estado Militar ya se habían sentado las bases para el nuevo país, pero la debilidad del mismo así como las luchas políticas que generó, no le permitió concretar adecuadamente el plan de "modernizar" la economía nacional.

A pesar de sus posturas direccionadas a disminución de pobreza y las desigualdades, la evidencia estadística muestra que este plan terminó produciendo una mayor pauperización de los niveles de vida de la población y los nuevos proletarios; debido principalmente a que el nuevo aparato productivo y la implementación de mejores tecnologías, no eran capaces de absorber la mano de obra rural y acoplarla de manera adecuada al entorno urbano. Este proceso se profundizó gracias a las fuerzas exógenas del país, que fortalecieron la acumulación de capital de pequeños grupos oligárquicos nacionales, generando una mayor brecha socio económica en el Ecuador. Por otra parte, surge una clase media multifuncional con cierto nivel de preparación que viene a ocupar puestos burocráticos en el Estado y en el mercado de servicios que trajo consigo el sector privado ahora fuertemente afianzado a la inversión en el espacio urbano (Ayala 2008, Egas 1975).

Las ciudades no se habían constituido en focos de crecimiento y desarrollo, sino de periferias de migrantes campesinos desempleados o con empleo informal que no lograban acceder a los servicios y beneficios de la "modernidad" con la que habían sido seducidos hacia la urbe y/o expulsados del campo. Esta pobreza generada desde el mismo Estado se convierte en uno de los principales campos discursivos y de acción del nuevo gobierno que reconocía el Ecuador como un país en situación de "dependencia, subdesarrollo y marginalidad" (JUNAPLA 1972).

4.1.2. El discurso del desarrollismo: la versión ecuatoriana en el marco de la dictadura militar

La "Tesis"

Como lo presenta Egas (1975) para la década de los 70's, en el marco de la globalización y bajo el control del Gobierno Revolucionario de la Junta Militar, el Ecuador actúa en contra de los intereses norteamericanos (que promovía que los países productores agrícolas y de materias primas mantengan su rol económico local por el bien de la economía mundial) pues entra de lleno en el proceso de asumir una economía que industrializaba y capitalista.

En este escenario, la reinstalada Junta Nacional de Planificación (fundada originalmente por Velasco Ibarra) del Gobierno de la Junta Militar (JUNAPLA 1972) observa y reconoce que la población ecuatoriana como una sociedad marcada por la desigualdad y baja integración en los ámbitos políticos, sociales, económicos, culturales y regionales, debido a las tajantes divisiones

entre lo urbano y rural, lo moderno y lo obsoleto, lo desarrollo y lo primitivo; entre otras dicotomías que no permiten lograr la unidad y acuerdo en un proyecto nacional (Montufar 2000). Como un rasgo general entre la región sierra y costa, se presenta una densa concentración de capital, recursos económicos y los procesos de comercialización necesarios para el desarrollo económico, en las manos de unos pocos. En contraste, enormes sectores de ecuatorianos no tienen acceso a un nivel de vida adecuado a las necesidades humanas básicas: el 7% de la población, absorbe el 50% de ingresos; mientras que el 54,2% de población en situación de pobreza, se conforma con el 9,5% de ingresos totales. El acceso a servicios es otro problema. Grandes sectores poblacionales no acceden a educación, muchas personas en edad laboral se encuentran en situación de desocupación o subocupación, lo que les dificulta el obtener un ingreso mínimo para cumplir sus necesidades básicas, aumentando la marginalidad (JUNAPLA 1972).

Frente a este contexto de desigualdad producida por una inequitativa distribución del ingreso, insuficientes oportunidades ocupacionales y laborales, poco acceso a salud, alimentación y vivienda, es que el gobierno propone el Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973-1978 (JUNAPLA 1972) que se plantea ciertos objetivos para la construcción de una sociedad más justa.

Las macro estructuras semánticas: grandes líneas ideológicas

Siguiendo con las posturas cepalinas (Prebisch 1963, 1980), keynesianas (Keynes 1933) y desde la Teoría de la Dependencia (Dos Santos, 2002; Gunder Frank, 1973, 1969), El Plan Quiquenal de Desarrollo de la Junta Militar, formulado a través de la Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA) planteó tres grandes objetivos de gobierno:

- Fortalecimiento general del país a través de una mayor **integración nacional y reafirmación de la soberanía.**
- **Mejorar las condiciones de vida** de los ecuatorianos, principalmente de aquellos **sumidos en la mayor pobreza.**

- **Expansión del aparato productivo nacional** a través de un mejor aprovechamiento de recursos naturales y **racionalización del espacio económico** que absorba mano de obra en sus diferentes niveles (Egas 1975, JUNAPLA 1972, 1979a).

El cumplimiento de estos objetivos requería un Estado interviniente, que adopte la obligación de regulación y planificación de las actividades económicas que afecten al desarrollo nacional. Con un Estado fuerte capaz de abarcar y reorganizar las estructuras económicas y políticas de la sociedad ecuatoriana a largo plazo, es posible crear un proceso orientado a la redistribución justa y sostenida (no inmediateista) de los recursos, lo que implica principalmente, limitación de los consumos reales de los grupos con mayores rentas (no satisfaciendo a los grupos especulativos y consumidores de productos suntuarios) y privilegiar el consumo de los estratos con bajos recursos (consumos dirigidos a salud, educación, vivienda, etc.) (Egas 1975, JUNAPLA 1979a, 1972).

Vislumbrado las profundas y estructurales estratificaciones sociales y económicas que rigen la sociedad nacional frenando la movilidad social, el Plan propone ciertos principios que rompan la estratificación:

- Aumentar la **participación de sectores populares** en la vida social y política del país, **democratizando la toma de decisiones.**
- **Fortalecer a las organizaciones** sociales en sus diferentes formas y niveles.
- **Expandir la oferta** de sistemas educativos que pregonan una enseñanza crítica que corresponda con la realidad que a cada grupo le corresponda vivir (JUNAPLA 1972).

En el documento: *Ecuador, estrategia de desarrollo (lineamientos)*, la Junta Nacional de Planificación (1979b), diseña los objetivos de desarrollo que el país debería cumplir como plan a largo plazo, cuya ejecución se mantendría por las siguientes décadas y cuyos resultados deberían ser concretos, permanentes y visibles para finales de milenio.

Para alcanzarlos, se resalta la necesidad de crear políticas económicas y proyectos destinados a aprovechar al máximo los focos productivos ya existentes, capaces de generar excedentes que

permitan procesos de acumulación de capital, contribuyendo de manera paralela a la capacidad adquisitiva de los estratos más bajos. Es un modelo de desarrollo que promueve el crecimiento y la distribución al mismo tiempo. Esto no solo generaría un incremento del PIB, sino un desarrollo que llegue a los sectores más bajos de la población (JUNAPLA 1972).

La meta a futuro, es integrar la economía ecuatoriana al sistema internacional a partir de estímulos para la total apertura al sistema productivo, el mercado de capital, la tecnología y la oferta extranjera, la que será atraída por nuestros recursos naturales, mano de obra abundante y barata. En contra parte, el mercado interno se enfocará en la industria con el apoyo vital de los inversionistas nacionales a los que se les otorgaría estímulos, subsidios y la posibilidad de asociación con inversionistas foráneos enmarcados en el *nuevo orden económico internacional* (JUNAPLA 1972).

La anti tesis

El gobierno de la Dictadura Militar de los 70's, tal como presentamos en un inicio, arranca su gestión reutilizando varios elementos importantes del Primer Plan Nacional de Desarrollo que los propios militares habían presentado en la dictadura del 63's (Montufar, 2001) como un proyecto de "modernizar al país" y sacarlo del "subdesarrollo". Este cambio de modelo discursivo implicó el posicionamiento de un contra poder (anti tesis) que venciera al poder hegemónico (tesis) con el fin de imponer un nuevo modelo de Estado (síntesis) cuyas previas características no permitirían abordar el problema de *dependencia* (con los mercados y países centrales), *subdesarrollo* (por el no desarrollo de la industria y la tecnología) y *marginalidad* (las periferias creadas alrededor de los centros urbanos, principalmente Quito y Guayaquil). En este juego político, son justamente estos individuos "periféricos" (los pobres urbanos) los que se convertirían en el principal elemento social que diera peso al contra poder promovido por el discurso desarrollista de los militares.

Durante décadas anteriores José María Velasco Ibarra demostró que las crecientes masas populares urbanas llegaron para quedarse y poco a poco se habían hecho un lugar relevante en la política nacional. Con el fin de la era velasquista, estos grupos perdieron a su principal caudillo y quedaron libres y listos para el apareamiento de uno nuevo. El Gobierno Militar llega y hace uso

de ellas para posicionarse políticamente de manera sólida y totalitaria, pues conquistó a estas grandes poblaciones periféricas con la promesa de "integración" al entorno urbano desarrollado y moderno, por lo que el Estado enfocó grandes de sus esfuerzos, justamente, en el beneficio de dichas poblaciones.

Ya teniendo el apoyo de la población y para aumentar el poder que venían gestando y afianzando de manera clara desde la Revolución Juliana de 1925 con los eventuales golpes de Estado e implantaciones de breves o largas dictaduras, los militares atacaron los espacios de control y poder político-económico de los hacendados serranos asegurados al modelo agro exportador a través del fraccionamiento de las haciendas e industrialización del agro e imponiendo una postura de desarrollo en pro de la industria urbana que iba creciendo poco a poco desde inicios del siglo XX con la Revolución Liberal. Los comerciantes costeños, dedicados al negocio de la importación y exportación, no tenían problema en sustituir sus intercambios internacionales de productos agrícolas y ganaderos e insumos, por el de petróleo y productos para la industria como resultado de sus alianzas con el gobierno militar, que terminaba por dar la última estocada a la existencia política y económica de los hacendados serranos (aunque éstos se fueron volcando cada vez más al capital financiero o se mantuvieron como grandes terratenientes, pero ya no en el modelo de hacienda).

El "desarrollo" y la pobreza urbana fueron el mecanismo para el posicionamiento de una nueva élite política (los militares) al lograr el ingreso del país en el capitalismo industrial, dejando atrás a la economía agraria y a todos los poderosos vinculados con ella al debilitar la dinámica política-económica interna, así como los negocios y relaciones previamente establecidas. Este cambio de manos del poder no generó una reestructuración social, sino simplemente el establecimiento de un nuevo acaparador del poder del Estado (Montufar 2000). Por otra parte, consolidar tanto la entrada al capitalismo industrial como el dominio militar, implicaba la burocratización y racionalización del Estado y de la vida humana (Weber 1923) y la aplicación de un modelo neo-utilitarista en que se deja atrás a los modelos Estatales utilitaristas controlados por las élites económicas del país, para ingresar a una nueva etapa realmente democrática en que las poblaciones tomen el control del Estado. La expansión del aparato burocrático se justifica justamente en esta idea de empoderar a los individuos y permitir que la población misma sea

quien controle los movimientos estatales. No obstante, esto encubre una realidad constante de los países subdesarrollados de la época: por la propia estructura jerárquica, cualquiera que aspire llegar al poder debe pertenecer o aliarse con los grupos de élite política y económica a través de negociaciones que conllevan intereses privados (Evans 1990).

Tal como sucedió con Velasco Ibarra, el gobierno militar utilizó como plataforma a las crecientes poblaciones urbanas en situación de marginalidad para ganar peso político y aspirar al control Estatal, pero al que nunca hubieran llegado si no se aliaban con los banqueros y comerciantes costeños⁹ o hacendados serranos. Continuando con el proyecto iniciado en el 63's, sepultaron a estos segundos con la reforma agraria y pactaron con los costeños en sus planes de posicionar al Ecuador en el comercio internacional como una nación desarrollada.

“Modernizar” el país implicaba producir tecnología, la tecnología requiere de industria y la industria se establece en las ciudades. La modernización implica directamente un proceso de urbanización como parte del eje del desarrollo y la consecución de los objetivos de democracia. Como presenta Barrera (2001) para la década de 1950 la población ecuatoriana llegaba a las 3 310 000 habitantes, de los cuales solamente el 26% eran urbanos. Para el año 2000, la población urbana sobrepasa el 60% y continúa aumentando dando cuenta del enorme proceso de urbanización que ha sufrido el país, con todas las problemáticas que eso conlleva.

El paso de una sociedad pre capitalista dedicada a la economía agraria hacia una sociedad capitalista industrial requiere muchos quiebres sociales, económicos, espaciales, políticos, etc., que justamente fueron producidos desde los primeros intentos de modernización del Estado iniciado por Velasco Ibarra, continuados por la dictadura militar en 1963 y consolidados 10 años después con la dictadura de 1972 (Barrera 2001, Montufar 2000). La dictadura militar decidió medir al Ecuador en la balanza del desarrollado-subdesarrollado, para ubicarse en un lado de ella y justificar su accionar. Los problemas de “dependencia”, “marginalidad” y “subdesarrollo” aparecieron discursivamente (y luego materialmente) por las acciones militares que comenzaron

⁹ En este punto vale señalar que dentro de la categoría de “comerciantes y banqueros costeños”, existen dos grandes grupos: unos que pertenecen a las clases dominantes tradicionales y oriundas de la zona; y otros a los migrantes árabes, italianos y judíos dedicados al comercio y las finanzas que tomarían un rol permanente en la política nacional desde entonces con reconocibles apellidos como: Mahuad, Dahik, Nebot, Bucaram, etc. (Hurtado 1977)

manifestarse desde la Revolución Juliana de 1925 en sus incesantes intentos por modificar el modelo político del país en donde ellos aparecieran como protagonistas para incursar en un entorno económico y político que no se encontraba ya ocupado en la escena nacional: la industria (que implica la fracturación del campo), reforma del Estado (centralizado) y reforma tributaria (mostrando el control del Estado por sobre los grupos privados).

Finalmente, a pesar de que el proyecto desarrollista pretendía un desarrollo endógeno del país basados en ciertos principios de la teoría de la dependencia que explicaba que los países subdesarrollados se encontraban en una situación estructural de desigualdad debido a su relación asimétrica con los países desarrollados (Reyes 2009, Quijano 2012, Gunder Frank 1969) y por tanto el Gobierno Revolucionario de la Junta Militar se sintió “revolucionario” a oponerse a la influencia norteamericana que motivaba al subdesarrollo del Ecuador; lo que realmente acabó sucediendo es que se creó una reproducción del modelo desarrollado-subdesarrollado y de la lógica centro-periferia pero a escalas micro dentro del país, donde el espacio urbano se convertía en el eje del desarrollo y las periferias en las zonas subdesarrolladas productoras de mano de obra barata, escasas en servicios básicos e infraestructura a las que se les prometía una futura inclusión al sistema formal y dominante. Volviendo a recrear las mismas prácticas coloniales que producían los países del primer mundo a los del tercero.

Dentro de los macro objetivos del Plan de Desarrollo de 1972, se encuentra la idea de “integración nacional”, a través de ciertos proyectos y políticas públicas (que abordaremos a profundidad en el siguiente acápite) que se enfocaban en otorgar derechos acordes a las características de estas masas populares que ayudaron a colocar a los militares en el poder: tales como voto a los analfabetos, aumento de oferta en educación, salud, vivienda, capacitaciones profesionales, etc. (Montufar 2001, JUNAPLA 1972a). No obstante estas incursiones, tal como expresa el término requerían de la “integración nacional”, no de la expansión, comenzando a producir un fenómeno de *colonialismo interno* (Stavenhagen 1965) que sometía a las clases pobres urbanas y futuros migrantes desde el campo a una relación colonial con los nuevos centros urbanos.

En su trabajo *Siete Tesis equivocadas sobre América Latina*, Rodolfo Stavenhagen (1965) plantea diversas críticas a las nociones desarrollistas aplicadas en América Latina. Explica que el “desarrollo” retoma las ideas coloniales de ver a una sociedad como más *avanzada* o desarrollada y a otra como *atrasada* o subdesarrollada para justificar la intromisión de la primera en la vida de la segunda como un acto en pensado en el bienestar de los atrasados. Las ciudades industriales significaban modernidad, sociedad desarrollada y avanzada que debía halar a las sociedades atrasadas agrícolas a un nuevo periodo temporal de bienestar, democracia e igualdad. Por ello, se consideraba que superar el “atraso” requería de urbanizar al país y a su población.

La *integración nacional* propuesta por la JUNAPLA (1972a) o llamada *mestificación* por Stavenhagen (1965) significaba una homogenización nacional, pero no una en donde todas las culturas, etnias y razas mezclaran simétricamente sus particularidades, sino una en donde la cultura hegemónica urbana absorbiera población migrante del campo y allí les obligara a desprenderse de sus prácticas y formas de vida rurales no acordes al nuevo entorno. Debido a la obvia falta de facultades laborales acordes a las exigencias de la ciudad, los campesinos migrantes urbanos llegaban a ocupar las zonas pobres y marginales donde debían comenzar un proceso de “urbanización de individuos” para que el Estado pudiera cumplir con la promesa de facultarles el acceso a los beneficios de la modernidad. El individuo rural se comprendía como obsoleto y primitivo, por lo que debía ser modernizado, transformado y adaptado a los nuevos requerimientos del mundo desarrollado si es que pretende incluirse en él.

Tabla 3. Síntesis de la tesis y anti tesis en el discurso desarrollista en el Ecuador¹⁰

<i>Quiebres</i>	Tesis en los 70's	Anti Tesis en los 1900's-1950
Discurso de desarrollo	Desarrollismo	No existe un proyecto de desarrollo previamente
Ideología y filosofía	Desarrollar y modernizar al país-centro urbano	Subdesarrollo por su estructura económica agraria-periferia agrícola
Rol del Estado	Poder centralizado, planificador, proteccionista, fuerte burocracia, reforma agraria, democrático	Estado controlado por las élites económicas del país

¹⁰ Vale aclarar que en este cuadro comprendemos por “tesis” al discurso legitimado en el periodo de desarrollo señalado y a la “anti tesis” como los discursos, sujetos y elementos que fueron superados y/o, en su defecto, deslegitimados con el establecimiento de la nueva postura hegemónica.

Materialización del desarrollo	Industrialización, integración nacional, racionalización de la economía	Economía basada en la exportación agrícola y de materias primas. Colonialismo interno
¿Quién se posiciona políticamente en el Estado?	Militares aliados con comerciantes costeños	Terratenientes serranos vinculados con la hacienda
¿Quiénes representan la <i>pobreza</i> ?	Población rural y peri urbana (marginal)	Todos los no pertenecientes a las clases acomodadas, criollas y urbanas
Grupos sociales beneficiarios del proyecto de desarrollo	Aquellos en proceso de inserción a la dinámica industrial urbana	Aquellos no vinculados con los intereses de industrialización

Fuente: Datos tomados del trabajo investigativo

4.1.3. Pobreza, desarrollo y Estado: políticas y campos de acción

Esquemas discursivos o superestructuras

Con la Revolución Juliana de 1925 arrancó formalmente (y violentamente) la vida política de los militares en el Ecuador. Tradicionalmente proveniente de las clases medias y bajas, conocían la realidad de pobreza y desigualdad en la que se encontraba gran parte de la población nacional y sentían una genuina empatía con ellos frente a los maltratos producidos por los grupos tradicionales de poder centrados en el comercio y la hacienda. Contando con recursos, organización e instituciones, comienzan con una campaña de carácter progresista y reformista enfocada en beneficio de las mayorías nacionales, volcándose a una alternativa de desarrollo no explorada en el país: la industria y la modernidad (Hurtado 1977).

Esta búsqueda los llevó a vincularse directamente con los planes de desarrollo (provenientes principalmente desde América del Norte) y acuerdos internacionales que fueron modificando la apreciación del futuro del Ecuador en el mundo del desarrollo y el subdesarrollo. Para la dictadura de 1963, se sientan las primeras bases para el Estado desarrollista y capitalismo industrial, principalmente a través de la Reforma Agraria, la eliminación de sistemas precarios de trabajo, reforma fiscal para eliminar y reducir los impuestos indirectos, centralizar las recaudaciones fiscales y concentrar la carga tributaria en el Estado. En 1972 el gobierno militar autodenominado revolucionario, popular, anti feudal y anti oligárquico, llega al poder con declaradas intenciones de enfrentar a los grupos social y económicamente privilegiados a favor de los más débiles (Hurtado 1977).

Las características materiales e ideológicas (democracia) provistas por las urbes "modernas" prácticamente consistían en el único modo de vida que el gobierno militar concebía como la materialización del "desarrollo" y, por tanto, la erradicación de la pobreza. Para finales de la década de los 70's, más del 40% de la población urbana nacional se encuentra en situación de subempleo, imposibilitando su acceso a misma vivienda, salud y educación. Respecto a estos últimos dos ámbitos (que eran los que más interesaban a la propuesta desarrollista) evidenciaban que el 24% de la PEA no tenía ningún nivel educativo, el alfabetismo alcanza el 26% en la población urbana de más de 15 años de edad. En cuanto salud, si bien la movilización de gran parte de la población rural hacia las ciudades permitió que se ampliara el acceso a centros médicos y con ello que se redujeran las tasas de mortalidad, las causas de muerte de menores de 1 año se relacionan con falta de infraestructura urbana o su insuficiencia: sistemas de agua potable, enfermedades bronquiales, hacinamiento, promiscuidad e higiene personal. Estos problemas se concentraban principalmente en Quito y Guayaquil, ciudades que tuvieron una explosión demográfica, donde además de pobreza también se aglutinaban mayores posibilidades y diversidad de empleo formal, de inversión y de acceso a servicios (JUNAPLA 1979). Paralelamente, las ciudades vinculadas con la producción bananera continuaban creciendo de manera acelerada y desregulada, tales como: Quevedo, Santo Domingo de los Colorados, Machala y Esmeraldas. Entre 1950 y 1974, la población nacional pasó de 3.2 millones a 6,5 millones de habitantes, de los cuales el 60% están en situación de "marginalidad", es decir, que se encuentran en situación de subempleo en áreas poco rentables y no gozan de los derechos de las poblaciones "no marginales" (Hurtado 1977).

Continuar con el plan de desarrollo industrializador basado en el Estado Centralizado se presenta como la única solución para la "marginalidad", enfocándose en ciertos puntos que determinaron la política pública y política económica de finales de los 70's e inicios de los 80's: educación, capacitación y cultura, industrialización y dotación de servicios, e integración nacional e inter regional a través del intercambio de productos industrializados.

Desde una postura asistencialista, el Gobierno Militar basa sus programas de educación en la nuclearización fundamentada de unificar el desarrollo económico y social con la participación activa en el proyecto nacional de desarrollo. En el ámbito de salud, los programas se enfocan en

la salud preventiva, vacunación, alimentación, y paralelamente se pone énfasis en el mejoramiento de los sistemas de salud pública con la construcción y mejoramiento de sistemas de alcantarillado, manejo de los desechos y recolección de basura (JUNAPLA 1979).

En cuanto a la integración nacional, se plantean políticas que busquen descentralizar y reorganizar las actividades productivas que se habían concentrado en Quito y Guayaquil, fortaleciendo otros centros urbanos para disminuir y controlar los flujos migratorios a través del mejoramiento de la oferta de empleo y servicios en cada territorio. No obstante, los sectores ya “modernizados” tenían el rol de ir consolidando procesos (como de construcción de vivienda masiva, normalización de edificaciones, dotación de servicios de transporte, agua potable, red eléctrica, etc.) sirvan de experiencias y ejemplos a seguir por las otras ciudades, además de guiar la vinculación del mercado interno hacia lo externo. De esta manera, Quito y Guayaquil adquieren la responsabilidad de crear una influencia significativa que empuje al resto del país a superar los obstáculos que impiden el desarrollo (JUNAPLA 1979).

4.1.4. Los “beneficiarios” del discurso desarrollista en el Ecuador: la pobreza urbana los 70’s

El significado local

El Gobierno Revolucionario de la Junta (dictadura) Militar, inauguró la pobreza urbana en el Ecuador, aunque con el título eufemístico de “marginalidad”. No obstante, ésta definió su identidad y carácter particular para las décadas de 1980 e inicios de los 90’s, la cual comenzaría a ser denominada y comprendida como lo que era: pobreza en las ciudades. Tal como presenta Hurtado (1977), la *marginalidad*, sobre la cual analizaremos a profundidad en este capítulo, era considerado un paso previo, esperado y necesario (aunque lamentable) para dar el salto de las economías agrícolas obsoletas a las industriales modernas y con ello, emprender marcha hacia la promesa del desarrollo y la democracia.

El proyecto desarrollista militar consideraba de manera casi ontológica que la modernidad, materializada en la “imagen objetivo” de ciudad (tal como se denomina en los documentos de la JUNAPLA y sobre lo que discutiremos más adelante), como un concepto opuesto a “pobreza”. La pobreza era una característica intrínseca a las formas de vida del campo y sus poblaciones. La

ciudad, al contrario, era plenitud, democracia, servicios, educación, salud, alimentación, vestimenta; todo aquello que siempre fue escaso o ausente en el campo y había recaído sobre las poblaciones más maltratadas y en situación de desigualdad en la historia colonial y republicana del país: los indígenas. La pobreza urbana era un problema “en” la ciudad, no “de” la ciudad. El “sujeto indígena” y “lo” indígena, encarnaba la pobreza en general y por excelencia en el Ecuador, siendo la población objetivo con la cual se mediría la reducción de la pobreza en el país. La industrialización generaría el paso de indígena-campesino-pobre a mestizo-urbano-moderno, condición considerada como lo opuesto a la pobreza. Por tanto, según Hurtado (1977) cualquier mejora en las condiciones de vida entre el campo y la ciudad (aun en condición de marginalidad), era considerada una victoria hacia el camino correcto ante los ojos de la dictadura militar. Y, desde su discurso respecto qué es la pobreza, tienen cifras que los secundan.

En un estudio realizado por Marco Antonio Guzmán (1994), titulado: “Bicentralismo y pobreza en el Ecuador”, realiza una revisión de los legados sociales y económicos de la postura industrializadora y reformista de la década de los 70’s. En principio, detona el bicentralismo del crecimiento urbano y acumulación de recursos, poderes políticos y toma de decisiones que se concentraron en Quito y Guayaquil; afirmando que, contrario a lo que se pretendía, la riqueza no se distribuyó a través de infraestructura y servicios de manera homogénea en la población, sino que se monopolizó en ciertas familias, partidos políticos y empresarios/inversionistas. Para inicios de la década de los 90’s, el 0,05% de la población, controlaba el 90% de los recursos económicos.

En un estudio realizado por la CEPAR (1993, citado en Guzmán 1994), estimaba y preveía que a este paso, para el año 2000, 4 de cada 5 ecuatorianos/as estarían en situación de pobreza, en el sector urbano habría un excedente de mano de obra superior al millón y medio de personas entre Quito y Guayaquil, donde 900 mil pertenecerán a “obreros urbanos”, 300 mil profesionales y 300 mil sin cualificación; así como un 66-68% de desempleo permanente y un 16-17% de personas en subempleo. Una estimación que se sentaba en las tendencias vistas desde los 80’s, donde para 1986 el desempleo urbano declarado llegó al 42% y en 1990 al 60%, existiendo además enormes poblaciones de desempleo urbano no declarado (mendigaje, indigencia, comercio ambulante, etc.) sobre la que no se tiene registros fiables. Así mismo, para 1990, el 60% de las mujeres

marginales no formaban parte de la población económicamente activa, frente a un 34% que declararon dedicarse principalmente a labores de servicio doméstico. En el mismo año, la desocupación de hombres y mujeres en los barrios marginales de Guayaquil y Quito, llegaba al 70%, del cual 39% se había empobrecido durante los años del proyecto desarrollista. Para 1993, la población nacional llega aproximadamente a 11 millones de personas. De éstas, 9 millones (78,8%) están en situación de pobreza y de estos, 5 millones (45%) están en extrema pobreza o nivel de indigencia; poblaciones que se repartían entre Quito, Guayaquil y Machala.

La situación de "marginalidad" urbana y pobreza en lo rural eran medidas con los parámetros del NBI y sus cifras revelaban una realidad sumamente dispareja. Desde finales de la década de los 80's se evidencia que la situación de pobreza en el campo había aumentado: hasta antes del desarrollismo, los espacios rurales no contaban con servicios de agua, luz, alcantarillado, escuelas ni hospitales, pero ahora también sufrían de escasez de vestimenta y alimento. Para ese entonces, 91 de cada 100 ecuatorianos es pobre, del 91% de pobres el 67% son rurales y de allí, el 20% se había empobrecido debido a las acciones de la Junta Militar. A este paso, según estimaciones de la CEPAR (1993), para el año 2000 el Ecuador tendrá 12,6 millones de habitantes, de los cuales 10 millones serán pobres y 5,6 millones serán urbanos (Guzmán 1994).

De estudios y análisis derivados del 5to Censo de Población y Vivienda en el Ecuador, realizado en 1990, en el que se medían los tipos de servicios e infraestructura disponible en el país con una tasa de puntajes de 0 a 1000 puntos, se obtiene que las 10 ciudades principales y cabeceras cantonales tienen un nivel de cobertura de entre 758 a 812 puntos, equivalente al 75,8% y 81,2%. Justamente, las áreas más urbanizadas del país. En contra parte, los 10 peores puntajes evidenciaban un nivel de cobertura de entre el 15,9% y el 37,8% en zonas urbanas y del 0,48% al 1,41% en los espacios rurales. Esto implica abismales desigualdades entre la dotación de coberturas entre el campo y la ciudad. Estas mismas tendencias de desigualdad se reflejaban respectivamente en los ámbitos de salud, educación, vivienda, servicios médicos y demás (Guzmán 1994).

Con una rápida revisión de estas cifras, ¿quién podría negar que en las ciudades la pobreza es menor que en el campo? ¿Más aún cuando promete que esa población marginal, en la que se

acumulan las falencias de servicios e infraestructuras, eventualmente irá desapareciendo cuando sea absorbida por la centralidad moderna y desarrollada? ¿Cómo refutar la tesis desarrollista si es que ha cumplido lo que ha prometido?

La industrialización obviamente promovió los procesos de desarrollo y modernización del país desde la perspectiva estructuralista desarrollista, pero la Junta Militar no reparó en aclararle al país que dicho desarrollo no sería homogéneo, sino a costa de empobrecimiento del campo, un desliz que detonó la organización y fortalecimiento de los movimientos indígenas, tal como mencionamos anteriormente en el contexto histórico y analizaremos con mayor detalle en el siguiente capítulo.

Tal como denunció Stavenhagen (1964), la "integración" que pregonaban los discursos Desarrollistas y, por tanto, la Junta Militar, realmente implicaba casi el etnocidio de los grupos indígenas, cuyas formas de vida, prácticas culturales y espacios de desenvolvimiento económico no tenían cabida en ese nuevo mundo que quería ser construido sobre las cenizas del anterior, incendiado con las llamas de la reforma agraria, la industrialización, la sustitución de importaciones y la promesa de la democracia. No hay que olvidar, sin embargo, que estos proyectos racistas en pro del "mejoramiento de la raza", fueron previos a la dictadura militar, sino que eran parte de un sentido común generalizado en la sociedad ecuatoriana desde la primera mitad del siglo XX.¹¹

Sobre estos parámetros socio-culturales que relacionaban la ciudadanía, la étnia y la clase social, tan arraigados a la ciudad y sus habitantes, es que para mediados de siglo se plantean los programas de integración y construcción de un Estado nación. Esta característica de fuertes estructuras de discriminación y jerarquización socio-económica, racial, cultural y de región de proveniencia, empató de manera perfecta con los discursos modernizantes y de desarrollo al estilo norteamericano que se abalanzaron sobre toda América Latina y Ecuador desde las décadas de 1930-1940, constituyendo lo que sería la "imagen-objetivo" del gobierno militar.

¹¹ Como en los ejemplos presentados por Espinosa (2003) y Puente (2013) que evidenciaban la discriminación que los migrantes indígenas, rurales y de provincia sufrían por parte de las clases criollas y acomodadas quiteñas que veían su llegada como una invasión de "cholos" desde inicios del siglo XX. Donde los migrantes debieron abandonar sus prácticas culturales del campo, dialecto, vestimentas, costumbres y demás, para poder adaptarse al nuevo entorno.

La "imagen objetivo" es la idealización que los gobiernos dictatoriales de 1963 y 1972 presentaban como la meta a cumplirse, la materialización del desarrollo: la ciudad moderna tal y como se las presentó el gobierno de Estados Unidos. En un contexto de expansión de la globalización y plena guerra fría, los norteamericanos implementaron varios mecanismos políticos e ideológicos para convencer de que países subdesarrollados se unieran a sus esfuerzos por expandir el capitalismo y su modelo. Gracias a *Alianza por el Progreso* y la *Junta Interamericana de Defensa*, los militares ecuatorianos (hace tiempo interesados en la industrialización del país y con la fuerza política para ponerla en marcha), viajan a EEUU a experimentar de primera mano los beneficios y ventajas de la vida en los países modernos industrializados, un estilo de vida y nivel de bienestar que les convenció de apoyar al proyecto del país del norte (Hurtado 1977).

Estos militares ecuatorianos provenían de estatos medios y bajos, nunca habían recibido mayor instrucción académica formal, lo que sabían de política era por sus experiencias personales pero no tenían mayor idea de como se administra un Estado complejo y poseían poca o ninguna comprensión de la sociedad, su historia y sus conflictos. Por ello, su gobierno no se caracterizó por la planificación científica, la estrategia política ni la organización de grupos, sino por una apuesta meramente ideológica y política atada a su idealización romántica y emocional con genuinas intenciones de construir un país mejor para las poblaciones pobres. Esto los llevó a pedir permanente asesoría de los verdaderos conocedores de la administración del país, las clases altas urbanas que, de por sí, estaban interesadas en continuar con el proceso de modernización y acumulación de recursos en Quito y Guayaquil (Hurtado 1977).

En este contexto, los "indígenas" eran un ejemplo perfecto de lo que Lewis (1961), hubiera comprendido como "cultura de pobres", un sistema de apreciaciones culturales, estilos de vida y manifestaciones sociales, económicas y políticas que les impide a los individuos del grupo alcanzar mejores niveles de vida, por lo que necesitan de un empujón y protección de un tercero: el Estado. Y este "empujón" era justamente lo que el Estado militar, desde sus propias nociones e intenciones en pro de los pobres de la nación, es lo que pretendió dar. Se concebía a los indígenas como seres muy "locales", con ningún conocimiento de las innovaciones y maravillas existentes en otros países; por lo que no poseían los saberes y juicios necesarios para el mejoramiento de

sus propias vidas. Utilizando las estructuras jerárquicas post coloniales, la Junta Militar se presenta con su postura paternal, protectora y lideradora para ayudar a estos individuos a salir de la camisa de fuerza de la pobreza en la que ellos mismos se habían enfrascado por propias sus condiciones materiales y culturales de existencia (una existencia no vinculada a los modos urbanos).

El periodo desarrollista en el Ecuador se cierra con una lógica urbanocéntrica y bicefálica; enormes círculos de pobreza en las urbes y una pauperización del nivel de vida en el campo; crecimiento descontrolado y no planificado de las ciudades; un gobierno militar que trabajaba ideológicamente y sin mayores conocimientos técnicos y administrativos; una producción industrial débil e incapaz de competir con los productos internacionales; una dependencia ideológica y política con los países del norte; y una fuerte estigmatización de la población rural e indígena del país. Todos estos elementos se presentan como el material político para la implementación de la propuesta neoliberal en el país, llenando ciertos vacíos discursivos y complementando otros con contenidos propios de la propuesta.

4.2. Pobreza y la falta de oportunidades: el periodo neoliberal del desarrollo en el Ecuador de los 90's

Como vimos anteriormente, la promesa de desarrollo traída por la Junta Militar no se cumplió. El país se "encaminó" ideológicamente hacia el bienestar de lo urbano, los servicios, la infraestructura y la democracia, pero no se materializó para los grandes segmentos poblacionales expulsados del campo que ahora atestaban las periferias urbanas en situación de informalidad. La posta de esta promesa inconclusa pasa a las manos de los banqueros y prestamistas que lucran de los créditos y el mercado internacional, quienes llegan a Carondelet con su discurso que prometía cumplir dicha promesa mediante la propia gestión de los individuos, apoyados por créditos y préstamos. Enmarcados en la postura de la "libertad", el Estado solo se encargaría de brindar ayuda a aquellos que por cuenta propia deseen mejorar su calidad de vida. La pobreza o riqueza no se presenta como una condición, sino una decisión; aunque los parámetros que difieren entre qué es ser "rico" y ser "pobre", se heredan del periodo desarrollista: infraestructura y servicios, pero se aumenta el de "consumo".

4.2.1 Contexto, antecedentes y justificaciones

Campo Enunciativo

Para 1978 la dictadura militar anuncia que su periodo revolucionario ha terminado, habían emprendido los cambios pretendidos y era momento de retornar a la democracia y elegir un presidente a través del sufragio popular. No obstante, aún con las protecciones arancelarias y crediticias preferencias que el sector secundario recibió desde el Estado, no se logró dar mayor heterogeneidad productiva a la producción industrial nacional que era aplastada por su poca competitividad y dependencia de la tecnología e insumos extranjeros. Así también, el petróleo no logró diversificar las exportaciones sino que pasó a ser una más de los productos primarios de exportación del que depende el país (Barrera 2001, Ayala 2008).

El proceso de industrialización y urbanización, el principal eje que constituía la modernización del país, requirió la fracturación de la hacienda tradicional serrana, que realmente se limitó a la distribución de la tierra (de mala calidad) e ilegalizar las formas precarias de relaciones de trabajo campesino, entre los trabajadores campesinos, incidiendo en mayores situaciones de pobreza y acentuando la migración a las urbes, principalmente a Quito y Guayaquil que desde tiempo antes ya se habían establecido como los ejes de desarrollo y crecimiento en sierra y costa respectivamente. Aunque las inversiones nacionales e internacionales aumentaron en el país, los flujos de capital provenientes del sector privado no se direccionaron a los campos productivos que fomentaran igualdad, como la producción de vivienda barata, salud y alimentación, altos niveles de natalidad y mortalidad. Una estructura poblacional "joven", población económicamente activa dedicada en su mayor porcentaje a labores rurales, altos índices de analfabetismo y muchos trabajadores por "cuenta propia", dejaban en claro que el país aún no se encontraba enmarcado en las vías del desarrollo económico y social con la que se había soñado (JUNAPLA-INEC 1978a, 1978b, Carrión 1986, Barrera 2001).

El enorme aumento de las clases medias significó el desplazamiento de las ramas económicas que generaban empleo a las ciudades, poniendo en jaque al Estado ante la urgencia de cubrir las necesidades básicas de la nueva población económicamente activa que continuaba creciendo de manera estable desde los 60's hasta la década de los 80's. La centralización del poder económico y político del Estado petrolero lo llevó a mezclar un rol de empresario, empleador y procesador

de conflictos sociales al punto que controlaba grandes ámbitos de la producción de la sociedad nacional y las articulaciones local-regionales con el comercio y la política internacional (Barrera 2001).

A pesar de esta marcada acumulación de poderes, que en principio pretendían modificar las fuerzas hegemónicas de los tradicionales grupos oligarcas del país, la realidad mostró que dichos grupos (principalmente los serranos ex hacendados) simplemente redireccionaron sus intereses económicos a otro sector, siendo el de la industria en el que más influencia podían tener. La intervención tecnocrática transformadora del gobierno fracasó por su obstinación en atender a la industrialización del país, descuidando otros aspectos. Ello se reflejó en el mayor enriquecimiento de las élites de la costa y la reducción de los salarios reales en la población en general. La distribución salarial, por otra parte, tampoco fue homogénea, sino privilegiando a las ramas del sector de servicios, transporte, finanzas y comercio, relegando a las actividades del primer sector de la economía. Una vez más, el Estado había promovido un modelo que protegió y benefició a las élites rentistas del país (Barrera 2001, Montufar 2001).

Por otra parte, a diferencia de la mayoría de dictaduras latinoamericanas de la misma época, el gobierno militar ecuatoriano no tuvo mayores formas represivas ni violentas que atentaran físicamente a las personas, sino que su carácter dictatorial se presentaría más en lo legal y administrativo, afectando a la conformación y participación de nuevos grupos actores y grupos políticos. Este vacío fue aprovechado por las élites económicas que se centraron principalmente en una enorme población desprotegida (e incluso vulnerada) por el Estado militar: los indígenas. Históricamente representados por la Federación Ecuatoriana de Indios (organización tradicionalmente disputada por la iglesia y el partido comunista) los indígenas observan impotentes cómo la reforma agraria de 1963 y de 1972 no hizo sino atender sus modos de vida y de subsistencia. Ante la ineficiencia e ilegitimidad¹² de la FEI, se funda la ECUARUNARI en 1972, organización de indígenas que se proponían ser sus propios representantes que encaran sus intereses como parte de una cultura y una raza maltratada y oprimida; dando inicio a su vida

¹² Se consideraba que la Federación Ecuatoriana de Indios no fue conformada por "indios", sino que estaba diseñada para la lucha indígena sea utilizada políticamente por los grupos comunistas y religiosos que fungían de ventríflocos de sus problemáticas y pedidos de reconocimiento y reivindicación (Barrera 2001).

política en el país, que posteriormente sería aprovechada por los grupos hegemónicos (Barrera 2001, Ayala 2008).

Tras el retorno de la democracia en 1979 del izquierdista Jaime Roldón Aguilera y su súbita muerte de Roldós en 1981, sube al poder su binomio Osvaldo Hurtado Larrea en una situación de crisis petrolera, la guerra con el Perú y los estragos del Fenómeno del Niño, que agravaron la situación económica de la nación y en el que la deuda externa había llegado al 42% del PIB. Perdiendo buena parte de los ingresos petroleros, Hurtado pacta con los grupos de élite costeños (encabezados en su momento por Assad Bucaram), abandona la fuerte inversión social que había caracterizado los años anteriores y entra en un régimen de ahorro económico. Comienza a adoptar varias de las estrategias provenientes de sus previos opositores (atentando contra las capacidades económicas del Estado destinando su dinero a empresas privadas, debilitando a sus originales intereses reformistas y redistributivos). La constitución de 1979 es modificada para dar paso a este proyecto más corporativista y patrimonialista que se fraguaba y fortalecía a los grupos de derecha liderados por el empresario guayaquileño León Febres Cordero quien comenzaba a rearticular el posicionamiento de los poderes tradicionales (Barrera 2001, Ayala 2008).

El descontento generalizado de las masas populares fieles al desarrollismo debilitan a Hurtado y pierde el gobierno, dando paso a las élites que llegarían con León Febres Cordero en 1984 a imponer su proyecto anti estatal y pro libre mercado con el "Frente de Reconstrucción Nacional". Desde el principio, Febres Cordero promovió la liberalización del mercado cambiario, financiero, internacional, la revisión y eliminación de subsidios, supresión de las mini devaluaciones, liberalización de los precios y adopción de una macro devaluación, etc., para aumentar el flujo de capital de importaciones e inversiones internacionales (Montufar 2000, Barrera 2001, Herrera 1988, Ayala 2008).

Entre 1984 y 1988 el modelo empresarial del Estado (liberalización del mercado, eliminación de subsidios, etc.) se ganó el total rechazo de las bases populares que habían emprendido varias organizaciones políticas opositoras (donde resalta el grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo), así como también la manifestación de los militares (que ejecutaron dos fallidos intentos de golpe de Estado). Pero para 1987 el congelamiento de los intereses del pago de la deuda, una nueva crisis

petrolera, la ruptura del oleoducto y un terremoto ocurrido el mismo año, evaporaron el partido oficialista "Frente de Reconstrucción Nacional", posicionando al Partido Social Cristiano, siempre fiel al Febres corderismo, como el partido de derecha más fuerte. A pesar de ello, la Izquierda Democrática vence en las elecciones presidenciales para 1988 y asciende al poder Rodrigo Borja, representante de la centro-izquierda (Barrera 2001, Ayala 2008).

Borja hereda un país políticamente inestable, en plena crisis económica y en el auge de las políticas neoliberales nacional e internacionalmente, aunque con una amplia mayoría en el congreso y el apoyo popular. Durante su gobierno afrontó la situación económica tomando en consideración los consejos del Fondo Monetario Internacional (reajustes a precios de combustibles, eliminación de subsidios y créditos de interés social, limitados aumentos salariales, liberalización de tasas de interés, etc.). En lo social, tuvo que enfrentar al primer Levantamiento Indígena de 1990 liderado por la CONAIE, viéndose en la necesidad de establecer pactos y mejores relaciones con grupos populares, sindicales e indígenas. A pesar de estos acertados movimientos, la situación general era crítica. Tras el Consenso de Washigton el escenario futuro se pintaba inevitablemente de tintes neoliberales, el paradigma desarrollista había quedado atrás y el modelo de industrialización por sustitución de importaciones enterrado ante la hegemonía del mercado liberalizado. Además, aún con el aumento en las exportaciones que se había dado desde la época de Hurtado, la pobreza nacional había llegado al 65% y los niveles de desigualdad crecieron enormemente (principalmente en cuanto a empleados cualificados y no cualificados), dando cuenta del enorme fracaso del proyecto de democratización nacional iniciado con Roldós. El deseo de los grupos de élite por vincularse con este nuevo mercado internacional, restó importancia a las luchas internas por lo que no existió el deseo de presentar una propuesta de proyecto nacional para las elecciones de 1992 en la que llega al poder Sixto Durán Ballén a imponer a rajatabla el modelo neoliberal en un Ecuador fragmentado, empobrecido, sin hegemonía ni un plan como país que no presentara al crecimiento económico como la solución a todos los problemas (Barrera 2001, Montufar 2000, Herrera 1988, Ayala 2008). En este modelo, las ciudades dejaban de ser en si un entorno de bienestar (como era en el desarrollismo), pero se convertirse en focos de atracción de capitales, que aumentarían el consumo y disminuirían implícitamente la pobreza.

4.2.2 El discurso neoliberal: un desarrollo desde los grupos empresariales y la liberalización del mercado

La "tesis"

El 31 de diciembre de 1993 el gobierno de Durán Ballén aprueba la "*Ley de Modernización del Estado, privatizaciones y prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada*",¹³ un documento que establecería las guías de su gobierno, las cuales se anclan en las siguientes justificaciones o "consideraciones":

- "Que desde la década de 1980 el país se encuentra en una crisis económica que no encuentra una solución definitiva para **superar las injusticias sociales que han prevalecido en desmedro de las clases sociales más necesitadas**" (Ley de Modernización 1993, 1).
- "Que el Estado ha auxiliado a las empresas privadas cuando éstas no pueden continuar con sus actividades empresariales, pero se han convertido en duras cargas económicas para los ecuatorianos" (Ley de Modernización 1993, 1).
- "Que el Ecuador no ha encontrado **un modelo económico estable y duradero**, por lo que ha tenido que entrar en un proceso de ajuste **pero que no ha logrado mejorar, sino empeorar el nivel de vida de los ecuatorianos**" (Ley de Modernización 1993, 1).
- "Que se torna ineludible entrar en un proceso de privatización y concesión de servicios, para atenuar las cargas económicas que tiene el Presupuesto General del Estado y con el propósito de **contar con recursos financieros para atender las demandas más urgentes de los sectores sociales más postergados**" (Ley de Modernización 1993, 1).
- Que el país debe librarse de criterios economicistas y tener en claro que las actividades empresariales del Estado no solo deben medirse en rentabilidad financiera, sino también **rentabilidad social que permita ampliar la cobertura para garantizar el acceso de un mayor número de ecuatorianos a servicios públicos básicos** (Ley de Modernización 1993, 1).
- "Que las actividades empresariales actualmente competentes al Estado pueden ser transferidas al sector privado, comunitario y de auto gestión, permitiendo que se

¹³ Consultado en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo28.pdf, el 23 de enero del 2018

preserven los derechos de trabajadores, empleados y funcionarios públicos” (Ley de Modernización 1993, 1).

- “Que el proceso de privatización y concesión de los servicios públicos, debe encaminarse a lograr la eficiencia de las entidades y empresas públicas y sólo por excepción, transferirse al sector privado, comunitario y de auto gestión” (Ley de Modernización 1993, 1).

Las macro estructuras semánticas: grandes líneas ideológicas

Con estos antecedentes, se crea con Consejo Nacional de Modernización (CONAM) que entra en vigencia en 1994, como el órgano administrativo encargado de dirigir, diseñar estrategias, coordinar y supervisar los procedimientos de la Ley de Modernización (1993), que establece los siguientes principios y disposiciones generales para regular:

1. “*La racionalización y eficiencia administrativa:* El CONAM identificará los trámites innecesarios e injustificados para tomar acciones que agilicen y mejoren la administración pública. Así también, el Presidente de la República podrá emitir disposiciones normativas administrativas dentro del Gobierno central para: fusionar entidades públicas que dupliquen funciones o actividades o que puedan desempeñarse de manera más eficientes al ser fusionadas; reorganizar y eliminar entidades públicas cuyas funciones hayan dejado de ser prioritarias e indispensables para el desarrollo nacional o que no correspondan de manera eficiente a las demandas de la sociedad” (Ley de Modernización 1993, 2).

2. “*La descentralización, la desconcentración y la simplificación:* El CONAM tendrá que supervisar y controlar la ejecución de políticas de descentralización a través de la delegación de poder político, económico, administrativo o de gestión de recursos tributarios del Gobierno Central a los gobiernos seccionales, así como transferir funciones, competencias, tributos, responsabilidades administrativas y gestión tributaria a las dependencias provinciales. En función de las necesidades económicas y características geográficas de cada zona administrativa, las instituciones del Estado dictarán acuerdos y resoluciones para delegar atribuciones” (Ley de Modernización 1993, 2).

“Así mismo, para la desmonopolización de los servicios públicos, el Estado podrá delegar a empresas mixtas o privadas la prestación de servicios públicos como: agua, riego, saneamiento,

electricidad, telecomunicaciones, vialidad, movilidad portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, etc. No obstante, el Estado se mantendrá como encargado de atender la educación y salud pública de todos los ecuatorianos. Además, se establece la ley anti monopolios en cualquiera de sus formas, por lo que se autoriza a terceros el establecimiento de actividades y/o prestación de los mismos servicios, de igual o similar naturaleza" (Ley de Modernización 1993, 2).

3. "La prestación de servicios públicos, las actividades económicas y la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, por parte de empresas mixtas o privadas mediante cualesquiera de las formas establecidas en la Constitución" (Ley de Modernización 1993, 2).

4. "La enajenación de la participación de las instituciones del Estado en las empresas estatales de conformidad con la ley" (Ley de Modernización 1993, 2).

El gobierno de Durán Ballén no presentó en si un "Plan de desarrollo" sino una serie de estrategias legales, económicas y político administrativas (como la "Ley de Modernización") que permitieran al país ir a la par del ritmo de la caprichosa y cambiante economía mundial a la que pretendía introducir al Ecuador con promesas de conformar una economía sana, competitiva y abierta a la inversión (CONAM 1994).

Para el año de 1994 se presenta el documento: *Ecuador. Privatizaciones y prestaciones de servicios por parte de la iniciativa privada* (1994) donde se argumentan con mayor detalle las justificaciones que guían los objetivos presentados en la Ley de Modernización. "Sin estabilidad no hay confianza ni seguridad. Sin confianza, no hay inversiones. Sin inversiones, no hay empleo. Sin empleo, peligra la paz social" (CONAM 1996^a., 18).

La creación y protección de un mercado liberalizado que genera confianza y seguridad en los inversores se presenta como la clave para el desarrollo de la sociedad, por lo que es vital instaurar una economía de mercado y un sector privado autónomo, que permita al país involucrarse en las dinámicas internacionales y crear capacidad competitiva dentro de ellas. Siguiendo con las lógicas internacionales de la economía de mercado, el desarrollo nacional estará fuertemente influenciado por las cifras del Producto Interno Bruto y macroeconómicas (CONAM 1996b). Modernizar el Estado para adaptarse a las condiciones económicas y políticas coyunturales, implica su reducción. Las décadas pasadas demostraron que la centralización del Estado termina

por ralentizar y entorpecer las transacciones económicas, así como también impidiendo la formulación de propuestas creativas y específicas de la población en cada espacio y situación particular, para la generación de desarrollos económicos; siendo una de las causas principales para las divisiones que sufre el país y la drástica realidad de pobreza a nivel nacional. Un Estado enfocado en asegurar un mercado fuerte y estable, está promoviendo la integración socio económica y fortaleciendo la sociedad civil. Con mayor inversión, cada una de las poblaciones en específicas zonas geográficas, puede proponer mecanismos de desarrollo autónomos que poco a poco vayan mejorando su situación al promover mayor flujo de capital y generación de empleo. Para ello, tanto el Gobierno Central como sus entidades administrativas menores, deben abrirse a las alianzas estratégicas mutuamente beneficiosas Entre el estado y el sector privado, conjuntamente con la participación de la población; tratando de romper con esa falsa contradicción entre lo público y privado que crearon ideologías obsoletas de gobiernos pasados. Para esta nueva dinámica estatal, las lógicas que guíen la del gobierno deben ser las lógicas del mercado, las cuales no pueden planificarse. La planificación (en el sentido desarrollista) se presenta como la receta del fracaso (CONAM 1994, 1996a).

La anti tesis

Las propuestas de desarrollo de la postura neoliberal en el marco de la globalización implicó principalmente tres quiebres discursivos respecto al proyecto desarrollista de los 70's: en la planificación, rol del Estado frente a la sociedad y cómo se construye ciudadanía (democracia). Basado en la más pura y tradicional expresión del capitalismo liberal (Friedmann 1980), la individualización de la sociedad y el potenciamiento de las capacidades personales de los sujetos y las actividades productivas, se convierten en la base del desarrollo y la democracia ante el evidente fracaso del Estado proteccionista que había producido un alto proceso inflacionario y aumento de la deuda externa, perdurando y agudizando de la situación de empobrecimiento de la sociedad ecuatoriana y latinoamericana en general. Para solucionar de manera definitiva esta realidad, se propone un "ajuste estructural" neoliberal, un conjunto de políticas económicas propuestas por el FMI y el BM destinadas a promover un entorno de alto nivel de inversiones sociales productivas para cimentar una macroeconomía mínima que fomente la competencia nacional en el ámbito del mercado mundial, implicaba descentralizar el Estado y desechar sus funciones como planificador (Sunkel 1990, Martínez 2012).

Descentralizar el Estado permitía que los desarrollos locales no estuvieran determinados por los intereses del gobierno desarrollista limitado a la industrialización, invisibilizando otras oportunidades de crecimiento económico y concentrando injustamente los capitales de inversión extranjera en las zonas urbanas industriales; sino que pudieran darse en cualquier ámbito donde hubiera una oportunidad productiva y una población heterogénea capaz de abordar el emprendimiento por cuenta propia gracias al apoyo crediticio y financiero de las entidades bancarias locales, con el respaldo del FMI (Cabreró 2008, Mendez 2016, Rofman 2006).

El proyecto neoliberal (no nacional, sino mundial) prometía un desarrollo homogéneo, plausible para todas las economías, capacidades individuales y colectivas, en entornos rurales y urbanos, en países periféricos o centrales, dependientes e independientes, superando con la dicotomía de los Estados estructuralistas y la necesaria dualidad entre pobreza-riqueza (que finalmente terminaron recreando en el país al “desarrollar” los espacios urbanos a expensas de empobrecer las zonas rurales). Gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en un entorno post fordista, el libre mercado ofrecía a todos por igual la posibilidad de crear sus propias oportunidades de crecimiento económico y desarrollo en su territorio. De la mano, la descentralización facultaba político-administrativamente a las personas para ser sujetos políticos y visibles para el Estado, sin la necesidad de que fueran “urbanizados” previamente, generando una democracia directa en su relación con los gobiernos locales y centrales.

La democracia, un concepto íntimamente ligado al “desarrollo” y posicionado como tal desde el gobierno de la dictadura militar, vuelve a ser la carnada que atrae la atención y el apoyo de las poblaciones empobrecidas a las que se les ofrecía una mejor vida una vez que se inmiscuyen en esta nueva propuesta de modernidad en el que realmente son capaces de ejercer sus libertades e intereses en un ambiente económico libre que fomenta los emprendimientos y no impone modelos de producción, tal como idealizaron las posturas schumpeterianas (Schumpeter 1912) donde el egoísmo individual del sujeto innovador promueve el desarrollo de toda la sociedad al halarla tras de él. En este contexto, el sujeto “pobre” es aquel al que el Estado ha empobrecido por no formar parte central de su proyecto de desarrollo, pero que ahora tenía la oportunidad de superar su situación de pobreza sin la necesidad de recurrir al Estado. La pobreza deja de ser una

imposición estatal y pasa a ser una condición heredada pero voluntaria que recae sobre los hombres de cada individuo el salir de ella o no.

Discursivamente, el proyecto neoliberal renuncia a la planificación pero mantiene la idea de modernidad, una jugada engañosa para modificar el rol y las competencias del Estado pero para mantener la organización jerárquica de la sociedad local y mundial.

Como presentamos en la metodología con Foucault (1969), el racionalismo occidental parten de las lógicas euclidianas y aristotélicas que se instauraron bajo la idea de que el mundo ajeno a nuestros sentidos, tiene sus propias normas y leyes. Por ello es que los euclidianos se encargaron de medir, clasificar y organizar el mundo de maneras lógicas, mientras que la postura aristotélica se basa en la dinámica de la causa-consecuencia como un acto lógico lineal. De allí deviene que la "planificación" se presente como la capacidad del humano racional y moderno de aprehender el orden tácito de la naturaleza para anticiparse a la realidad y crear mecanismos de utilizar dichas leyes a su favor. Paralelamente, esta comprensión de la realidad va de la mano del surgimiento del racionalismo y positivismo del siglo XVIII y se conecta con las posturas evolucionistas del siglo XIX, concluyendo que el humano moderno es racional y, por ende, quien no configure su realidad de manera racionalizada, se encuentra en una situación de atraso (Rodríguez 2011, Greene 2005).

Cuando el CONAM (1994) afirma que el mercado mundial no puede "planificarse" y por ende el Estado debe abandonar sus pretensiones planificadoras, en el fondo se está renunciado a la responsabilidad del Estado de ofrecer y garantizar un futuro a la población a la que representa. Si las reglas con las funciona la realidad del mercado globalizado y liberalizado no pueden ser aprehendidas por ninguna forma de racionalidad, las poblaciones se encuentran a merced de los deseos pasionales y egoístas de quienes tienen mayor influencia sobre dicho mercado.

No obstante, aunque el mercado nos considera a todos iguales en las mismas posibilidades para acceder a él, la idealización de "modernidad" se encuentra materializada como un modelo económico y político ya implementado por los países modernos urbanizados (principalmente Estados Unidos) quienes figuran como los principales gestores de las instituciones y políticas que

llevan modernidad a los países "no modernos": el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los lineamientos del Consenso de Washington. Es decir, las jerarquías del moderno-no moderno se mantienen como el principio de división y organización política y económica en un mercado mundial que promueve la especialización productiva, las actividades "modernas" (racionales, producción de tecnología y conocimiento) se concentran en espacios diferentes a las "no modernas", así como los beneficios económicos asimétricos que dichas actividades producen para cada espacio.

Producir un fenómeno de globalización a través del mercado (crear una cultura más homogénea como sujetos globalizados) recrea la misma lógica colonialista implementada en el desarrollismo, pero la figura del sujeto rural primitivo que debe urbanizarse, ahora se cambia por la del sujeto de cultura local que se debe vincular a la cultura de los ciudadanos globales del libre mercado mundial para volverse parte de esa modernidad. Y en ese sentido, cuando el acceso a la cultura y al mundo moderno depende del mercado, los sujetos alcanzan su libertad (democracia y derechos) y pueden modificar su situación de pobreza-riqueza solamente a través de convertirse en consumidores de los servicios y productos ofertados en ese "libre" mercado. La "libertad" neoliberal es la de comprar y vender a voluntad en los espacios urbanizados (no rurales, donde no llegaban las TICs).

Así mismo, tal como lo presentan diversos autores (Sassen 2006, Cicoletta 2005, Harvey 2005, Kozak 2011) el libre mercado y la globalización no tenía la capacidad de fomentar un mismo desarrollo y crecimiento económico en todos los espacios geográficos y ámbitos productivos como lo había prometido, puesto que empleó la infraestructura urbana ya establecida para crear nodos de cruce entre las redes mundiales de comercio, de comunicación y capitales financieros, acumulando, nuevamente, los beneficios de la modernidad en los espacios urbanos y en las poblaciones cualificadas y no cualificadas que pudieran ser de utilidad en la economía globalizada del capitalismo neoliberal.

Sin tener que esperar más del Estado (más que la protección del libre mercado), el sujeto "moderno" neoliberal obtiene la oportunidad real de explotar sus capacidades, modificar su propia situación económica y ejercer su participación política en mejoramiento de sus condiciones de

vida y cumplimiento de sus derechos. No obstante, si el sujeto llega a fracasar y termina empobrecido o sus derechos no son reconocidos, no tiene a quien reclamar ni a quien hacer responsable más que a sí mismo pues ya no existe un Estado proteccionista que se interese por ello.

Tabla 4. Síntesis de la tesis y anti tesis en el discurso neoliberal en el Ecuador

<i>Quiebres</i>	Tesis en los 90's	Anti Tesis de los 70's
Discurso de desarrollo	Neoliberalismo-Globalización	Desarrollismo
Ideología y filosofía	Modernización por fuerza del libre mercado	Desarrollar y modernizar al país-centro urbano
Rol del Estado	Garantizar el libre mercado, no planificador, Estado limitado y descentralizado, poca burocracia, privatización, democracia liberal directa	Poder centralizado, planificador, proteccionista, fuerte burocracia, reforma agraria, democrático representativa
Materialización del desarrollo	Liberalización del mercado, libertades de emprendimiento local, inversiones y flujos de capitales	Industrialización, integración nacional, racionalización de la economía
¿Quién se posiciona políticamente en el Estado?	Comerciantes, banqueros y financistas (principalmente costeños)	Militares y terratenientes serranos
¿Quiénes representan la <i>pobreza</i> ?	Aquellos sin la oportunidad de emprender	Población rural y peri urbana (marginal)
Grupos sociales beneficiarios del proyecto de desarrollo	Toda la población, independientemente de sus características educativas, históricas, culturales, geográficas, políticas, económicas, etc.	Aquellos en proceso de inserción a la modernidad

Fuente: Datos tomados del trabajo investigativo

4.2.3 Pobreza, desarrollo y Estado: políticas y campos de acción

Esquemas discursivos o superestructuras

A diferencia del periodo de la dictadura militar y la postura desarrollista, el proyecto neoliberal impulsado por la CONAM, no tiene mayor "identidad" nacional como una propuesta política y económica. No promulgaba idealismos ni militancias políticas y otras expresiones tan propias de la política nacional en los 70's. En la década de los 90's, el gobierno se convierte en un aparato determinado por la estrategia de política económica, puramente economicista y (pseudocientífica), enfocada en seguir la receta del crecimiento económico y pago de la deuda externa prescrito por el Consenso de Washington. De ahí la falta de identidad de este periodo de política pública en el Ecuador, pues no correspondía a un proceso gestado localmente, sino a una

estrategia global para la unificación de mercados. Y, de hecho, en ello radicaba su fuerte (Martinez 2012).

El CONAM (1994a, 1994b) aseguraba enfáticamente que no repetiría los mismos errores del modelo de la Junta Militar; sino que partirían de una base probada científicamente, no política ni ideológica, para crear un programa económico que realmente vincule al país con el comercio internacional, desarrolle las libertades individuales y el mejoramiento efectivo de las condiciones de vida de toda la población, rompiendo con las tajantes desigualdades campo-ciudad y los mecanismos institucionales y legales de centralización de la riqueza en Quito y Guayaquil que tanto habían empobrecido a todo el país entre los 60's y 80's.

Habiendo dejado de lado el discurso desarrollista, el concepto de "marginalidad" perdía el corpus teórico que la presentaba como "población en transición", para presentarla como parte de la población en situación de pobreza permanente. No obstante, como no abandona la ambición sobre la "modernidad" del país, el Consejo Nacional de Modernización mantiene la noción de que la pobreza, sea urbana o rural, se mide según los niveles de acceso a servicios e infraestructura (NBI), pero se incluye el instrumento de medición de Pobreza por Consumo, el cual parte de la idea de que los individuos dejarán de ser pobres en tanto puedan proveerse a sí mismos de los consumos básicos necesarios para una adecuada calidad de vida. Por tanto los esfuerzos por combatir la pobreza se mantienen en la dotación de ambos aspectos, así como del desarrollo de la democracia y ciudadanía que vienen de la mano de la reducción de la pobreza.

El cambio central del neoliberalismo en este sentido, consistía en que ya no sería el Estado quien imponga el mecanismo productivo para la satisfacción de dichas necesidades, sino que ahora cada población e individuo tenía la libertad para satisfacer sus necesidades a través del medio que le resulte más deseable y/o plausible según las características locales o los intereses que persiga. Es decir, la misma meta que en los 70's pero con un camino distinto, ahora cimentado y modelado desde los siempre rentistas de las exportaciones y las inversiones en nuestro país.

De esta manera el rol del Estado se concentraba en garantizar la búsqueda de la realización de los deseos personales de cada uno de los sujetos y grupos humanos. De allí que considera necesaria

la descentralización de poderes, privatización de servicios y apertura al mercado. La política pública manifestada en la época era básicamente política económica donde los inversionistas privados (bancos, cooperativas de crédito, financistas naturales, etc.) se convertían en los principales agentes que promovían el desarrollo. La política pública neoliberal, en si, no busca eliminar pobreza, sino crear libertades de mercado y sujetos libres que se adhieran a él para que sean ellos mismos quienes determinen su situación económica, estilo y calidad de vida (Herrera 1988).

Durante el gobierno de Febres Cordero, asesorado por el FMI, En 1986 se presentan los nuevos ejes de políticas cambiarias, política salarial, de gasto público, monetaria y financiera, de precios y de inversión directa. En todas ellas se beneficiaba al sector privado y se reducía el gasto público. A este terreno ya preparado para los 90's es que llega el Consenso de Washington (CW) al país. De manera general, el Consenso descansaba sobre los "dogmas de fe" respecto a: 1) El papel del Estado: el sector privado se encargará de gestionar más eficientemente los recursos del sector público, el Estado solo debe procurar la gestión de servicios universales (agua, luz, alcantarillado, etc.), facilitar los negocios del sector privado (estabilidad) y ser un garante de la paz social (gobernanza). 2) Sobre las ventajas de la globalización: hay que transnacionalizar las economías nacionales. Los países empobrecidos podrán beneficiarse de los bajos costos de las mercancías extranjeras, aumentando el ahorro familiar y su capacidad de consumo. 3) Sobre la distribución: los polos de desarrollo y élites prósperas generarán tantos recursos que eventualmente se llegarán a repartir (modelo de "Cascada" o de "Goteo") hasta llegar a las clases menos favorecidas (Martínez 2012).

Si bien era conocido que el mundo de los negocios era un entorno riesgoso y lleno de competidores, el discurso neoliberal vendía seguridad y confianza a la población, la sensación de que se encuentran siempre respaldados y asesorados por instituciones financieras globales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones privadas de renombre, sustituyendo la protección paternalista que ofrecía anteriormente el Estado; un aspecto necesario para las poblaciones populares latinoamericanas que desde inicios del siglo XX de la década de los 70's habían sido lideradas por caudillos o

dictaduras militares que poca libertad brindaban al negocio privado y los riesgos del mercado (Casilda 2004).

En un contexto de profunda crisis económica y de deuda externa, llegan los 10 puntos de Consenso de Washington (respecto a disciplina fiscal, reordenamiento del gasto público, reformas fiscales, tipo de cambio, etc.) para promulgar cambios positivos que aumenten la competitividad, incentivo de crecimiento de las exportaciones, liberalización de importaciones y recortar la hinchada presión fiscal que quitaba recursos a los potenciales emprendedores e inversores (Martínez 2012).

Tras años de aplicación, tal como lo evidencia Martínez (2012), ni el Estado empresarial, ni la aplicación de los principios del CW, ni el modelo de goteo, había cumplido la promesa a las grandes poblaciones empobrecidas, ni en el agro ni en las ciudades, sino que la situación se continuaba agravando. En el caso de los gobiernos neoliberales de Durán Ballén y posteriormente de Jamil Mahuad, adjudicaban su fracaso a la fuerte herencia del modelo desarrollista y la pobreza estructural que éste había dejado, lo que, según ellos, indicaba que el modelo modernizador del Estado, todavía necesitaba seguir fraguando, dándose continuidad a la privatización y a la liberalización. Los índices macro económicos nacionales (PIB) continuaban creciendo desde inicios de los 90's, pero la sociedad agudizaba su desigualdad y márgenes de pobreza (Guzmán 1994, Cerón 2010). En 1995 se había comenzado a tejer la soga que sofocaría la economía nacional.

Finalmente, para 1999 la situación en Ecuador se vuelve insostenible llegando a un punto de quiebre y creando a la población "pobre" con los tintes del periodo neoliberal y generan el primer mecanismo de respuesta a la pobreza de su tipo en la historia nacional: el "bono" (Tomalá 2016, Cerón 2010). El gobierno de Mahuad recibiría tres golpes económicos que serían el inicio del fin de su gobierno: las inundaciones en la costa ecuatoriana provocadas por un fuerte fenómeno de "El Niño" en 1998, el colapso de los precios del petróleo en 1998-1999 (principal producto de explotación ecuatoriano) y la crisis financiera internacional del Sudeste Asiático de 1997 (causante directo del salvataje bancario del 99) (Larrea 2004).

Paralelamente, en 1998 se elimina el subsidio del gas y luz eléctrica, se da el aumento del pasaje de transporte público debido al incremento del costo de la gasolina, entre otras acciones que generaron enormes protestas de los grupos sociales más empobrecidos. Viéndose contra la pared, el gobierno de Mahuad implementa un programa de transferencias monetarias focalizadas denominado el "Bono Solidario",¹⁴ que comienza a funcionar en el mismo año (Almeida 2009). También llamado burlescamente "Bono de la pobreza" (debido a su carácter asistencialista) estuvo inicialmente dirigido a madres de familia, quienes recibían un estipendio mensual de 100.000 sucres, y a mayores de 65 años, que recibían 50.000 sucres, pertenecientes a estratos bajos que tuvieran un ingreso mensual menor al millón de sucres, no posean un salario fijo y no estén afiliados al IESS. Los hogares interesados en participar del bono, debían proporcionar sus datos socioeconómicos junto a una declaración juramentada de bienes en iglesias católicas y evangélicas, así como en puntos establecidos por el Estado. Estas bases de datos posteriormente serían cruzadas y validadas con la información de Seguro Social, bancos, la Dirección de Tránsito, la Encuesta de Condiciones de Vida, etc., para determinar a las familias beneficiadas y comenzar a entregar el bono respectivo a través de las ventanillas de "BanRed", una competencia estatal de articulación de bancos privados (Cerón 2010, Almeida 2009, León 2002). Finalmente, para 1999 el sistema financiero nacional entra en colapso, se congelan las cuentas bancarias, se decreta feriado bancario, miles de personas pierden sus ahorros y ven bloqueado el acceso a su dinero. Para tratar de solventar la crisis, posteriormente se declara la dolarización de la moneda nacional. Entre el año 1995 y 2000, la pobreza urbana creció del 36% al 65%, los salarios reales caen un 40%, el desempleo pasa del 8% al 17%, dando inicio al primer éxodo internacional a gran escala en la historia del Ecuador: casi un millón de personas, miembros de la población económicamente activa, migra al extranjero, principalmente a España y Estados Unidos (Larrea 2004).

¹⁴ La postura del "bono", como expresa Almeida (2009), provenía como parte del acuerdo internacional del Ecuador con otros 188 países y diversas instituciones internacionales (BID, FMI, CEPAL, ONU, etc.) por cumplir con los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio: "1) Erradicar la pobreza y los problemas alimenticios; 2) Lograr la educación básica universal; 3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres; 4) Reducir la mortalidad de la niñez; 5) Mejorar la salud materna; 6) Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades; 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y, 8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo".

4.2.4. Los "beneficiarios" del discurso neoliberal en el Ecuador: la pobreza urbana de los 90's

El significado local

El modelo neoliberal pretendía romper las barreras estructurales de desigualdad que dividían al campo y la ciudad, que habían extraído recursos y mano de obra de la primera, para concentrarla en la segunda. La pobreza, relacionada con la "forma de vida" rural, se solucionaba con el acceso a servicios (básicos, de salud, educación) e infraestructura, así como el acceso a un sueldo mínimo para cumplir con las respectivas necesidades de gasto de las familias. No obstante, en el caso ecuatoriano, descentralización del poder Estatal, liberalización del mercado y capitales, terminó profundizando aún más las brechas económicas entre los ricos y pobres de la población en general, donde el sector urbano (por motivos que veremos a continuación) continuó siendo un espacio de acumulación de recursos a costa de los rurales. Así también, la pobreza adquiere particularidad "femenina" y de discapacidades gracias a la aplicación de los modelos de transferencias económicas constituidos a partir de la "teoría de capacidades" de Amartya Sen (la cual detallaremos en el apartado teórico del siguiente capítulo); elementos que se traducen en el diseño de escogimiento y entrega del "bono solidario", el cual si bien nació en 1998, su necesidad se intensificó tras el 2000 por la crisis financiera y la dolarización.

El fracaso del modelo neoliberal y los principios del Consenso de Washigton al no poder vincular adecuadamente la política, las características poblacionales y la economía local-mundial (Martínez 2012, Tomalá 2015); no se evidenciaron en el Ecuador con las mediciones de pobreza de NBI (que se traducían básicamente en el acceso a servicios básicos), los cuales aunque sea lentamente continuaban expandiéndose; sino que se presentaba en la desigualdad de distribución poblacional de recursos que se medía con la incorporada Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), con un estilo más focalizado y con un énfasis importante en el consumo y la capacidad de gasto de los individuos.

De manera general, Albornoz (2010) evidencia que desde 1990 la pobreza urbana por ingresos se mantuvo a la baja con menos y menos hogares que se mantenían por debajo de la línea de pobreza (equivalente a USD258 para una familia de 5 personas), llegando a su punto más bajo (28%) en 1997, luego al 46% en 1999 y de nuevo a la baja de hasta un 17% en 2007, cuando

hubo el cambio de gobierno de Alfredo Palacios a Rafael Correa. Hasta antes de la llegada de Correa, la pobreza a nivel nacional se encontraba en el 37,4% después de haberse reducido del 65% que había en el año 2000, según Hexagon Consultores (2008).

El pico de 99, provocado por la crisis financiera, es el punto esencial que configura la pobreza urbana neoliberal en el país que se vino dando de manera progresiva desde inicios de década hasta inicio del nuevo milenio. Tal como evidencia Ponce (2011), todos los deciles de la población reducen su participación en el ingreso per cápita del Ecuador, excepto el decil más rico que aumenta de 35% al 45% entre 1990 y el 2000, recursos que se concentraron en las ciudades más grandes del país (Quito y Guayaquil) y en ciudades mediadas vinculadas con el comercio exterior (como Manta y Machala). En este mismo periodo, en la ocupación y empleabilidad, los sectores productivos modernos perdieron un 2% de profesionales, mientras que en los sectores tradicionales-artesanales y obreros, la reducción se da de un 33% al 13%, afectando a los deciles más pobres. El salario de los deciles más ricos era 79% más que los no cualificados. Así mismo, las brechas salariales en caso de género se reduce de un 79% a 57% en hombres y del 58% al 42% en mujeres. En cuanto escolaridad, si bien los años de estudios aumentan de 9 a 13 años en la PEA, este incremento solo se presenta en los deciles más ricos.

Medido en relación al PIB, a inicios de los 90's el 44% de este se repartía entre el 3% de la población mas rica, mientras que los dos deciles menores se repartían el 4,1%. Para el 2000, el 10% de la población más pobre se repartía el 0,1% del PIB. En los 90s el decil más rico tenía 20 veces más que el decil más pobre, en el 2000 se hace 41 veces más. En el entorno urbano, el decil más pobre recibía el 1,1% per cápita, el decil dos el 2,2% y el decil más rico concentraba el 45,3%. Para el año 2002, se calcula que el 41,1% de hogares urbanos (3,2 millones de personas) subsisten en situación de pobreza y el 6% de estos, en situación de miseria o pobreza extrema (580 mil personas) (Guzmán 2005).

Lo presentado por Ponce (2011) es corroborado por Guzmán (2005) al afirmar que a pesar de la "descentralización" de recursos que ofreció el modelo neoliberal, para el 2000 más del 80% de empresas de capital se repartían entre Quito y Guayaquil, concentrando más del 82% de todos los activos, patrimonios, utilidades y flujos que se manejaban en todo el país. No obstante, sus

índices de pobreza eran del 45% y del 51,4% respectivamente. El 46% de las zonas urbanas eran pobres frente al 86% de las rurales.

Finalmente y siguiendo con la corriente de comprensión focalizada de la pobreza, gracias a la Encuesta de Condiciones de Vida se observa que si bien existen enormes grupos poblacionales en condición de pobreza, dentro de ellos resaltan tipos de individuos que poseen mayores características de desigualdad e intensidad de su situación de pobreza. Los denominados "grupos vulnerables" poseen características familiares, biológicas y de capacidades les dificulta todavía más el salir de la pobreza. Entre ellos, respecto a la pobreza intergeneracional, resalta que el 80% de madres reciben una pensión alimenticia de entre 80 centavos de dólar a 5 dólares al mes por cada uno de sus hijos/as para el año 2001, lo que impedía alcanzar a costear la canasta básica que se mantenía en 261 USD. En cuanto a pobreza estructural, se evidencia que existe una tendencia clara a la pobreza por diferencias de edad (adultos mayores), de género (mujeres) y poblaciones indígenas y afros: tanto en la urbe como en el campo, 9 de cada 10 hogares indígenas y 8 de cada 10 hogares afroecuatorianos, son pobres (Guzmán 2005).

La pobreza, tanto a nivel discursivo como a nivel medible (NBI y ECV), deja de ser una identidad rural y pasa a ser una condición general de toda la población nacional en el periodo neoliberal. No obstante, las características particulares de la pobreza urbana en este momento no se evidencian esencialmente por las alarmantes cifras respecto al inaccess a servicios, a niveles de desempleo, desigualdad y pobreza, las cuales ya se presentaban como elementos pertinentes al periodo desarrollista de los 70's; sino en su focalización alrededor de la construcción discursiva de un nuevo "sujeto pobre" existente en todo el país, pero que adquiriría un particular desenvolvimiento en el espacio urbano.

Fracturar el territorio estado-nacional para sumirse en las dinámicas de política y economía transnacional, implica un nuevo ordenamiento el cual, irónicamente, repite el mismo patrón del modelo desarrollista, al concentrar en las ciudades el eje de crecimiento económico del país, pero ahora las ciudades no eran espacios locales, sino que apuntaban a convertirse en "ciudades globales" (González 2012, Kresl 1998).

Opuesto a lo que afirmaban diversos teóricos respecto a que el neoliberalismo y la globalización iban a ser el "fin" de la geografía, pues los espacios físicos ya no serían un impedimento de vinculación económica y política entre los individuos gracias al desarrollo de las TICs, el acceso a dichas tecnologías solamente podía darse en entornos y en poblaciones que tuvieran las conexiones previas y una población con un suficiente ingreso económico y preparación educativa para saber manejarlas, particularidades concentradas en las poblaciones urbanas (González 2012, Fernández 2007).

En este contexto, la acumulación de oportunidades se establecía en el nuevo entorno de crecimiento económico (lo que equivalía a desarrollo para el neoliberalismo): las "ciudades globales". Estas se encontraban configuradas por el rol que la localidad cumpliera en la división mundial del trabajo y de explotación de recursos, ello producía que la división socio económica sea sumamente tajante y perdurable por el nivel de especialidad y profesionalización que requerían las clases altas para competir a nivel internacional, frente poca cualificación de las clases bajas que no conseguían sino labores de servicios e informalidad. Esto profundiza la atracción de capitales hacia la ciudad, manteniendo los flujos migratorios nacionales e internacionales, aumentando a su vez los cordones de periferias pobres en las urbes latinoamericanas, generando muchas veces el fenómeno de "ciudad difusa", producto de una enorme expansión urbana y la creación de diversas centralidades y periferias alrededor de éstas (De Mattos 2010, Sassen 2005, Friedmann 2005).

No es de extrañarse entonces, que las cifras presentadas evidencien la acumulación de capital en Quito y Guayaquil, las dos ciudades más grandes del país, donde la riqueza, las clases altas con acceso a servicios, educadas y profesionalizadas desde inicios del siglo XX, hayan mantenido su rol económico nacional aún a pesar de las promesas del neoliberalismo de contrarrestar esta situación. La intención de fomentar la lógica de las "ciudades globales" acumuló la riqueza nacional e internacional en las manos de las pequeñas clases altas, mientras que la desaparición de los mecanismos redistributivos estatales, impidió que las clases bajas pudieran hacerse partícipes de dicha riqueza. Cuanto más adinerada la población de clases altas, más empobrecida la población de clases bajas. El crecimiento económico, el cuál hubo, no provocó sino mayor desigualdad.

Pero dicha desigualdad, vale resaltar, no se presentaba de la misma manera en todo el territorio nacional. Como mencionamos antes, las ciudades, principalmente Quito y Guayaquil, no solo acumulaban mayor riqueza, sino también mayores oportunidades para salir de la pobreza como fue el caso del acceso al "Bono Solidario". En un periodo en que la pobreza había llegado a unos niveles tales que resultaba imposible crear un plan para eliminarla (que era el rol de los "marginados" en los 70's), el discurso de la reducción de las desigualdades a grupos vulnerables se convierte en la única carta política plausible para aliviar, aunque sea momentáneamente, los problemas de la pobreza.

Tras dos décadas de implementación del modelo de crecimiento económico, se comprueba que el aumento de la producción y el ingreso no mejora la situación de las familias marginadas ni en situación de pobreza, de manera que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desarrolla el Índice de Pobreza Humana (IPH) en 1997, donde la medición ya no se enfoca en los gastos ni en su acceso a infraestructura, sino en la probabilidad de morir a una edad temprana, la privación de educación básica y el no acceso a recursos públicos (Cerón 2010). El IPH serviría como referente en toda la región para la conformación de los programas de transferencias monetarias condicionadas focalizadas a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. En nuestro país, el "Bono Solidario" se diseñó (al menos teóricamente) en función de las necesidades particulares de los grupos más vulnerables de la sociedad ecuatoriana para el momento: niños, niñas, adolescentes, mujeres, madres, discapacitados y personas de la tercera edad. Para el 2001, aproximadamente el 45% de los hogares ecuatorianos eran beneficiarios del estipendio económico del bono, de los cuales el 80,7% estaba destinado a madres, el 18,7% a ancianos y el 0,6% a personas con discapacidad (León 2000, Almeida 2009).

Para participar en el bono, los potenciales beneficiarios requerían inscribirse en los puntos habilitados por el Estado y remitir una serie de documentos que certifiquen su situación de pobreza severa y vulnerabilidad, y de identificación de los miembros de la familia que gozarían de los beneficios del estipendio, el cual se entregaba preferentemente a la madre de familia o a la mujer encargada del hogar (Almeida 2009). No obstante, la metodología para el registro de datos de los potenciales usuarios poseía un diseño estructural que no permitía el acceso al bono por parte de los sectores en mayores situaciones de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad.

Tal como exponen Almeida (2009) y Cerón (2010) tanto los puntos habilitados por el Estado para la recepción de los documentos, como los espacios donde se entregaba el estipendio a los beneficiarios, se encontraban específicamente en las ciudades, donde los índices de pobreza y desigualdad eran menores a los entornos rurales. Las ciudades poseían infraestructura ya establecida, la presencia de empleados públicos y privados, y los medios de difusión (radio, televisión y prensa) a través de los cuales se informaba a la población respecto a la existencia del bono y las formas de adquirirlo; elementos casi inexistentes en el entorno rural.

Dado que los puntos de entrega del bono se realizaba en instituciones financieras afiliadas al Estado (BanRed), los beneficiarios del bono recibían expresiones de discriminación y rechazo por parte de las clases más altas, profesionalizadas y en trabajo formal que visitaban al banco con regularidad, un entorno en el que no se acostumbraba ver a las clases bajas. Almeida (2009) presenta una serie de entrevistas realizadas a mujeres usuarias del "Bono Solidario" quienes aseguraban que los empleados y usuarios bancarios las insultaban calificándolas de "vagas" y "osciosas" como las causas de su situación de pobreza, así como atribuyéndoles que su estilo de vida "rural" (que se expresaba en su vestimenta, su cantidad de hijos, su forma de hablar, etc.) era lo que les impedía "salir adelante". El banco, con la excusa de ofrecer "comodidades" tanto a usuarios del bono como a sus clientes, crea una fila única para la entrega del bono (muchas veces ubicando una ventanilla en la calle y no dentro del edificio del banco), donde la gran cantidad de gente se acumulaba durante largas horas soportando las condiciones de sol y lluvia.

En estas expresiones discriminatorias se pueden evidenciar la mezcla de los dos discursos de desarrollo y la pobreza que habían estado presentes en el Ecuador hasta la fecha que, implícitamente, resaltan las "virtudes" de cada uno. En primer lugar, al rechazar y menospreciar el estilo de vida "rural", se resalta la condición deseable y jerárquica del urbanita de clases altas, profesional, no indígena y desarrollado. En segundo lugar, se presenta uno de los más básicos argumentos del neoliberalismo: el libre mercado trata a todos por igual, por tanto la riqueza y la pobreza es una desición individual. Los usuarios del bono, no eran concebidos solamente como "pobres" por parte de las clases acomodadas, sino también como los únicos culpables de su situación por su condición individual por no trabajar ni aprovechar las oportunidades que el

mercado les ofrecía. Se los veía como aprovechados y abusivos que utilizaban dádivas del Estado para mantener su estilo de vida ocioso.

La estructura del desarrollismo parece haberse mantenido en el enfoque neoliberal, pero se cambiaba la lógica dictómica de desarrollado urbano-subdesarrollado rural, por la de rico trabajador-pobre vago, que, coincidentemente también recrean la lógica espacial, derivando en rico-urbano-trabajador frente a pobre-rural-vago. El neoliberalismo brindó un nuevo marco discursivo para comprender la pobreza. Los pobres urbanos, lo eran porque recreaban lógicas rurales mezcladas con su propia apatía por el trabajo; la explicación del origen de esta "apatía" frecuentemente se mezclaba con las jerarquías socio étnicas ecuatorianas, que relacionaban a lo pobre con lo indígena y lo afro.

A este elemento, se le añadía un tema de género sumamente presente en el diseño de accesibilidad al estipendio del Estado. Como resalta Cerón (2010) la responsabilidad para ser partícipes del Bono Solidario descansaba totalmente en la figura de la "mujer madre", la cual es instrumentalizada por el Estado para llegar a las familias pobres urbanas gracias a los estereotipos sexistas que la colocan como la cuidadora, protectora y dependiente de una figura paternalista que le ofrece dinero. La "mujer" concebida como ama de casa, tenía tiempo para esperar en las largas filas a la entrega del bono, realizar las compras de víveres, cocinar y alimentar a todos de quienes es responsable, llevar a los infantes a los controles médicos, estar pendiente de que los menores en edad escolar asistan regularmente al centro de estudios, entre otras actividades en las que no figuraba el hombre, ni cultural ni legalmente. Si la mujer se rehusa a asumir esta carga de labores extras, confirmaría su rol de osciosa y, por tanto, se confirmaría como culpable de la pobreza de su familia.

En el periodo neoliberal no se rompieron con las grandes líneas discursivas respecto a la pobreza del periodo desarrollista, sino que se las profundizó y se les incorporó nuevos elementos que la entienden, justifican y perduran. La idealización de la pobreza urbana de los 70's encarcanda como en el sujeto marginal indigenizado, en los 90's esta figura pasa a ser reemplazada por una pobreza urbana, ruralizada, y ahora también femenina y osciosa.

4.3. Pobreza, derechos y Buen Vivir: el discurso de desarrollo en la "Revolución Ciudadana" del 2007

Al igual que lo ocurrido con el periodo desarrollista, los gobiernos neoliberales no lograron saldar su deuda social con esas poblaciones empobrecidas, sino que aumentaron su situación de precaridad y pobreza. Ni la industrialización ni el libre mercado, ni el Estado centralizado ni el descentralizado, lograron el tan deseado "desarrollo" ofrecido desde los 60's. En ninguno de los casos, la conexión local con el mercado internacional, consiguió repartir los beneficios de la modernidad capitalista; sino que toda la gestión solo engrosó los bolsillos de quienes se encontraban financiando los proyectos políticos. En este contexto de desconfianza casuada por neoliberales y desarrollista, unos banqueros y otros ex terratenientes, se da el escenario para la llegada de una nueva perspectiva basada en el humano como el inicio y el fin de su propuesta y, teóricamente, nacida desde las particularidades locales de la población, pero a su vez conectada con los requerimientos mundiales: el Buen Vivir y el post neoliberalismo.

4.3.1 Contexto, antecedentes y justificaciones

Campo Enunciativo

Habiendo superado el conflicto con el Perú, Durán Ballén termina su mandato presidencial con fuertes acusaciones de corrupción durante su gobierno (principalmente referido a sobornos alrededor de la privatización de empresas e instituciones del Estado) y lleno de protestas sociales, para dar paso al populista Abdalá Bucaram para 1996. Auto denominado "el presidente de los pobres", durante su corto periodo presidencial intentó llevar a la economía nacional al siguiente periodo de neoliberalismo al acelerar las privatizaciones del Estado y radicalizar los programas de flexibilización laboral, hasta que en 1997, tras solo 6 meses de mandato en que fue destituido por el congreso y reemplazado por Fabián Alarcón (Acosta 2006, Ayala 2008).

Ratificado gracias a una consulta popular, Alarcón promueve la conformación de una Asamblea Nacional en 1997 para una reforma integral a la constitución de 1978 en un entorno de crisis económica nacional debido a la baja en las exportaciones. Con una mayoría de grupos de derecha, la Asamblea consagró constitucionalmente la dinámica neoliberal y privatizadora en relación con el Estado-economía; así también, recogieron las demandas sociales de grupos como los indígenas (fuertemente posicionados en la política nacional desde el levantamiento de 1990),

mujeres, niños/as y otros sectores sociales que exigían reconocimiento por parte del Estado. La nueva constitución entra en vigencia 1998 con la posición del presidente electo Jamil Mahuad del partido Democracia Popular, aliado con los banqueros y comerciantes costeños (Acosta 2006).

En un gobierno dominado por la bancocracia, Mahuad no encontró los mecanismos para apaciguar la crisis económica y social devenida del inicio contundente del periodo neoliberal ecuatoriano en 1992, por lo que prefirió atender las exigencias e intereses de los grandes capitales nacionales e internacionales, suprimiendo mecanismos tributarios y agencias de control bancario y financiero (como la Agencia de Garantía de Depósitos-AGD), compensando la pérdida fiscal con el aumento de precios en productos de uso diario y el impuesto valor agregado (del 10% al 12%), afectando a las clases medias y bajas de la sociedad (Acosta 2006).

En 1999 pretende ganarse el favor de Estados Unidos al entregarle, sin beneficio alguno para el Ecuador, la base Militar de Manta al gobierno norteamericano, violando el concepto más básico de soberanía nacional. Apoyado por el FMI y el Departamento del Tesoro de EEUU, declara la moratoria de la deuda externa para tratar de atender los problemas urgentes de la crisis nacional. En marzo del mismo año, la situación financiera llega a ser insostenible y Mahuad declara feriado bancario y el congelamiento de los depósitos de cientos de miles de ecuatorianos/as. Frente al descontrol económico, el aumento abrupto de la inflación y la gradual y acelerada devaluación de la moneda, en enero del 2000 se decreta la dolarización de la economía nacional según el valor de cambio de la época. Mahuad es destituido tras masivas movilizaciones y se posesiona al vicepresidente Gustavo Noboa en el cargo presidencial (Acosta 2006, Ayala 2008, Luna 2009). En un balance general, en los últimos años de la década de los 90's Ecuador sufrió el retroceso económico más severo de toda la región. El PIB había caído un 31% entre 1998 y el 2000; las políticas económicas implementadas provocaron una devaluación monetaria del 216% (1 dólar llegó a equivaler 25 mil sucres), una inflación del 52%, caída del salario real del 23% y una salida de capitales de 15%. Entre los años de 1995 y 2000, la crisis ecuatoriana promovió el empobrecimiento más acelerado de la historia latinoamericana. En cuestión de un lustro, la pobreza extrema se duplicó de 2,1 a 4,5 millones de personas, según cifras de UNICEF.

Paralelamente, el gasto social disminuye en educación y salud, en un 22% y 26% respectivamente (Acosta 2006).

Gustavo Noboa mantuvo la línea neoliberal, acentuó la dolarización, presentó reformas presupuestarias y fiscales restrictivas (con el asesoramiento del FMI), fracasó en la firma del Tratado de Libre Comercio con EEUU y promovió la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). En ello aparece la figura del ex militar Lucio Gutiérrez apoyado por grupos populares como el Movimiento Popular Democrático (MPD) y los indígenas representados por Pachakutik, quien es elegido como presidente en 2002 desde una postura de centro izquierda que se proclamaba a favor de las masas pobres del país. No obstante, le tomó poco tiempo el vincularse y apoyar las políticas expansionistas y neoliberales estadounidenses (promoviendo del TLC, manteniendo la base de Manta y apoyando el Plan Colombia), traicionando a sus originales aliados y poniéndose de lado del Partido Social Cristiano (comerciantes y banqueros costeños), dividiendo a la unidad popular tras la aplicación de políticas clientelares (Ayala 2008, Acosta 2006).

En 2005 la oposición en contra de Gutiérrez se concentró en las clases medias, indígenas y partidarios políticos contrarios, detonando un levantamiento popular en Quito que empujó a las Fuerzas Armadas a desconocer su gobierno y al Congreso a la destitución formal del presidente quien escapa en un helicóptero desde el techo del Palacio de Carondelet. Sube al poder su binomio Alfredo Palacios quien con un gobierno débil, no puede cumplir sus ofrecimientos de redireccionar el país (Ayala 2008).

Dávalos (2007) y Paz y Miño (2007), afirman que la crisis económica (feriado bancario y posterior dolarización de la moneda nacional) de finales de la década de 1990, se originó a partir de 1994 gracias a la radicalización pro economía de mercado de Durán Ballén, tras aprobar la "Ley de Modernización del Estado" y la aplicación de sus estrategias de descentralización, desregulación, desinstitucionalización y privatización del estado; que entregó a los grupos de banqueros y financistas, apoyados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la potestad de decidir sobre la producción nacional. Su efecto más notorio, fue la masiva migración de compatriotas de clases medias a los países del primer mundo; mientras que por otra parte, las

élites comerciales y financieras se adaptaron y sacaron provecho de esta coyuntura (SENPLADES 2007).

Se redujeron los recursos destinados a inversión social, un gradual y sistemático bloqueo del ejercicio de derechos sociales, cayeron las oportunidades de empleo, fortaleciendo y creando nuevas marginaciones y exclusiones. Mientras que en contraste, las clases acomodadas disfrutaban de la moneda extranjera y sus beneficios, aumentaron las importaciones y la proliferación de proyectos inmobiliarios de alta renta (SENPLADES 2007).

Tras vencer en segunda vuelta al comerciante costeño Álvaro Novoa, en el 2006 es elegido como presidente Rafael Correa, perteneciente a Alianza País, un movimiento político fundado por él mismo, de carácter populista, de izquierda y aliado con las clases aristocráticas y serrano-financieras del país. Con un enfoque anti neoliberal, critica que las posturas ortodoxas de la economía neoliberal basaron su trabajo en un cerrado enfoque economicista, dejando de lado el sentido de "trascendencia social" que pretende cualquier teoría y apuesta por el desarrollo. También asegura que carecían de una visión unificadora de las distintas realidades y ámbitos que conforman el contexto histórico, social, cultural, geográfico y político de las naciones. Afirmaba que esta "visión de mercado" ha justificado la desaparición de instituciones que se enfocaban en el desarrollo humano y social, fomentando las contradicciones de clase, extendiendo la pobreza y causando daños profundos al medio ambiente. Para el 2007 comienza el proyecto de la "Revolución Ciudadana" (SENPLADES 2007, Ayala 2008).

4.3.2 El discurso de una alternativa al desarrollo tradicional: el retorno del Estado de derecho y la filosofía del Buen Vivir¹⁵

La tesis

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (SENPLADES 2007), expuesto por el gobierno de Rafael Correa, se presenta como un instrumento para la generación de una nueva estrategia de

¹⁵ A pesar de que el gobierno de Rafael Correa arranca en el 2007 con su respectivo Plan de Desarrollo que ya plantea rupturas con el modelo neoliberal, aquí vamos a enfocarnos en presentar las tesis del Plan Nacional del Buen Vivir presentado en el 2009, tras la aprobación de la Constitución Nacional de Montecristi del 2008, donde se sientan las bases legales, constitucionales y administrativas pertinentes para el adecuado desenvolvimiento de la alternativa al desarrollo que constituye el Buen Vivir.

desarrollo destinada a la efectiva inclusión y empoderamiento para la formación de un país justo, democrático y soberano; desde esta postura, entiende las profundas desigualdades sociales y territoriales del Ecuador, no únicamente el resultado de una ineficiente gestión de recursos, sino de la existencia de un modelo económico estructural que impide el desarrollo del mercado interno, cortando los vínculos de la población y el reconocimiento del otro y de uno mismo, como sujeto de derechos y libertades. El rol de la democratización del poder político, por ende, se dirige a potenciar la organización autónoma de diversos conjuntos de la sociedad civil y ampliar la participación ciudadana en los procesos de planificación, gestión y control estatal. Cambiar el país y su realidad, requiere de profundas transformaciones o lo que el plan denomina como "revoluciones":

- Revolución constitucional y democrática, que, a través de un proceso constituyente, desarrollo normativo, implementación de políticas públicas y transformación del Estado, se pretende crear una comunidad política incluyente y reflexiva que apunta a una sociedad diversa, plurinacional, intercultural y soberana.
- Revolución ética que para la reconstrucción de las relaciones sociales que reconstituyan la confianza entre personas y el reconocimiento mutuo.
- Revolución económica, productiva y agraria, destinado a superar el modelo de exclusión que se ha heredado, orientando recursos del Estado a proyectos en beneficio urbano y rural.
- Revolución social, que busca un Estado que garantice los derechos fundamentales, ofrece oportunidades para la integración socio económico y fortalecer las capacidades de personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos de atención prioritaria en el ejercicio libre de sus derechos (SENPLADES 2009).

En base a estos principios "revolucionarios", asumidos como anti neoliberales y con miras la construcción de un Socialismo del siglo XXI expresado en el Plan Nacional de Desarrollo del 2008, se construye el Plan Nacional del Buen Vivir en el 2009. Un proyecto que plantea principalmente una transformación de la ética ciudadana a partir de los pilares de la justicia social y económica, la justicia democrática e intergeneracional, como los elementos esenciales para la construcción del Buen Vivir. Se necesita de un ser humano que desee vivir en sociedad,

que acepte y promueva la igualdad, integración y cohesión social por medio del cumplimiento de derechos y potenciación de capacidades; que disfrute de una convivencia solidaria y cooperativa, que le permita acceso a trabajo y a tiempo de ocio, una relación armónica con la naturaleza, etc. (SENPLADES 2008, 2009).

Abandonando los intereses colonialistas, dominantes, unilineales, europeizados y mono culturales de los previos conceptos sobre "desarrollo", "modernidad" y "progreso", el proyecto correista comprende al "desarrollo" en función de la construcción del "Buen vivir" de todos y todas, en armonía con la naturaleza y destinado a la prolongación de las culturas humanas. Parte de que todos los individuos, independiente de sus particularidades y territorios que habita, se reconocen entre sí y se valoran, a fin de permitir y promover auto realización y la construcción de un porvenir colectivo. En este sentido, las libertades se convierten como un valor en sí mismas y todo humano tiene derecho a ejercerlas a medida que contribuye a un crecimiento económico de calidad, a la democratización de la sociedad y al establecimiento de vínculos sociales fundados en la igualdad y que perduren la misma (SENPLADES 2009).

Este Plan deja de lado al crecimiento económico como el fin último del desarrollo y lo reemplaza por su interés en el desarrollo humano (en un entorno capitalista y globalizado): la formación y potenciación de las capacidades humanas (que implica satisfacción de necesidades básicas, educación y salud) y, a partir de ello, el uso efectivo de cada persona para auto realizarse (que es la construcción de una vida satisfactoria a través del ejercicio de los deseos propios). El desarrollo humano no implica el incremento de riqueza, sino la expansión de capacidades (mentales, emocionales e imaginativas) para la satisfacción de las necesidades intrínsecas del humano (SENPLADES 2009).

Este enfoque propone, por tanto, un desarrollo para la satisfacción de las necesidades, la generación de igualdad de oportunidades y estímulos para crecer, en un entorno de heterogeneidad, diversidad productiva, tecnológica, ecológica, social y cultural, que promuevan un desarrollo endógeno. Las instancias de gobierno deben constituir sus acciones en coherencia con estos puntos. La expansión de las garantías de cumplimiento de derechos, no pueden concretarse en base a políticas selectivas ni focalizadas, sino a través de un marco que necesita

universalizar las coberturas de los servicios e infraestructuras, así como mejorar las ya existentes (SENPLADES 2009).

De esta manera, se requiere de un Estado plurinacional, laico, diverso, que recupere su capacidad de planificación, gestión, regulación y mecanismos de distribución que haga hincapié en los procesos de desconcentración, descentralización y participación ciudadana a través de la democracia representativa, participativa y deliberativa; así como aumentando los programas de inversión social, mecanismos jurídicos que permitan la exigibilidad aplicación de derechos, reducción de brechas regionales y urbano-rurales; priorizando a las grupos históricamente rezagados y/o vulnerables, entre los que se consideran las nacionalidades indígenas y pueblos originarios (SENPLADES 2007).

Las macro estructuras semánticas: grandes líneas ideológicas

El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 del Ecuador, se asienta en tres grandes orientaciones éticas:

- "La justicia social y económica como base del ejercicio de las libertades de todos y todas: en una sociedad justa, todos y cada uno de los individuos que la integran gozan del mismo acceso a los medios materiales, sociales y culturales necesarios para subsistir y llevar una vida satisfactoria que les permita autorrealizarse y sentar las bases para el mutuo reconocimiento como ciudadanos iguales" (SENPLADES 2009, 10).
- "La justicia democrática participativa: en una sociedad políticamente justa, todos y todas deben contar con el mismo poder para contribuir al control colectivo institucionalizado de las condiciones y decisiones políticas que afectan su destino común, lo que debe entenderse como la defensa de los principios de igualdad política, participación y poder colectivo democrático" (SENPLADES 2009, 10-11).
- "La justicia intergeneracional e interpersonal: en una sociedad justa, las acciones y planes del presente tienen que tomar en cuenta a las generaciones futuras. Tal situación implica un pacto ambiental y distributivo que considere el impacto ambiental y social que tiene el uso de los recursos naturales y las acciones y decisiones económicas que se toman en el

presente, así como también la equidad de género y el reconocimiento de la diversidad cultural del país (SENPLADES 2009, 11)“.

Que se traducen en 12 objetivos guías:

“Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.

Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.

Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.

Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.

Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.

Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir (SENPLADES 2009, 11-12).

La anti tesis

El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 retoma la escala Estado-nación, Estado planificador y gestor de procesos sociales, la inversión social y el deber de proveer servicios a la población, del enfoque desarrollista de los 70’s,. Por otra parte, desecha la apreciación dicotómica de lo desarrollado-subdesarrollado, revalorizando a todas las culturas y pueblos como aportadores para el desarrollo del Buen Vivir. Por tanto, se deslegitima la necesidad de “inclusión” social, en el sentido que provocó el proceso de colonialismo interno con el nombre de “integración nacional” en la Dictadura Militar, para proponer el concepto de la hibridación cultural y de saberes. Así

también, comparte la tesis de la dictadura respecto a que la pobreza deviene de motivos estructurales de la organización social, pero el Buen Vivir lo atribuye a las lógicas de acumulación individual neoliberal y al sistema de desigualdades históricamente institucionalizado, no a las características agrícolas de la economía nacional.

De la propuesta neoliberal, retoma la importancia de no priorizar el desarrollo urbano, sobre el rural, potenciando a los individuos y sus actividades en cualquier ámbito productivo o entorno geográfico en el que se asienten. Así también, reconoce el valor de no centralizar el poder del Estado, sino permitir cierto grado de descentralización para mejorar el ejercicio democrático y la focalización. Por otra parte, ataca directamente a la postura política tácita y la filosofía individualizante y egoísta del neoliberalismo, atribuyéndole la mayor responsabilidad sobre la pobreza severa en la que se encontraba el país en el momento.

Aparentemente el Plan Nacional del Buen Vivir propone cambios estructurales en comparación a los planes de desarrollo precedentes. Su propia intención de romper los mecanismos de dominación intrínsecos a las teorías del desarrollo, el rol del Estado y los grupos de poder, a través de una postura que no dicotomice ni jerarquice la realidad, insinuaría el haber llegado a la solución que generaría un equilibrio general, de paz social e igualdad. No obstante, toda propuesta generada desde un puesto de poder conlleva mecanismos de dominación para su materialización a través de su capacidad de legitimar un discurso. En este caso, podemos identificar los dos frentes propios de la propuesta del Buen Vivir y la Revolución ciudadana donde se ancla la tesis dominante: el rol de los "derechos" y la "ciudadanía". Pero primero, un poco de contexto.

El cambio de apreciación sobre la pobreza y las desigualdades que propone el "Buen Vivir", podría resumirse en dos grandes premisas: 1) el reconocimiento de la existencia de nuevas desigualdades y 2) una nueva concepción respecto a la justicia social. En cuanto a la primera, Fitoussi y Rosanvallon (1996) explican que en nuestra realidad existen dos tipos de desigualdades: las *estructurales* o tradicionales (referidas principalmente a lo económico y material) y las *dinámicas* (referidas a los procesos de construcción de identidad y representación de los individuos). Una persona puede tener mucho dinero, pero si pertenece a un grupo racial

excluido, sufre un tipo de desigualdad que le impedirá el mismo tipo de desenvolvimiento que si perteneciera a otra raza (*desigualdad intracategorial*). Ante estas dos categorías de desigualdad, asegura Fraser (2003), lograr la justicia social requiere de no sólo enfocarse en fomentar mecanismos de *redistribución* (impuestos, subsidios, etc.), sino también de *reconocimiento* (políticas de interculturalidad, por ejemplo); evitando perdurar un modelo de acumulación de las desigualdades y limitadas oportunidades de mejoramiento en un grupo humano históricamente desventajado (Tilly 1998, Therborn 2013).

En este contexto teórico, los “derechos” se convierten en el principal elemento que materializa mecanismos de reconocimiento de las poblaciones históricamente postergadas de nuestro país del “Buen Vivir”. No obstante, el discurso oculto evidencia otros elementos.

Según Tilly (1998), el origen de los “derechos” (en su configuración actual) se remonta a las transformaciones generales ocurridas en Europa de los siglos XVI-XVII, donde los monarcas que iban perdiendo poco a poco su poder frente al crecimiento económico-político de los señores feudales y clases comerciantes, debían pactar con ellos una serie de acuerdos que compraran su lealtad y apoyo (principalmente respecto a gestas bélicas y el pago de impuestos). A cambio del cumplimiento de su *deber*, el Estado monárquico cedería “beneficios”, actualmente denominados: *derechos*. A su vez, los señores feudales podían extender sus derechos a los campesinos, ganando su lealtad y apoyo. Con el final de los Estados monárquicos feudales y el inicio de la filosofía liberal tras la Revolución Francesa, el Estado democrático (gracias al principio del uso legítimo de la fuerza), se mantuvo como el encargado de otorgar o no derechos a la población a cambio de alguna retribución de su parte. Por tanto, las poblaciones que exigieran derechos, primero debían generar las condiciones adecuadas (lucha social, levantamientos, huelgas, etc.) para poner en jaque al Estado al punto en que éste se viera en la necesidad de negociar acuerdos para garantizar y mantener las relaciones de poder.

Realizando una revisión rápida al contexto del país en el que se erige el Plan Nacional del Buen Vivir y tras analizar el fuerte componente de derechos que el Estado ofrece a la ciudadanía, podemos evidenciar que la mayoría de las poblaciones y grupos a que quienes se les otorgó derechos, no cumplieron los requisitos previos de lucha social para acceder a ellos. Entonces,

¿qué quiere decir que un Estado "regale" derechos a su población? Siguiendo los aprendizajes del clásico "Ensayo sobre el Don " de Mauss (1924), todo regalo implica una deuda, la cual debe ser saldada en función de mantener la vinculación entre el remitente y el receptor. El pago de dicha deuda solo sería plausible a través de la instrumentalización de la *ciudadanía* enmarcado en el proyecto de la "Revolución Ciudadana", tal como cualquier otro proyecto de desarrollo generado desde los grupos hegemónicos.

Tal como lo presenta Morán (2003), desde las polis griegas, el entorno urbano ha sido el espacio de socialización y producción política por excelencia: un contenedor espacial y social adecuado para el ejercicio de la ciudadanía. Ser ciudadano no se refiere en sí a una particularidad de ocupación del entorno, sino a una categoría de reconocimiento político, económico, social y una figura legal de los individuos frente al Estado que conlleva el ejercicio de derechos y deberes. Por ejemplo, Tilly (1998) plantea que en la primera "Declaración de los Derechos del Hombre", se diferenciaba entre *ciudadanos activos*, quienes por su alta capacidad económica tenían acceso a derechos políticos (como es el sufragio y postularse para puestos políticos) y los *ciudadanos pasivos*, quienes habitaban las ciudades pero sus condiciones económicas no les daban acceso a derechos políticos.

Situación similar se observa en la Constitución nacional del Ecuador de 1946, Título III, Artículo 17, en la que la "ciudadanía" se limita a personas mayores de dieciocho años que sepan leer y escribir; en la constitución nacional de 1869, Título III, Artículo 10, donde para ser ciudadano se debía ser católico, estar casado o ser mayor de veinte y un años, y saber leer y escribir. Y en la de 1843, donde además de estos requisitos, también se debía tener una propiedad raíz de valor libre mayor a doscientos pesos y ejercer una profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como en el caso de empleados domésticos y jornaleros (Título IV, Artículo 9).

Como observamos, la democracia viene de la mano de la ciudadanía y no fue sino hasta la Constitución nacional de 1978 (final de la Dictadura Militar) donde saber leer y escribir deja de ser requisito para ser ciudadano, extendiendo el derecho al voto (entre otras cosas) a los cientos de miles de campesinos analfabetas que atestaron las periferias urbanas con la promesa de su

eventual inclusión a la modernidad urbana, pero que ahora tenían la potestad de promover dicha inclusión a través del apoyo político al proyecto desarrollista vigente en la época.

Extender los derechos de ciudadanía a las poblaciones en situación de pobreza y *desigualdades dinámicas* a través del *reconocimiento* permitía acceder a un recurso socio político que no se encontraba previamente cooptado por otros grupos de poder político (quienes solo apreciaban la *desigualdad estructural*). La visibilización política y la entrega de derechos a los grupos históricamente excluidos por parte del discurso del Buen Vivir, debía ser pagada posteriormente a través del apoyo popular en el ejercicio democrático, así como del pago de impuestos que permitieran financiar nuevos proyectos nacionales, reduciendo la necesidad de vincularse con los poderes económicos tradicionales, concentrando más el poder en los nuevos detentores del discurso hegemónico.

Tabla 5. Síntesis de las tesis y anti tesis en el discurso del Post neoliberalismo- Buen Vivir en el Ecuador

<i>Quiebres</i>	Tesis en los 2000	Anti Tesis de los 90's
Discurso de desarrollo	El "Buen Vivir"/Teoría del Desarrollo humano	Neoliberalismo-Globalización
Ideología y filosofía	Transformación ética para la satisfacción de necesidades, reconocimiento y valoración entre individuos para una vida democrática, sostenible y solidaria	Modernización por fuerza del libre mercado, individualismo, acumulación, consumo como mecanismo de libertad y democracia
Rol del Estado	Estado centralizado-descentralizado, planificador, gestor de proyectos, alta inversión social y productiva en todos los ámbitos	Garantizar el libre mercado, no planificador, Estado limitado y descentralizado, poca burocracia, privatización, democracia liberal directa
Materialización del desarrollo	Poblaciones con capacidades reales de acceder a mecanismos para influenciar en su realidad	Liberalización del mercado, libertades de emprendimiento local, inversiones y flujos de capitales
¿Quién se posiciona políticamente en el Estado?	Clases altas educadas (aristocracia) y financistas-terratenientes serranos	Comerciantes, banqueros y financistas (principalmente costeños)
¿Quiénes representan la <i>pobreza</i> ?	Aquellos a quienes no se les ha otorgado y cumplido sus derechos	Aquellos sin la oportunidad de emprender
Grupos sociales beneficiarios del proyecto de desarrollo	Las poblaciones que han recibido reconocimiento político por parte del Estado	Toda la población, independientemente de sus características

Fuente: Datos tomados del trabajo investigativo

4.3.3 Pobreza, desarrollo y Estado: políticas y campos de acción

Esquemas discursivos o superestructuras

La propuesta ideológica que enmarca el accionar de política pública del Buen Vivir alrededor de la pobreza y la desigualdad, se caracteriza por dos elementos: 1) el vislumbramiento de lo que Fitoussi y Rosanvallon (1996) denominarían como "pobreza multidimensional", un abordaje nacido de la noción integral de la condición o situación de desigualdad no se determina únicamente por la distribución de recursos (económicos, infraestructurales o de servicios) o la capacidad de emprendimiento del individuo, sino por toda una gama de particularidades étnicas, raciales, biológicas, históricas, geográficas, religiosas, culturales, políticas, psicológicas, etc., que condicionan el desenvolvimiento de las personas; y 2) el fortalecimiento de lo que Marshall (Tilly, 1998) plantea como los pilares de la "ciudadanía": derechos civiles (libertades individuales¹⁶), políticos (garantizan la participación y ejercicio político) y sociales (acceso a satisfacción de necesidades materiales y culturales), siendo los dos últimos donde el Buen Vivir hace énfasis.

Respecto al primer punto, Paz y Miño (2015) nos muestra como el rol del Estado ecuatoriano en el periodo de la Revolución Ciudadana se concentró en el fortalecimiento del aparato tributario en función de satisfacer las necesidades cuantitativas y cualitativas de la población dentro de los principios y el marco del Buen Vivir. Por tanto, los aparatos para medir y comprender la situación de pobreza, no solo se han concentrado en los aspectos de acceso a servicios e infraestructura, sino al nivel de "bienestar" del individuo, conjuntamente con los estudios de NBI, Encuestas de Condiciones de Vida y de Consumo.

En cuanto a la segunda, emplear el concepto de "ciudadanía" permitía al gobierno de Alianza País cubrir a todos los habitantes (independientemente de sus particularidades individuales y colectivas) bajo el manto del estatus político que los facultaba legal y simbólicamente al ejercicio político. Se configuró una lógica de "nosotros" que se establecía como una identidad opuesta al

¹⁶ Si bien la filosofía del Buen Vivir reconoce la importancia de las libertades individuales, hay que tomar en cuenta que en el Ecuador del 2008 esta postura se posiciona políticamente en contra de la concepción egoísta, individualizante y atomizante devenida desde el neoliberalismo, para proponer una libertad personal pero en función del respeto a las libertades ajenas, las cuales se relacionan más con los derechos políticos y sociales como el camino previo para materializar los derechos civiles.

“yo” del neoliberalismo y al “ellos” de la partidocracia. Por lo tanto, no requirió del apoyo político de grupos populares y movimientos que inicialmente buscaron reivindicaciones sociales, tales como los indígenas, campesinos y obreros, pero cuyas luchas habían sido secuestradas y/o cooptadas y apropiadas por los grupos tradicionales de poder; sino que acudió a la población a las clases medias y bajas afectadas por la crisis financiera del 99 y avivó su deseo de una transformación política y económica radical en el país (Manosalvas 2015).

La construcción del “nosotros” y la materialización de la *ciudadanía* se manifestaba a través de la planificación participativa, un modelo organizativo en donde al “pueblo” (entendido como los estratos medios y bajos) se le brinda los mecanismos para formar parte de la toma de decisiones del gobierno, así como la observación y regulación de las obras y accionares realizados por instituciones públicas o que utilicen fondos públicos. De la mano de instituciones públicas destinadas al control social desde la ciudadanía, se configuran las competencias y organicidad de la planificación nacional dentro del PNBV 2009-2013.

Neira (2011) y Mejía (2011) explican que la planificación del Buen Vivir incorpora los planteamientos del “derecho a la ciudad” (presentes de manera más detallada en el PNBV del 2013-2017), como un elemento vital para el desarrollo de mecanismos de igualdad y equilibrio urbano-rural en la sociedad, incorporando además el aspecto de geográfico y ambiental como indicadores de bienestar. Constatar a la naturaleza como un recurso y a los ciudadanos como sujetos de derechos, implica crear ciudades que no reproduzcan las injusticias espaciales y sociales, ni que se expandan de manera desordenada, desregulada, sin servicios ni las infraestructuras básicas para garantizar el Buen Vivir. El equilibrio social requiere del equilibrio ambiental.

El posicionamiento político e ideológico del medio ambiente, los derechos, la equidad, el equilibrio, el reconocimiento de grupos e identidades, entre otros elementos que pertenecen a la Teoría del Desarrollo Humano y se convierten en los pilares teóricos para la conformación de las políticas públicas del Buen Vivir en relación con las poblaciones pobres y en situación de desigualdad, provienen básicamente de los análisis de Amartya Sen, algunos de los cuales deben ser enunciados para dar sentido al énfasis de la política pública en el ámbito de los derechos.

La Constitución del 2008 y el PNBV, consideran que el Estado tiene el deber de intervenir gubernamentalmente en la sociedad para asegurarle al ciudadano/a unos elementos mínimos de ingreso, nutrición, sanidad, vivienda, educación e ingresos como un derecho político y no como una expresión de caridad, lo que coincide tanto con la filosofía del Buen Vivir, como con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Manosalvas 2015).

Esta postura cuestiona al movimiento neoliberal que considera al crecimiento económico como un fin y no como un medio destinado a mejorar la calidad de vida de las personas, propagar la libertad para el desarrollo de una vida digna y el proveer las oportunidades para ello (Sen 1988). Las experiencias ocurridas en Kerala¹⁷ demostraron que una población en drástica situación de hambre, pobreza, enfermedad y analfabetismo, puede mejorar enormemente sus condiciones de vida sin la necesidad de crecimiento económico, sino a través de reformas de salarios, programas sociales de distribución de asistencia sanitaria y alimenticia, entre otros proyectos que contaban con la participación de las clases medias y altas a favor de responder las demandas sociales. Es decir, aún con bajos ingresos o no aumento de los mismos, es posible crear efectivos mecanismos de protección social (Manosalvas 2015).

Esta situación fue posible debido a que en el diseño de los programas de intervención y protección social se dejó de lado la búsqueda de maximización de la utilidad de los recursos, sino la asignación de los mismos en función de la "equidad" o la "justicia" en la distribución del bienestar. De esta manera se desecha el axioma utilitarista de la Teoría de la Elección Social del Bienestar Social y se lo reemplaza con el *enfoque de capacidades*: el concepto de "igualdad" es insuficiente para lograr equidad y justicia, pues, por ejemplo, una persona físicamente disminuida no podrá funcionar de la misma manera que una no disminuida, aunque ambas posean los mismos recursos. Cada individuo, según sus características, posee sus propias capacidades y por tanto diversas formas para desarrollarlas (Sen 1999, Manosalvas 2015).

En su aplicación, los derechos y principios filosóficos que guían del Buen Vivir resultan equivalentes a lo que Sen (1998, Manosalvas 2015) denomina *tiularidades*: en países subdesarrollados el Estado de Bienestar está básicamente limitado a las minoritarias poblaciones

¹⁷ Estado ubicado al sur occidente de India

formales con trabajo, salario básico, vivienda y seguro social; pero institucionalmente inaccesible para las grandes mayorías. En este contexto, las titularidades comprenden un compromiso legal del Estado por provisionar a los *destituidos* (poblaciones con particularidades físicas, mentales, de salud, etc., específicas que no son reconocidas por el Estado) de las condiciones necesarias para que realmente puedan convertirse en sujetos de derechos civiles, políticos y sociales.

El objetivo del desarrollo, por tanto, no enfoca en otorgar a los sujetos de unos mismos recursos que los lleven a alcanzar el bienestar, sino que el sujeto se desarrolle acorde a sus capacidades y necesidades particulares para que llegue al bienestar. Las personas no transforman a los bienes en ventajas en si mismas, sino que deben poseer de ciertas características previas que le permitan el acceso a dichas ventajas. El "bienestar", de esta manera, consiste en la posibilidad real de que las personas conviertan las ventajas en satisfacción de necesidades y deseos; en ello radican el éxito o fracaso en el ejercicio de las libertades individuales (Manosalvas 2015).

Desarrollar un mecanismo que mida los niveles y tipos de capacidades de los individuos, es vital para diseñar escalafones de distribución de recursos según las necesidades y, con ello, proveer de las mismas oportunidades reales a los sujetos para su desarrollo. El capital humano, tal como lo han demostrado diversas poderosas economías en todo el globo, consiste en el principal insumo para la constitución de sociedades más justas, equitativas y de bienestar (Sen 1998, Manosalvas 2015).

La principal y más importante política pública diseñada para cumplir las metas del PNBV respecto a las poblaciones en situación de pobreza y desigualdad, se enfocó en reformular y potenciar el *Bono de Desarrollo humano* (BDH). Tras el fracaso de la aplicación del Bono Solidario del periodo neoliberal de Mahuad, en el 2003 se instaura el nuevo programa de acción de protección social a través de transferencias monetarias, pero ya no desde una perspectiva asistencialista, sino desde el abordaje de las condicionantes estructurales que determinan la pobreza, para promover el desarrollo de las capacidades y el capital humano (Cerón 2010, Almeida 2009).

Teniendo como población objetivo a los grupos más vulnerables y en mayor condición de pobreza de la población en general (niños, niñas, población adulta mayor y discapacitados), el BDH pretende:

- Ampliar el capital humano y evitar la persistencia de pobreza mediante trasferencias monetarias a las familias que se encuentren bajo la línea de pobreza.
- Garantizar el nivel de consumo mínimo en los hogares.
- Contribuir en la disminución de desnutrición y enfermedades prevenibles en menores de 5 años de edad.
- Promover la reinserción y la asistencia escolar continua en niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años de edad.
- Proteger a adultos mayores y personas con discapacidad.¹⁸

Este estipendio económico es entregado a los encargados/as, representantes o jefes/as de hogar bajo el principio de coresponsabilidad, el cual los conmina a emplear el bono en cubrir las necesidades mínimas educativas, alimentarias y de salud en los hogares, garantizando la satisfacción de un nivel de vida básico y digno (Cerón 2010).

4.3.4. Los "beneficiarios" del discurso del Buen Vivir en el Ecuador: la pobreza urbana del 2000's

El significado local

Con la llegada del proyecto del Buen Vivir, operativizado y difundido mediante el título político de la "Revolución Ciudadana", comienza el periodo posneoliberal en el Ecuador, encargado de tratar con la profunda crisis política y económica que heredaba de las décadas de neoliberalismo en el país. Como pudimos apreciar en el acápite referido a los "beneficiarios del discurso de la pobreza en los 90's" la liberalización del mercado y el comercio se encargó de acentuar las ya drásticas condiciones de pobreza nacional, recreando los patrones de acumulación urbana y desposesión del agro de los 70's, "despolitizando" la política económica nacional y dejando a la

¹⁸ Información recogida en el portal web del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Consultado el 02/08/2018. Disponible en: <http://www.inclusion.gob.ec/objetivos-bdh/>

nación a merced de los intereses de banqueros y financistas: nunca hubo tantos pobres y, los pobres, nunca fueron tan pobres como en este periodo en el Ecuador.

La población en general, deja de confiar en la política y en los políticos. Décadas de corrupción y saqueo económico, habían minado la credibilidad de cualquier discurso tradicional que viniera a ofrecer un mejor porvenir en tanto sea pronunciado por los mismos individuos y partidos que habían empobrecido al país (Vera 2013). En ello, resalta la propuesta alternativa al desarrollo del Buen Vivir. El gobierno de Correa propone una mixtura entre los aspectos positivos para la reducción de la pobreza y la desigualdad, de los modelos de desarrollo de los 70s (el Estado de Bienestar) y los 90s (el potencial del mercado y el comercio). Desde el 2007 que asume el poder, el liderazgo de Correa permitió que los poderes tradicionales, por más de sus contradicciones inherentes, apostaran hacia un mismo lado: se establece una nueva constitución, gana grandes mayorías en la recién constituida Asamblea Constituyente, se recupera los poderes del Estado y se aumentan otros, se expulsa del país al FMI y al Banco Mundial, entre otras acciones que complacieron las emociones de enojo de los votantes que colocaron a Alianza País en Carondelet. El estilo confrontativo y frontal del líder de Alianza País se concebía como el necesario para devolver la soberanía y respeto al Ecuador (Dávalos 2014).

Con el apoyo político, económico y social, la "Revolución Ciudadana" se dispone a construir la sociedad del Buen Vivir, un concepto integrador que reconoce las necesidades físicas, mentales y emocionales de los sujetos, sus características étnicas, raciales y culturales, sus devenires históricos, así como la necesidad de mantener una relación con el entorno natural que no genere desequilibrios que comprometan a futuras generaciones. Estos principios, se enmarcan su vez en los denominados "derechos de segunda generación": referidos a los derechos económicos, políticos y sociales que deben ser cumplidos para crear sociedades democráticas y justas. Desde éste particular enfoque de derechos, se considera que una sociedad no puede alcanzar la justicia, la igualdad y equidad, mientras se vulneren los derechos básicos, que, en el caso ecuatoriano, se encarnaban principalmente en lo que se denominaron grupos "vulnerables" o "prioritarios": mujeres, niños/as, adolescentes, discapacitados, enfermos permanentes y la tercera edad (León 2015).

La pobreza es multidimensional y corresponde a la existencia de mecanismos sociales, políticos, de género, geográficos, históricos, étnicos, institucionales y legales para mantener las jerarquías que lucran de ella. Erradicarla requiere un abordaje integral que borre estas formas de discriminación paralelamente ofreciendo los medios pertinentes para la movilidad social y mejoramiento de la calidad de vida, ofreciendo a todos los sujetos, independientemente de su origen, la posibilidad de realizar su propio plan de vida (SENPLADES 2014).

En un informe titulado: *Estrategia nacional para la igualdad y la erradicación de la pobreza*, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2014), presenta los éxitos de la aplicación de las políticas de inversión social (principalmente en educación y salud), contra la discriminación (como la igualdad de salarios) y de integración social (como la educación cultural bilingüe), entre otros aspectos, en los que se enfoca el Buen Vivir y aplicados principalmente desde el programa de transferencias monetarias, el Bono de Desarrollo Humano:

En cifras generales, en el periodo del 2005 al 2010 la probabilidad de que una persona salga de la pobreza aumenta del 34% al 47%. La pobreza por NBI en sectores rurales se reduce del 91% al 38%. En cuanto a la pobreza por ingresos, baja del 37,6% al 25,5%, y la pobreza extrema del 16,9% al 8,6% entre el 2007 y 2013. Más de un millón de personas salieron de la pobreza y 900 mil de la extrema pobreza en dicho lapso de tiempo (SENPLADES 2014).

En cuanto a la pobreza y desigualdad relacionada con la étnia (un aspecto que por primera vez se medía en el país), resaltan que los afroecuatorianos y montubios (rurales), son quienes más sufren de carencia de servicios a infraestructura, principalmente en agua potable, calidad de agua y recolección de basura. Mientras que los indígenas y afros (urbanos), están en una grave situación de hacinamiento.

Al menos a nivel legal e institucional, Alianza País formuló una serie de reformas y propuestas encargadas de quebrar dichos poderes tradicionales que empobrecían a las mayorías para enriquecerse; la victoria de estas se vería reflejado en las reducciones de niveles de desigualdad y pobreza medidos por NIB, consumos, ingresos, analfabetismo, aumento del empleo, disminución de mortalidad infantil, etc.

El Bono de Desarrollo Humano, pretendió focalizarse en las necesidades de las poblaciones más urgidas para brindarles apoyo en todo ámbito, asegurándoles un nivel de vida digno, ético y sin pobreza. La expansión del sistema educativo y de salud buscó desconcentrar los servicios y las infraestructuras en todo el país, superando las barreras geográficas de las coberturas. Con los mecanismos de control ciudadano (como los observatorios o las veedurías), la sociedad adquiere un rol político y la capacidad de solicitar rendición de cuentas de todo lo que sea hecho con fondos públicos, la facultad para denunciar irregularidades. Dado que ahora todos se han convertido en sujetos de derechos, se ha eliminado un pilar estructural de la discriminación y abusos de poder, ahora cada ecuatoriano/a es igual ante la ley. O al menos eso proclama el discurso de la Revolución Ciudadana y su socialismo del siglo XXI que ha pretendido asegurar que nos encontramos en un país que ha logrado al fin la verdadera democracia y, por tanto, el camino seguro a la igualdad y la justicia. No obstante, como presentamos en el acápite de "anti tesis", el discurso ético, moral, justo, transparente, a favor de los pobres y desposeídos de la Revolución Ciudadana, tiene otra cara.

En primer lugar, esta "revolución socialista", aunque sea del "siglo XXI", desde el punto de vista conceptual, no puede llamarse como tal. Como afirma Follari (2014), el socialismo implica el fin del capitalismo, se trata de que las masas oprimidas acaben con la propiedad privada de los medios de producción y los socialicen, una ruptura profunda que modifique las relaciones materiales de existencia. El gobierno de Correa, nunca pretendió eso: no fue el resultado de una victoria revolucionaria conformada por clases bajas para derrotar a su antagónico ubicado en el Estado burgués. A pesar de utilizar términos marxistas, la Revolución Ciudadana no marcó una transformación apreciable desde el materialismo histórico, sino desde el idealismo liberal, simplemente una revolución de conceptos e ideas apreciables básicamente desde las clases medias y altas, educadas y aristócratas.

A diferencia del periodo neoliberal y desarrollista, las clases pobres no representaban el peso electoral que haría ganar las elecciones a Correa, sino las clases medias golpeadas y molestas con el neoliberalismo, las cuales no podían ser convencidas únicamente con un discurso "pro pobres", pues no formaban parte de ese grupo, pero sí desde uno enfocado en la "ciudadanía". Como lo presenta Dávalos (2014), después de la crisis del 99, los comerciantes y banqueros de la costa

(los mayores representantes del periodo neoliberal) quedaron sumamente golpeados, principalmente aquellos cuyos bancos tuvieron que cerrar, como: Grupo Isaias (Filanbanco), Aspiazu (Banco del Progreso), grupo Guerrero Farber (Banco La Previsora), y grupo Maspons Bigas (Banco del Pacifico). En ese vacío de poder e inconformidad del pueblo, asume el poder Lucio Gutierrez. Poco tiempo le tomó traicionar estos principios de "izquierda" y vincularse con el plan de gobierno de EEUU, para finalmente ser derrocado por los denominados "Forajidos", un *movimiento ciudadano* específicamente quiteño conformado por clases medias y altas con suficiente fuerza e influencia como para no haber necesitado el apoyo de ninguna otra ciudad del país para botar al presidente. Por primera vez, desde que se fundó la República del Ecuador, el poder político y económico se concentraba en Quito, tanto por su gente como por los financistas serranos vinculados con el mercado de inversiones extranjero.

Gracias a esto, ser "ciudadano" se convierte en una identidad social, un símbolo de lucha y empoderamiento político que aglutinó a clases altas, medias y bajas con un mismo propósito: un profundo cambio político y económico en el país. La tajante distancia y radical actitud de Correa contra la "partidocracia" lo presenta como el líder de esta ciudadanía rebelde, lo que deriva en el nombre del proyecto "Revolución Ciudadana" (Dávalos 2014, Cuevas 2014).

La postura post neoliberal de Correa fue necesaria para concentrar a la población votante en un mismo proyecto: por un lado, tenía que complacer a las clases medias y altas contentas con el neoliberalismo y no deseaban un cambio de modelo, sino un mejor gobierno; por el otro lado, las clases medias-bajas y bajas exigían un Estado protector que garantice su bienestar más allá de la voluntad del mercado. Las primeras, básicamente conformadas por blancos y mestizos, urbanos, educados y profesionales; los segundos, por indígenas, montubios y afroecuatorianos en situación de marginalidad, habitantes del campo y ciudades pequeñas. Cada grupo con su propia historia, sus propias identidades particulares, sus intereses individuales, sus luchas y resistencias, e incluso su propio idioma y cosmovisión ¿Cómo conciliar ideológica y políticamente a personajes tan diversos e incluso antagónicos entre sí? Alianza País fue elegido por los ciudadanos, urbanos y quiteños que querían "recuperar" el control del país desde su propia posición de urbanitas que únicamente compartían una similar situación socio económica y su desprecio por el gobierno de la época; no por una ideología, no un proyecto en sí. Gobernar para éstos, sin concentrar el poder

legal y simbólicamente en estos individuos, requiere que Alianza País convierta a todos los/as ecuatorianos/as en "ciudadanos/as" (hayan o no pertenecido al "movimiento ciudadano" original) a través de los derechos.

Vale recordar las palabras de Tilly (1998) respecto a que, históricamente, los derechos son los botines de guerra que el Estado reconoce a las poblaciones que protestan y son capaces de desequilibrar el poder estatal, como mecanismos para asegurar la paz social. En el caso de la Revolución Ciudadana, "regalar" los derechos a unas poblaciones que no han luchado por ellos, implica, al menos, tres cosas:

- 1) Las luchas y reclamos de las poblaciones quedan deslegitimadas, pierden la meta de lograr el reconocimiento del Estado que se materializa en la negociación y concesión de derechos acorde a las exigencias realizados por los mismos insurrectos. Sino que es el mismo Estado quien determina lo que desea "regalar" acorde a sus intereses.
- 2) Al convertirse en "sujetos de derechos", las poblaciones deben reconocer implícitamente el mecanismo de transformación de la realidad reconocido por el Estado: la democracia. En las sociedades democráticas, los cambios no se logran con protestas, sino a través de la voluntad popular a través del sufragio y otros mecanismos de reconocimiento popular validados por el Estado.
- 3) Aceptar el "regalo" de los derechos de "ciudadano", implica aceptar una deuda con el Estado, que debe ser saldada con el cumplimiento de deberes y corresponsabilidades.

En el caso de las poblaciones pobres, aquellas desprovistas de derechos y en quienes se enfocaron todos los planes de la Revolución Ciudadana para la construcción de sociedades más justas y equitativas, esta "deuda" con el Estado se manifestó en el diseño del Bono de Desarrollo Humano. No obstante, este programa de transferencias económicas condicionadas tal como ya mencionamos, no nace con la Revolución Ciudadana, sino que fue parte de una estrategia regional implementada en toda la América Latina neoliberal desde mediados de los 90's para calmar las protestas de las grandes poblaciones empobrecidas por este modelo (Dávalos 2014). Como lo vimos anteriormente (Almeida 2009, Cerón 2010), este programa surge inicialmente como el "Bono Solidario" en el gobierno de Mahuad, posteriormente cambia su nombre al actual

Bono de Desarrollo Humano en el gobierno neoliberal de Gustavo Noboa, se mantiene con Gutierrez y Palacios, hasta la llegada de Correa en el 2007. En los cinco gobiernos que presencié, el bono no transformó su estructura ni objetivos esenciales: entregar un incentivo económico a los hogares determinados como “pobres”, teniendo a la mujer-madre como la encargada de administrarlo dentro del hogar y gastarlo en los servicios que exige el Estado para el desarrollo del capital humano en educación y salud, erradicando la pobreza presente e intergeneracional.

Si bien la pobreza en el periodo de Alianza País se aborda multidimensionalmente, el bono es mismo de la época neoliberal en su lógica de aumentar la capacidad de consumo en las familias como el mecanismo de superación de la pobreza. En ese sentido, no podríamos afirmar que el periodo post neoliberal-Buen Vivir en el Ecuador y la Revolución Ciudadana tengan en sí un concepto o un discurso concentrado en definir la pobreza urbana, por la naturaleza misma de su propuesta que homogeniza a la población pobre, independientemente de su lugar de asentamiento, como aquella “carente de derechos”. Esta demoninación abstracta de abordar las necesidades del humano, permite pasar por alto cualquier característica material y espacial para encasillar cualquier particularidad bajo el paraguas de “vulnerables” o “de atención prioritaria”. Aquí podemos mencionar que a pesar de que la Revolución Ciudadana emplea el enfoque del “derecho a la ciudad”, realmente no utiliza sus teorizaciones, pues no pretende comprender a la conformación específica, las características y particularidades propias de la pobreza urbana (ni rural), como base para arrancar sus programas de intervención; sino que lo instrumentaliza como uno más de sus conceptos que evocan la idea de justicia y derechos.

Romper con dichas relaciones de poder, implicaba adentrarse en la subjetividad negativa e inmovilizante que genera la sensación de pobreza justificada, que responsabilizaba a los sujetos de su pobreza, según el discurso neoliberal. Los “derechos” implicaban un cambio de apreciación de las causas que producen una realidad específica y empoderaba con esa identidad “rebelde” del ciudadano a producir una revolución desde abajo (SENPLADES 2014).

La pobreza urbana o rural, por ingresos o NBI, por raza, étnia o género, deja de ser un problema material y se convierte en una apreciación política de los propios individuos, una actitud que

puede ser transformada con un cambio de perspectiva rebelde y empoderada que empuje a los sujetos a que ellos mismos decidan sus destinos y determinen sus realidades a través del cumplimiento de los principios del Buen Vivir. La "democracia" se convierte en el mecanismo de solución de todos los problemas dentro de los Estados liberales soñados desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, posterior a la Revolución Francesa y ese mismo axioma se mantiene en el gobierno de Alianza País.

Los pobres con derechos, irónicamente, pierden el "derecho" de protestar sobre sus situaciones de pobreza, puesto que el Estado ya les ha brindado los mecanismos necesarios para superar su condición de pobreza. Paradójicamente, la forma en la que se aplican los derechos y los ejercicios democráticos, no fueron democráticamente elegidos, sino impuestos como mecanismo para la acumulación de poder político.

Esa pobreza urbana marginal e indigenizada de los 70's, y ociosa-femenina de los 90's desaparece en el discurso post neoliberal, para reemplazarse con una pobreza urbana neutral, sin carga política, histórica ni espacial, sin identidad propia, absorbida y reconocida únicamente como una expresión "ciudadana" y escuchada solamente a través del mecanismo no reivindicativo ni conflictivo aceptado por el Estado, la vía democrática.

Este aspecto se materializa de manera clara con la expedición del Decreto 016 en junio del 2013, donde el entonces presidente Correa presenta el "Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas". Según éste decreto, las organizaciones sociales ya conformadas o ya conformándose en el Ecuador y que desearan tener el reconocimiento del Estado como tal, debían registrarse y obtener un certificado emitido por el RUOS (Registro Único de Organizaciones Sociales), tras cumplir con una serie de requisitos y actividades impuestas y proveídas desde el Estado como: recibir formación sobre participación conjunta con el Estado; ejecución y control de programas, proyectos o actividades de interés público; capacitación y asistencia técnica para la promoción y fortalecimiento de la organización social etc.

Antes de conformarse, quienes deseen formar una organización, debían establecer y presentar un Estatuto al Estado, que cuente con aspectos como: ámbitos de acción, alcance, fines y objetivos, tipo de actividades, estructura organizacional, derechos y obligaciones de los miembros (datos de cada uno de ellos), reglamento interno, patrimonio del que dispone, mecanismos de inclusión y exclusión de miembros, el certificado de aprobación del RUOS, entre otros requisitos. Así también, las organizaciones sociales debían organizar, sistematizar y conservar toda información y documentación generada durante su vida y entregar periódicamente esta documentación al Estado según los reglamentos.

La "ciudadanía" y los "derechos" se habían transformado en la excusa para que el Estado controle, medie y reconozca (o desconozca), y legitime (o deslegitime) legalmente a las organizaciones sociales que no compartieran su postura. Al atribuirse en sí el rol de "revolucionario", el correísmo concebía a cualquier otra formación como una potencial enemiga que atenta contra su postura ética, moral y pro social, por lo que debían ser reprimidas. ¿Quién sino las clases empobrecidas van a ser las voces más legítimas que exijan reconocimiento por parte del Estado? Un reconocimiento devenido de ellas mismas y no arrebatado y políticamente apropiado por las perspectivas pequeño-burguesas de la alta política aristocrática nacional.

El Estado "democratizó" únicamente en discurso legal y político a los sujetos, les brindó derechos que no solicitaron ni saben como utilizar a cambio de obligarlos a responder a sus obligaciones frente al gobierno. La pobreza, urbana o rural, es reconocida como un proceso histórico y multidimensional (SENPLADES 2013, 2008) pero su abordaje político por parte de Buen Vivir es indiferente a estas particularidades gracias a los mecanismos abstractos y puramente ideológicos de los "derechos". Para la primera década del 2000, en Ecuador se ha constituido una amalgama de discursos sobre la pobreza que mezclan los preceptos de ese pobre marginal, rural, vulgar, femenino, ruralizado, ocioso y, ahora, sin reconocimiento por fuera de los márgenes del Estado de derecho. La "ciudadanía", civilizada, urbanita y de diálogo se constituye el elemento que diferencia nuevamente a pobres (los que aún no tienen derechos ni son democráticos), de los no pobres.

Discusión final

Los estudios urbanos y de la ciudad tradicionalmente se han enfocado en tratar ciertas temáticas casi emblemáticas, tales como la: planificación urbana, dotación de servicios, vivienda social, gentrificación, espacialización de problemáticas sociales, vialidad, entre otros ámbitos similares que le han dotado de cierta identidad y, por tanto, límites en cuanto a lo que los urbanistas tienen como sus competencias teóricas, de trabajo y de debate.

El presente trabajo no calza dentro de dichos límites, sino que busca expandirlos. A lo largo de estas páginas no hemos perseguido la meta de recrear investigaciones y estudios ya formulados en innumerables ocasiones, aplicando las mismas metodologías allí implementadas y a casos de estudio que pueden o no haber sido ya abordados, pero donde el resultado del análisis no se distanciará mayormente de la investigación original, ni aportará con material novedoso a un debate o una comprensión distinta de la realidad.

La academia no necesita de la reproducción de procesos y fórmulas ya probadas que deriven en la redacción de un trabajo de titulación, sino en la enunciación de tesis originales que exploren nuevos aspectos de una rama de pensamiento, se aventuren a la interdisciplinariedad, choquen contra las grandes discusiones y apuesten por construir otra interpretación y abordaje de las problemáticas existentes.

Esto es justamente lo que hemos pretendido al abordar la pobreza urbana como una construcción discursiva. Un acercamiento que requirió encontrar y diseñar una metodología propia de comprensión del fenómeno, sumergirse en análisis históricos descriptivos, entre tejer las complicadas relaciones de poder político, económico y social a nivel nacional e internacional para finalmente poder entender lo que subyace a elementos teóricos que se dan por sentado en general. Todo este ejercicio reflexivo nos permitió evidenciar que los estudios urbanos ofrecen mucho más de lo que tradicionalmente se les ha atribuido.

Concebimos a la ciudad como el escenario del desenvolvimiento de toda nuestra investigación, más allá de si las temáticas hablan específicamente de elementos urbanos (servicios, infraestructura, etc.), pues la entendemos como un agente activo, el resultado y a la vez el

causante de la constitución del fenómeno de la pobreza. No es un entorno estático, muerto, desprovisto de capacidad de ejercer influencia en la realidad, sino que es un actor más en este teatro social. Podríamos verlo como un individuo completo, con su propia personalidad, historia, temperamento, jerarquizado, clasista, racista, con su particular visión del mundo y modos de hacer las cosas, que habrá algo que le moleste y algo que le guste, que puede ser o no tolerante a las diferencias de los habitantes que acoje en su cuerpo. Que puede ser sujeto de carácter impositivo, que no permite albergar ni interactúa con nadie que no respete las reglas, formas de vivir, pensar y actuar que le parezcan propias de sí mismo, de la ciudad, de lo urbano.

Por ello, cualquier idea, propuesta o proyecto que provenga de un entorno urbano, estará condicionado y determinado por el molde que impone el poder de este actor llamado "Ciudad" y, a su vez, la Ciudad será influenciada por la construcción y aplicación de dicha idea o propuesta que provenga de sí misma. Los individuos somos uno con nuestro entorno, pues no estamos separados sino que somos una extensión de él, y él es una extensión de nosotros.

Si una ciudad nació y fue construida en base a, por ejemplo, divisiones jerarquizadas en función de la raza y el nivel socio económico, pues toda propuesta que provenga de sus habitantes, no hará sino recrear la identidad de dicha ciudad. Argumentará y justificará como natural el que la raza hegemónica habite en las mejores zonas, provistas de servicios e infraestructura, mientras que las otras lo harán en las periferias. Si otra ciudad devino de una historia de igualdad y respeto, será tolerante y estará abierta a la llegada de migrantes y refugiados a quienes se tratará de brindar las mismas condiciones de vida que el resto de la población.

En ambos casos, es la identidad de los individuos y su ciudad lo que determinará si es que en ella van a desenvolverse o no grandes proyectos inmobiliarios residenciales, infraestructura y servicios para las referidas poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad; lo que ahora sí entraría en el grupo de las temáticas tradicionales de interés para los urbanistas y planificadores urbanos.

Con esto queremos argumentar lo factible que es comprender procesos que aparentemente pueden ser completamente ajenos a los estudios urbanos (como pueden ser los proyectos de

desarrollo), enfocándonos en observar y comprender cómo dichos procesos están estructuralmente contruidos y las consecuencias que generan en el concreto.

Antes de la materialización de una calle, un conjunto de residencias, una avenida, la recuperación de un parque, la generación de espacios públicos, gentrificación de un barrio, etc., tuvo que existir todo el movimiento de una serie tejidos históricos, políticos, económicos, simbólicos que le dieron un sentido, una forma y una intención específica a esa materialización. Existe siempre una base subjetiva que otorga coherencia a la realidad que construimos con bloques y cemento frente a nosotros, y esa subjetividad es la del agente "Ciudad".

Durante los tres periodos de desarrollo abordados aquí, puede verse claramente como cada grupo de urbanitas al poder del Estado, construyó un discurso sobre la pobreza que calzara y mantuviera la identidad de desigualdad, colonialista, jerarquizante, de segregación, racista, sexista y demás elementos que de por si han sido los constitutivos de la identidad de una ciudad y, por tanto, de su población. La "Ciudad" se expande como una especie de conciencia que se inmiscuye en el imaginario, la apreciación de la realidad y el sentido de vida de los individuos, los urbaniza y ciudadaniza para poder acogerlos y darles un uso dentro de las relaciones de poder y desigualdad. Finalmente, queremos puntualizar que si este trabajo realiza un aporte relevante, que sea el siguiente: ninguna problemática ni interés en los estudios urbanos puede abordarse y analizarse de manera integral y explicativa, si pasamos por alto o preferimos ignorar los elementos subyacentes que configuran dichas problemáticas. Dedicamos meses de esfuerzo y trabajo para argumentar contundentemente que la pobreza urbana es una construcción discursiva, implementada en el marco de los proyectos de desarrollo, para justificar y naturalizar las relaciones de desigualdad y abuso que existen en las sociedades urbanocéntricas. La modificación material de la realidad urbana (infraestructura y servicios), devenido de ese desarrollo, contribuye a la consecución de ese discurso sobre la pobreza "urbanizada" que no hace más que mantener y profundizar la pobreza y la desigualdad. Pues aquí el debate no es de si construir o no más casas para los "pobres", sino sobre quienes somos como sociedad urbana, que tan tolerantes somos y deseamos ser con el resto de urbanitas y, a final de cuentas, si nos interesa o no vivir en igualdad en un escenario que no fue diseñado para ello. Construimos ciudades a nuestra imagen y semejanza, para reproducirnos a su imagen y semejanza.

Conclusiones

El análisis crítico del discurso nos ha permitido evidenciar qué existe detrás de los intereses altruistas, justos, democráticos y equitativos de los discursos de desarrollo: el posicionamiento político de un grupo u otro instrumentalizando electoralmente a las grandes mayorías pobres del país a las que, paradójica o cínicamente, se les ofrece salir de dicha condición. El desarrollo no pretende erradicar la pobreza porque necesita de ella, pero debe "crear" discursivamente el tipo de pobreza útil para cumplir los intereses de quienes ostentan la legitimidad del discurso. En los 70's, los militares desarrollistas necesitaron de ese pobre rural que se transformara en marginal urbano, sin educación ni preparación, dispuesto a tomar la mano guía del Estado paternalista que le prometía un futuro mejor si es que se dedicaba a trabajar en las industrias y actividades "urbanas" creadas por el mismo Estado.

Temiendo el poder de los sindicatos de obreros pobres y otras organizaciones sociales fuertes creadas en los 70's, en los 90's se requiere un pobre individualizado, incapaz de organizarse y emprender una campaña política contra un Estado como el causante de las desigualdades, sino el mercado, esa figura omnipotente y omnipresente a la cual no se tiene certeza de como enfrentar. Dentro de la lógica del mercado globalizado y la división mundial del trabajo, las clases altas necesitaban de trabajadores lo suficientemente preparados para que puedan cumplir con las labores de servicios, pero no tanto como para darse cuenta del rol del Estado en la generación de la pobreza.

El periodo post neoliberal, por su parte, vino de la mano del fortalecimiento del Estado extractivista y la reactivación su legitimidad del uso de la violencia. El petróleo y la minería engrosaban el presupuesto del Estado, el de los bolsillos de los accionistas y financistas nacionales vinculadas a ello, y el de los programas sociales y públicos. Este periodo necesita de una pobreza cobijada por la mano Estado en tanto sean pacíficos y se satisfagan con los derechos que se les regaló, pero atacados y criminalizados cuando mostraban insurrecciones. En la Revolución Ciudadana, los pobres pierden su identidad históricamente construida y pasan a ser un instrumento para la materialización del poder del Estado del Buen Vivir en función de la ciudadanía.

Todos los discursos de desarrollo se enfocaban en reducir la pobreza, a veces lo hacían y a veces no, pero siempre terminaban enriqueciendo más a las clases acomodadas urbanas que se encontraran vinculadas directa o indirectamente con los grupos de poder anclados en el Estado. Eso sí. Los ricos seguían siendo los mismos, pero los pobres no, ellos cambiaban conceptualmente, por lo que también debían cambiar los mecanismos para medir la evolución de la pobreza a través de instrumentos “científicos” en nombre, pero políticos en cuerpo y esencia. Durante todo este proceso, los gobiernos de turno embanderados de un particular discurso de desarrollo generaban un tipo de pobreza que, discursivamente, no podían abarcar a toda la población pobre, sino únicamente a aquella que le sirviera para sus intereses políticos y económicos. Cada discurso necesariamente genera discursivamente un vacío y una promesa incumplida, que se encarna en unos individuos que se constituyen conceptualmente como “pobres” para contextualizar de manera coherente un accionar político y económico, científicamente avalado a través de los instrumentos de medición (NBI, ECV, Pobreza Multidimensional, etc.) y otras herramientas econométricas competentes. Instrumentos cuyas variables para la medición de la pobreza provienen del discurso de desarrollo en boga, por lo que su fiabilidad es solamente aceptable dentro del proyecto político que lo generó, no dentro de una apreciación científica propiamente dicha.

Refiriéndonos a la pobreza por NBI (la cual se establece como un instrumento central), podemos notar que en todos los periodos de desarrollo, la comparación de la pobreza rural y urbana siempre resulta un elemento vital para medir los logros del gobierno. Por ello, la intención de enfocar nuestro análisis en la pobreza urbana, no ha permitido un análisis puramente enfocado en lo urbano, sino siempre en relación con lo urbano. Lo que nos lleva a la pregunta: tomando en cuenta el momento político, colonialista y discriminador que dio paso a la comparación de la ciudad (riqueza) con el campo (pobreza), ¿resulta pertinente, e incluso ético mantener esta comparación?

Si por los mismos motivos estructurales que dieron origen a las ciudades (el excedente de producción agrícola), la ciudad siempre va a poseer mayores inversiones, desarrollo de tecnología, gente más educada, mayor acceso a salud, etc., ¿Cuál es realmente la necesidad de tener a lo “rural” siempre a la sombra, persiguiendo el conseguir todas las ventajas que nacen

siempre del entorno urbano? Considero que esta relación urbano-rural, existe justamente por la necesidad intrínseca de la propuesta de desarrollo de realizar jerarquías, establecer discursivamente los modelos e ideales a seguir, y, por tanto, mantener las dinámicas hegemónicas en manos de los urbanitas de clases acomodadas.

Para comenzar a entrar a la revisión de la metodología empleada, arrancaremos diciendo que a lo largo del análisis realizado, hemos tratado de mantener una postura crítica que no se deje llevar por las preferencias ni desagradados por cada uno de los modelos de desarrollo y sus representantes, no obstante, es imposible no reconocerse a uno mismo, como sujeto histórico y político, en las diversas facetas ideológicas y pugnas de poder descritas en estas hojas en las que hemos presentado una síntesis de tesis y anti tesis de las teorías del desarrollo; produciendo a su vez una nueva "tesis". Resultaría coherente, por tanto, buscar la anti tesis de la tesis aquí enunciada, más no es tarea para este momento.

En el aspecto metodológico hay algunas cosas por decir. El Análisis crítico del Discurso es una herramienta que debe ser usada con sumo cuidado: nos enseña que todo en el mundo discursivo se encuentra atravesado por las dicotomías de la tesis y la anti tesis. Para que una ideología política se posicione, necesita del desprestigio de la vigente, la cual, a su vez, hizo lo mismo con la que la antecedía y así. Entonces, el rol del investigador no debe ser el de un detective de crímenes buscando descubrir una especie de "complot" escondido tras el discurso público para desenmascarar los intereses egoístas de quienes lo pregonan y con ello deslegitimar e invalidar la fiabilidad del discurso; de eso, como hemos visto, se encargan los mismos políticos como parte vital de su pugna de poderes.

A la metodología crítica no le compete proporcionar juicios de valor ni a lo oculto ni a lo expuesto, sino limitarse a evidenciar las redes de sentidos que existen en el contexto y sus elementos, para la comprensión integral del discurso como un mecanismo de dominación. En ese sentido, vale la pena alertar que actuar bajo dicotomías, no implica que los contenidos que conformen la tesis o la anti tesis, deben ser llevadas a los extremos a propósito para hacer calzar en la metodología estructuralista. La metodología utilizada solicita que ubiquemos la información

en uno de dos casilleros, pero es no implica que no haya matices en la fuerza o debilidad que un contenido tenga en la afirmación o negación del discurso.

Podemos vislumbrar que este mismo proceso discursivo, se va repitiendo ahora con una nueva perspectiva, la de la "Economía del Comportamiento", promovida por entidades como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Mediante la "arquitectura de las decisiones", pretende entender el por qué de las decisiones de los individuos para crear mecanismos para modificar el pensamiento y comportamiento de las personas de manera efectiva y sostenida en función de direccionar sus elecciones hacia conductas que mejoren su nivel de vida. No entienden a la pobreza solamente como falta de infraestructura y servicios, sino como un esquema mental que no permite pensar de manera reflexiva, siendo éste el origen de la pobreza (Word Bank Group 2015, Samson 2017, Thaler 2008). Es decir, no es una propuesta de desarrollo realmente nueva, sino una estrategia para satisfacer los vacíos conceptuales del neoliberalismo y cumplir sus promesas inconclusas, adoptando estratégicamente el enfoque de derechos y la inversión social.

En estas páginas tratamos un abordar un tema sumamente amplio, tomando como caso de estudio a períodos políticos que poseen mucha mayor complejidad de la que ha sido posible mostrar, por lo que hay mucha información que queda incompleta, análisis que necesitan mayor profundización y detalles que requieren ser más rigurosos. Se podría, por ejemplo, realizar una reconstrucción mucho más compleja y completa de las redes de amistades, intereses y poderes en cada uno de los periodos de desarrollo, con nombres y apellidos de los involucrados, el rol de las instituciones, la situación internacional y cómo ésta afectaba a la configuración nacional, etc. Esto complementaría en parte las falencias del presente trabajo.

Así mismo, sería complementario emprender una investigación en la que se realice esta misma reconstrucción del concepto de pobreza en el Ecuador, pero desde las perspectivas más locales, como desde las municipalidades. Una revisión rápida nos daría cuenta que cada ciudad, sea pequeña, mediana o grande, posee su propia configuración multidimensional que necesariamente va a verse plasmada en sus concepciones y accionares respecto a la pobreza, determinado una serie de proyectos políticos acordes a ello.

Queremos finalizar planteando una nueva inquietud, una que ya hemos mencionado párrafos atrás y resulta vital para entender la otra "versión" del desarrollo: ¿Cómo entienden los pobres a su propia pobreza, las causas, características e implicaciones de la misma? ¿Adoptan el discurso explicativo de su pobreza presentado en cada periodo de desarrollo o sus entornos particulares les brindan otra explicación que les resulta más accesible de comprender? Y, más importante aún, ¿cómo la explicación que tengan de su propia pobreza, venga de donde venga, condiciona su accionar ante ella?

Lista de referencias

- Abril, Gonzalo. 2007. Análisis semiótico del discurso. En: Delgado, Juan Manuel; Gutiérrez, Juan. (Coord). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales*. Madrid. Síntesis Psicológica. Pp 427-463
- Abramo, Pedro, 2011. *La producción de las ciudades latinoamericanas: mercado inmobiliario y estructura urbana*. Quito: OLACCHI.
- Achig, Lucas. 1983. *El proceso urbano de Quito, ensayo de interpretación*. Quito. Centro de investigaciones CIUDAD.
- Acosta, Alberto. 2006. *Breve historia económica del Ecuador*. Quito. Corporación Editora Nacional.
- Adler, Larissa. 1977. *Cómo sobreviven los marginados*. México. Siglo Veintiuno Editores.
- Aguilar Villanueva, Luis. 2009. *Gobernanza y gestión pública*. México: Fondo de Cultura Económica. Gudynas, Eduardo. (2011). *Buen Vivir: germinando alternativas para el desarrollo*. En: América Latina en Movimiento. Año XXXV. Época II. Pp 1-18
- Ayala Mora, Enrique. 2008. *Resumen Historia del Ecuador*. Quito. Corporación Editorial Nacional.
- Albornoz, Vicente. 2010. "La pobreza urbana en el Ecuador 1988-2009". En: *Carta Económica*. Febrero 2010. Disponible en:
http://www.losexplicadores.com/vicente/CartaEconomica/201002_La_pobreza_urbana_en_el_Ecuador_1988-2009.pdf
- Albornoz, Vicente y Oleas, Sebastián. 2012. "Ecuador". En: Jacob, Olaf. (Cord). *Pobreza, desigualdad de oportunidades y política pública en América Latina*. Brasil. Fundación Konrad Adenauer. Pp 87-97
- Almeida, Ruth. 2009. *El Bono de Desarrollo Humano en Ecuador: Encuentros y desencuentros*. Tesis de grado previo a la obtención del título de Maestría en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo. Quito. FLACSO.
- Banco Mundial. 2005. *Ecuador: Evaluación de la pobreza. Unidad sectorial de reducción de la pobreza y gestión económica America Latina y el Caribe*. Colombia. Alfa Omega.
- Barrera, Augusto. 2001. *Acción Colectiva y Crisis Política. El movimiento indígena ecuatoriano en la década de los noventa*. Quito. OSAL-Ciudad-Abya Yala.

- Bayón, María Cristina. 2012. *El "lugar" de los pobres: espacio, representaciones sociales y estigmas en la ciudad de México*. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Sociales. *Revista mexicana de Sociología* 74, núm. 1 (enero-marzo, 2012): 133-166. México, D.F.
- Burgos Dávila, Sebastián. 2013. Evaluación de la pobreza y desigualdades de ingreso 2006-2012. Notas Técnicas de Investigación. Nota Técnica No.5. ECONOMIA CIC.
- Bustelo, Pablo. 1999. *Teorías Contemporáneas del Desarrollo Económico*. Madrid. Editorial Síntesis.
- Cabello, Antonio-Martín. 2013. *Sobre los orígenes del proceso de globalización en Methaodos*. *Revista de Ciencias Sociales*. España. Universidad Rey Juan Carlos. Pp 7-20
- Cabrero, Enrique. 2000. "Gerencia pública municipal. Marco de análisis estratégico para la toma de decisiones en gobiernos municipales". En: *Gerencia pública municipal. Conceptos básicos y estudios de caso*. Enrique Cabrero y Gabriela Nava (Coords). México Miguel Ángel Porrúa, CIDE. Pp 19-90
- Cabrero, Enrique. 2008. "La innovación local en América Latina. Los avances y los retos". En: Enrique Cabrero y Ady Carrera (Coords). *Innovación local en América Latina*. México: CIDE. Pp 18-36.
- Carrión Cevallos, Giovanni. 2003. *El Ecuador del mañana desde una visión crítica al neoliberalismo*. Quito. Casa de la Cultura Benjamín Carrión.
- Carrión, Fernando. 1986. *El proceso de urbanización en el Ecuador (del siglo XVIII al siglo XX)*. Quito. Editorial El Conejo. Centro de Investigaciones Ciudad.
- Casilda Béjar, Ramón. 2004. "América Latina y el Consenso de Washington". En: *Boletín Económico de ICE*. No 2803. Pp 19-38
- Castells, Manuel. 1974. *La Cuestión Urbana*. Madrid. Siglo XXI Editores.
- Cerón, Rosario Alejandra. 2010. *El enfoque de género en los programas sociales de superación de la pobreza*. Tesis para obtener el título de Maestría en Género y Desarrollo. Quito. Flacso.
- Cepar. 1993. Perfil Sociodemográfico del Ecuador. Editora Efecto Gráfico. Quito
- Cicolella, Pablo. 2005. *¿Ciudades del capitalismo global: terra incognitae? Nuevas relaciones económico-territoriales, nuevos territorios metropolitanos*. Rio de Janeiro. Arquímedes. IPPUR.

- Cortés Morales, Alexis. 2013. *La urbanización dependiente y el proceso de marginalización en América Latina: Las contribuciones de Aníbal Quijano*. XXIX Santiago de Chile. Congreso Latinoamericano de Sociología. .
- CONAM. 1996a. *Reporte de actividades enero-junio 1996*. Quito. Presidencia de la República.
- CONAM. 1996b. *Informe de actividades del tercer trimestre de 1996*. Quito. Presidencia de la República.
- CONAM. 1994a. *Ecuador. Privatizaciones y prestaciones de servicios públicos por parte de la iniciativa privada*. Quito. Presidencia de la República.
- CONAM. 1994b. *Propuesta de reforma a la seguridad social*. Quito. Presidencia de la República.
- Cuevas, Rafael. 2014. "Ecuador: la búsqueda de una sociedad más equitativa y soberana". En: Núñez, Jorge. Coord. (2014). *Ecuador: Revolución ciudadana y Buen Vivir*. Quito. Yulca Editorial.
- Cuvi, Nicolás. 2011. "Auge y decadencia de la fábrica de hilados y tejidos de algodón La Industrial en Procesos". En: *Revista Ecuatoriana de Historia* 33. Semestre 1.
- Dávalos, Pablo. 2007. *Economía política de la asamblea constituyente*. En: Paz y Miño, Juan. (Edt). *Asamblea constituyente y economía. Constituciones del Ecuador*. Quito. Abya-Yala. Pp 57-91
- Dávalos, Pablo. 2014. *Alianza País o la reinención del poder*. Quito. Ediciones Desde Abajo.
- Davis, Mike. 2004. *Planeta de ciudades-miseria: Involución urbana y proletariado informal*. New Left Review, n. 26, mar-abr, 2004
- De Mattos, Carlos. 2010. "Globalización y metamorfosis metropolitana en América Latina: De la ciudad a lo urbano generalizado". En: *Revista de geografía Norte Grande*. No. 47 (diciembre). Pp 81-104.
- De Mattos, Carlos A. 2006. *Modernización capitalista y transformación metropolitana en América Latina: cinco tendencias constitutivas*. En *América Latina: ciudades, campo e turismo* / compilado por Amalia Inés Geraiges de Lemos; Mónica Arroyo y María Laura Silveira - 1a ed. - Buenos Aires: CLACSO; São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006. Pg. 41 – 74
- De Mattos, C. 2016. "Financiarización, valorización inmobiliaria del capital y mercantilización de la me-tamorfosis urbana". En: *Sociologias* 18.42: pp. 24-52.

- Díaz Bravo, Laura. Et.Al. 2013. La entrevista, recurso flexible y dinámico. En: *Investigación en Educación Médica*. Vol 2. No 7. Julio-septiembre. Pp 162-167
- Dorfman, Ariel y Mattelart, Manuel. (1983). *Para leer al Pato Donald, comunicación de masas y colonialismo*. Madrid. Siglo Veintiuno Editores.
- Dos Santos, Theotonio. 2002. *Teoría de la dependencia, balance y perspectivas*. México. Plaza y Janés.
- Egas, José María. 1975. *Ecuador y el gobierno de la junta militar*. Argentina. Colección Proceso 8.
- Engels, Frederich. 1845. *La Situación de la clase obrera en Inglaterra*. Disponible en <https://www.marxists.org/espanol/me/1840s/situacion/>
- Espinosa Tamayo, Alfredo. 1979. *Psicología y sociología del pueblo ecuatoriano*. Quito. Cooperación Editoria Nacional.
- Espinosa, Manuel. 2003. "Mestizaje, cholificación y blanqueamiento en Quito primera mitad del siglo XX". En: *Series Magister*. Volumen 49. Abya-Yala. Quito
- Evans, Peter, 1990, "Depredadores, desarrollistas y otros aparatos estatales. Una perspectiva comparativa político-económica sobre el Estado en el Tercer Mundo", en Alejandro Portes y Douglas Kincaid, compiladores, *Teorías del desarrollo nacional*, EDUCA, Costa Rica, pp. 133-173.
- Feres, Juan Carlos; Mancero, Xavier. 2001. *Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de literatura*. ONU-CEPAL. División de Estadística y Proyecciones Económicas. CEPAL-SERIE Estudios Estadísticos y proyectivos, No. 4. Santiago de Chile
- Fernández Güell, José Miguel. 2007. *25 años de Planificación Estratégica de Ciudades*, Artículo revista Ciudad y Territorio, Estudios territoriales, XXXIX (154).
- Fitoussi, Jean-Paul y Pierre Rosanvallon. 1996. *La nueva era de las desigualdades*, Manatíal. Buenos Aires.
- Follari, Roberto. 2014. "La Revolución Ciudadana: un lugar para los de abajo". En: Núñez, Jorge. (Coord). 2014. *Ecuador: Revolución ciudadana y Buen Vivir*. Yulca Editorial. Quito.
- Foucault, Michel. 1968. *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Siglo Veintiuno Editores. Argentina.
- Foucault, Michael. 1969. *Arqueología del Saber*. Siglo Veintiuno Editores. Madrid
- Foucault, Michael. 1976. *Vigilar y castigar*. Siglo Veintiuno editores. Buenos Aires.

- Foucault, Michael. 1992. *El orden del discurso*. Lección inaugural en el Collège de France.
- Fraser, Nancy. 2008 (2003). “La justicia social en la era de la política de la identidad: redistribución, reconocimiento y participación”, en *Revista de Trabajo*, Año 4, No. 6, pp. 83-99.
- Friedmann, Milton; Friedmann, Rose. 1980. *Free to Choose*. Harcourt Brace Jovanovich. London.
- Friedmann, John. 2005. “The World City Hypothesis” En: Lin, Jan y Mele, Christopher The Urban Sociology Reader. Routledge: New York. Pp. 223-229
- Gassull, Miranda. 2017. El hábitat popular. Algunos aportes teóricos de la realidad habitacional de sectores desposeídos. En: *Territorios*, (36). Pp 217-238.
- Giddens, Anthony. 2009. *Sociología*. Madrid: Alianza
- Gorelik, Adrian. 2014. *Miradas Cruzadas. El viaje latinoamericano del planning norteamericano*. Primavera N°18 Bifurcaciones. <http://www.bifurcaciones.cl/>
- González Sara. 2012. La geografía escalar del capitalismo actual. En: *Revista Pegada*, vol. 6.
- Guerrero, Andrés, 1991. *La Semántica de la dominación: el concertaje de indios*, Ediciones Libro Mundi, Quito.
- Gudynas, Eduardo; Acosta, Alberto. 2011. *El buen vivir o la disolución de la idea de progreso*. En: Rojas, Mariano (Coord). *La medición del progreso y el bienestar. Propuestas desde América Latina*. Foro consultivo científico y tecnológico. México. Pp. 103-110
- Gunder Frank, Andre. 1969. *América Latina: subdesarrollo o revolución*. México. Ediciones Era.
- Gunder Frank, Andre. 1973. *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*. Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores.
- Guzmán, Marco Antonio. 1994. *Bicentralismo y pobreza en el Ecuador*. Biblioteca de las Ciencias Sociales. Volumen 43. Corporación Editorial Nacional. Quito
- Guzmán, Marco. 2005. Pobreza, exclusion, iniquidad social en el mundo, en América y específicamente en Ecuador. Instituto Superior de Posgrados en Ciencias Internacionales. UCE. Quito
- Greene, Ricardo. 2005. “Pensar, dibujar, matar la ciudad: orden, planificación y competitividad en el urbanismo moderno”. En: *Revista EURE* (Vol. XXXI, N° 94), pp. 77-95, Santiago de Chile.
- Harvey, David. 2005. *A brief history of neoliberalism*. Oxford. New York.

- Harvey David 2014. Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Quito: IAEN.
- Hidalgo, R. et al. 2008: Tipologías de expansión metropolitana en Santiago de Chile: Precariópolis esta-tal y privatópolis inmobiliaria – Scripta Nova, XII, n° 270 (113).
- Herrera, Washigton; Navarro, Guillermo; Izurieta, Carlos. 1988. *Economía Ecuatoriana. Concentración económica y pobreza social*. Editorial Conejo. Quito.
- Hidalgo, R. & H. Zunino. 2011. La urbanización de las áreas periféricas en Santiago y Valparaíso: el papel de las relaciones de poder en el dibujo de la geografía socio-residencial. – EURE, 37.111: pp.79-105
- Hurtado Larrea, Osvaldo. 1977. *El poder político en el Ecuador*. Ediciones de la Universidad Católica. Quito.
- Hurtado Larrea, Osvaldo. 1988. *El sistema político en el Ecuador en Nueva Historia del Ecuador* de Enrique Ayala Mora. Editor. Volumen 13. Corporación Editora Nacional. Quito
- Hurtado, Osvaldo. 2001. *El poder político en el Ecuador*. Planeta, Ecuador. Quito
- Ibarra, Hernán. 2010. *Visión histórico política de la constitución del 2008*. Ediciones Centro Andino de Acción Popular. Quito
- JUNAPLA. 1972. *Lineamientos fundamentales del plan integral de transformación y desarrollo 1973-1978*. Junta Nacional de Planificación. Quito
- JUNAPLA; INEC. 1978a. *Preseminario de Población y Desarrollo en el Ecuador*. Publicaciones Junta Nacional de Planificación. Ibarra
- JUNAPLA; INEC. 1978b. *Preseminario de Población y Desarrollo. El desarrollo urbano en el Ecuador*. Junta Nacional de Planificación. Ibarra
- JUNAPLA 1979a. *Inventario nacional de Proyectos. Quinto Inventario*. Junta Nacional de Planificación, Sección Publicaciones. Quito
- JUNAPLA. 1979b. *Ecuador, Estrategia de Desarrollo (Lineamientos)*. Junta Nacional de Planificación, Sección de Publicaciones. Quito.
- INEC. 2016. Reporte de pobreza por Consumo, Ecuador 2006-2014. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
- Inedes. 1972. *Hacia la superación de la marginalidad*. Editorial Herder Barcelona. Instituto Ecuatoriano para el Desarrollo Social. Quito
- Iñiguez Rueda, Lupicinio. 2003. *Análisis del Discurso. Manual para las ciencias sociales*. Editorial UOC. Barcelona.

- ILDIS. 2005. *Análisis de coyuntura económica. Una lectura de los principales componentes de la economía ecuatoriana durante el año 2004*. Gráficas Araujo. Quito
- ILDIS. 2006. *Análisis de coyuntura económica. Una lectura de los principales componentes de la economía ecuatoriana durante el año 2005*. Gráficas Araujo. Quito
- Janoschka, Michael. 2002. "El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización". En: *EURE* (Santiago) [online]. 2002, vol.28, n.85, pp. 11-20.
- Katzman, Rubén. 2001. *Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos*. Revista Cepal, 75, Pg. 171-190
- Katzman, Rubén y Retamoso, Alejandro. 2005. Segregación espacial, empleo y pobreza en Montevideo. Revista de la CEPAL N° 85. Pg. 131-148
- Keynes, J.M. 1933. "Autosuficiencia nacional". En Acosta A. y Gudynas E. (eds.) (2009). *Libre comercio – Mitos y realidades*, pp. 1-10. Abya-Yala.
- Kingman, Eduardo. 2006. *La ciudad y los otros, Quito 1860-1940*. FLACSO. Quito
- Kozac Daniel. 2011. "Fragmentación urbana y neoliberalismo global". En: Pradilla, Emilio. (Compilador) *Ciudades compactas, dispersas, fragmentadas*. Maporrua, México D.F.
- Kresl, Peter Karl. 1998. "La respuesta de la economía urbana al Tratado de Libre Comercio de América del Norte: planificar para la competitividad". En: *Economía, Sociedad y Territorio*, Vol. I, núm. 4, 1998, 695-722
- Marías, Julián. 1980. *Historia de la filosofía*. Biblioteca de la Revista de Occidente. Madrid.
- Mauss, Marcel. 2009 (1924). *Ensayo sobre el Don*. Katz Editores. Buenos Aires.
- Manosalvas, Mónica. 2015. *El enfoque las capacidades y las políticas públicas. Un análisis de las políticas del Buen Vivir en el Ecuador*. Tesis para obtener el título de doctorado en Ciencias Políticas con especialización en Estudios Políticos. Flacso. Quito.
- Márquez, Francisca. 2003a, Identidad y fronteras urbanas en Santiago de Chile, Psicología en Revista, Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 35-51
- Márquez, Francisca. 2003b. Resistencia y sumisión en sociedades urbanas y desiguales: poblaciones, villas y barrios populares en Chile, en: Ziccardi, Alicia Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI, Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Clacso-Crop, 2008. Pg. 347 – 369

- Martínez, Rubí; Reyes, Ernesto. 2012. "El consenso de Washington: la instauración de políticas neoliberales en América Latina". En: *Política y Cultura*. No 37. Pp 35-64
- Martínez Valle, Luciano. 2007. *¿Puede la pobreza rural ser abordada a partir de lo local?* Flacso. Quito-Ecuador
- Mejía Granizo, Arturo. 2011. "Planificación del desarrollo, ordenamiento territorial y gestión de suelo en Ecuador" En; *Nuevos paradigmas y Reforma Legal en Ecuador*. Fórum de Direito Urbano e Ambiental - FDUA. Belo Horizonte: Fórum.
- Méndez, Ricardo, 2016. *Renovar economías urbanas en crisis: un debate actual sobre la innovación. Desenvolvimento Regional em debate*, Vol. 6, N° 3: 4-31.
- Monares, Andrés. 2008. *Oikonomia. Economía Moderna. Economías*. Editorial Ayún. Chile
- Montúfar, César, 2000, "La política estado-céntrica del desarrollismo 1945-1984", en *La reconstrucción Neoliberal. Febres Cordero o la estatización del neoliberalismo en el Ecuador 1984-1988*, Abya-Yala, Quito.
- Morán, María Luz. 2003. "Aprendizajes y espacios de la ciudadanía. Para un análisis sociocultural de las prácticas políticas", En *Iconos, Revista de Ciencias Sociales*, No. 15, pp. 31-43.
- Naranjo, Marcelo. 1980. *Etnicidad, estructura social y poder en Manta: el occidente ecuatoriano*. Instituto Otavaleño de Antropología. Centro de Investigaciones. Colección Pendoneros No. 36. Otavalo
- Navia Antezana, Cecilia. 2007. El análisis del discurso de Foucault. En: *INED*. No 6. Enero-2007. Pp 57-62
- Neira Rizzo, José. 2011. *Marco normativo en materia de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial en el Ecuador*. Fórum de Direito Urbano e Ambiental - FDUA. Belo Horizonte: Fórum.
- Larrea, Carlos, 2004, "Dolarización y desarrollo humano en Ecuador", en *ICONOS* No.19, Flacso-Ecuador, Quito, pp.43-53.
- León, Mauricio. 2000. *Los beneficiarios del bono solidario ante la crisis*. Documentos de trabajo SIISE. No. 10. Quito
- Vivir en Ecuador*. INEC. Quito
- Lewis, Oscar. 1961. *Antropología de la pobreza: cinco familias*. Fondo de Cultura Económica. México

- Levi-Strauss, Claude. 1994. *El pensamiento salvaje*. Fondo de Cultura Económica. México.
- Luna Tamayo, Milton. 2009. "Introducción". En: Luna Miltón (Coord). 2009. *Aportes ciudadanos a la revolución educativa*. Contrato Social. Quito. Pp 15-20
- Parain-Vial, Jeanne. 1969. *Análisis estructurales e ideologías estructuralistas*. Amorrortu Editores. Buenos Aires.
- Paz y Miño, Juan. 2007. *Introducción; Constituyente, constituciones y economía*. En: Paz y Miño, Juan. (Edt). *Asamblea constituyente y economía. Constituciones del Ecuador*. Abya-Yala. Quito. Pp 17-56
- Paz y Miño Cepeda, Juan. 2015. *Historia de los Impuestos en el Ecuador. Visión sobre el régimen impositivo en la historia económica nacional*. SRI-Puce. Quito
- Peñaherrera, Blasco. 1980. El Ecuador de 1960 a 1972. En: *Historia del Ecuador*. Tomo 8. Salvat Editores Ecuatoriana. S.A. Quito
- Pereña, Francisco. 2007. "Formación discursiva, semántica y psicoanálisis". En: En: Delgado, Juan Manuel; Gutiérrez, Juan. (Coord). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales. Síntesis Psicología*. Madrid. Pp 464-480
- Pérez Sáinz, Juan Pablo. 2014, "El tercer momento rousseauiano de América Latina. Posneoliberalismo y desigualdades sociales". En: *DesiguALdades, documento de trabajo*. Pp 1-72.
- Pineo, Ronn, 1994, "Guayaquil y su región en el segundo boom cacaotero (1870-1925), en Maiguashca, Juan editor, *Historia y región en el Ecuador 1830-1930*, Corporación Editora Nacional, Quito, pp. 251-294.
- Ponce, Juan. 2011. *Desigualdad del ingreso en Ecuador: un análisis de los años 1990s y 2000s*. Disponible en:
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1309287045.DTFLACSO_2011_Ponce.pdf
- Pradilla Cobos, Emilio. 2009. *Los territorios del neoliberalismo en América Latina*. Casa Abierta al Tiempo. México.
- Pradilla, Emilio. 2014. *La ciudad capitalista en el patrón neoliberal de acumulación en América Latina*. Cad. Metrop., São Paulo, v. 16, n. 31, pp. 37-60, jun 2014.
<http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2014-3102>
- Prebisch Raúl. 1963. *Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano*. Fondo de Cultura Económica. Disponible en:

- <https://sociologiadeldesarrollo.files.wordpress.com/2014/11/230433706-aula-3-raul-prebisch-haciauna-dinamica-del-desarrollo-latinoamericano.pdf>
- Prebisch, Raúl. 1980. *Capitalismo periférico: crisis y transformación*. Fondo de Cultura Económica. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42073/33898P922ca_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Puente Hernandez, Luis Eduardo. 2013. *Biblioteca pública, democracia y buen vivir. Aportes para la definición de políticas en el Ecuador*. Flacso. Quito
- Quijano, Anibal. 2011. *Colonialidad del poder y subjetividad en América Latina. – Contextualizaciones lati-noamericanas 3 (5), pp. 1-13.*
- Quijano, Anibal. 2012. *Vivir bien, entre el desarrollo y la descolonialidad del poder*. En: Vientos del Sur. No 122. Pp 46-56
- Reyes, Geovanni 2001. *Principales teorías sobre el desarrollo económico y social*. Revista Nomadas. Universidad Complutense de Madrid. No 4. Pp NO DATA
- Reyes, Geovanni. 2009. *Teorías de desarrollo económico y social: articulación con el planteamiento de desarrollo humano*. En: *Tendencias*, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Nariño. Volumen X. No 1. Pp 117-142
- Roberts, Bryan. 1980. *Ciudades de campesinos. La economía política de la urbanización en el tercer mundo*. Siglo Veintiuno Editores. México
- Rodríguez, Juan Carlos. 2011. "Planificación urbana en perspectiva: una mirada a nuestra formación en teoría de la planificación urbana". En: *Quivera*, vol. 13, núm. 2, julio-diciembre. Universidad Autónoma del Estado de México. Pp. 232-258
- Rueda, Marco Vinicio. 1987. *Setenta mitos Shuar*. Ediciones Abya-Yala. Quito
- Sabatini, Francisco. 2006. *La segregación social del espacio en las ciudades de América Latina*. Inter-American Development Bank.
- Samson, A. (Ed.). 2017. *The Behavioral Economics. Guide 2017*. Disponible en: <http://www.behavioraleconomics.com>
- Santander, Pedro. 2011. Por qué y cómo hacer análisis de discurso. En: *Cinta Moebio*. 41. Pp 207-224
- Sassen, Saskia 2005. "The urban impact of Economic Globalization". En: Lin, Jan y Mele, Christopher *The Urban Sociology Reader*. Routledge: New York, pp. 230-241

- Sassen, Saskia. 2006. "El reposicionamiento de las ciudades y regiones urbanas en una economía global: ampliando las opciones de políticas y gobernanza". En: *Revista EURE* (Vol. XXXIII, N° 100), pp. -34. PDF.
- Sayago, Sebastián. 2014. El análisis del discurso como técnica de investigación cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales. En: *Cinta moebio* 49. Pp 1-10
- Schumpeter, Joseph. 1912. "The Theory of Economic Development". En Backhaus J. (2003). *Joseph Alois Schumpeter. The European Heritage in Economics and the Social Sciences, Vol.1*, pp.61-116.
- Springer, Scott, James. 2000. *Los dominados y el arte de la resistencia*. Cultura Libre. México.
- Sen, Amartya. 1998. "Las teorías del desarrollo a principios del siglo XXI", En; *Cuadernos de Economía*, No.29. Pp.65-84.
- Sen, Amartya. 1999. *Nuevo examen de la desigualdad*. Alianza Editorial. Madrid
- Sen, Amartya. 2001. *La desigualdad económica*. Fondo de Cultura Económica. México
- SENPLADES. 2007. *Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Planificación para la revolución ciudadana*. Secretaria Nacional de Planificación. Quito.
- SENPLADES. 2009. *Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural*. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Quito
- SENPLADES. 2014. *Estrategia nacional para la igualdad y la erradicación de la pobreza*. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Secretaría Técnica para la erradicación de la pobreza. Quito
- SENPLADES 2017. *Informe a la nación 2007-2017*. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Quito
- Sobrevilla, David. 1995. "El idealismo de Berkeley". En: *ARETE, Revista de Filosofía*. Vol 12, No. 2. Pp 331-352
- Soja, Edward. 2000. La metrópolis industrial postfordista. Reestructurar la economía geopolítica del urbanismo. En: *Postmetrópolis Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones*. Ed. Traficantes de Sueños, Madrid. Pg 231 -274
- Sunkel, Oscar; Zuleta, Gustavo. 1990. "Neoestructuralismo versus neoliberalismo en los años noventa". En: *Revista de la CEPAL*, No.42, pp.35-53.
- Stavenhagen, Rodolfo, 1981 (1965). "Siete Tesis equivocadas sobre América Latina", en *Sociología y subdesarrollo*, Ed. Nuestro Tiempo, México, pp. 15-84.

- Striffler, Steve, 2000, “Clase, género e identidad: la United Fruit Company, *Hacienda Tenguel*, y la reestructuración de la industria del banano”, en *Ecuador Debate* No. 51, pp. 155-178.
- Thaler, Richard; Sunstein, Cass. 2008. *Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness*. USA. Yale University Press.
- Therborn, Göran, 2015 (2013). *La desigualdad mata*, Alianza Editorial. Madrid.
- Tilly, Charles, 2004 (1998). “¿De dónde vienen los derechos?”. En *Sociológica*, Año 19, No. 55, pp. 273-300.
- Tomalá, Miguel Angel. 2016. *El proceso migratorio en el Ecuador después de la crisis económica-financiera de 1998-1999. Un análisis histórico descriptivo*. Ponencia presentada en la XIII Reunión de Estudios Regionales. AEER. Santiago de Compostela, del 16 al 18 de noviembre de 2016.
- Turok, Ivan. 2004. “Cities, Regions and Competitiveness”. In: *Regional Studies*, Vol. 38.9: December. Pp 1069–1083.
- Uzcategui, Emilio. 1981. *La educación ecuatoriana en el siglo del liberalismo*. Universidad Central. Quito
- Van Dijk, Teun. 1999. *El análisis crítico del discurso*. En: *Anthropos Barcelona*, 186. Septiembre-octubre. Pp. 23-36
- Van Dijk, Teun A. 2009. *Discurso y poder*. Gedisa Editorial. Barcelona
- Vega Centeno, P. 2017. La desigualdad invisible: el uso cotidiano de los espacios públicos en la Lima del siglo XXI. En: *Territorios* (36), Pp. 23-46.
- Vera Toscano, María Pía, 2013. *Más vale pájaro en mano: crisis bancaria, ahorro y clases medias*. Flacso Ecuador. Quito.
- Wacquant, Loïc. 2011. *Desolación urbana y denigración simbólica en el hipergueto*. *Astrolabio* No 6
- Wacquant, Loïc. 2008. *Ghettos and Anti-Ghettos: An Anatomy of the New Urban Poverty*. Thesis Eleven 2008; 94; 113
- Weber, Max, 2014 (1923). *Economía y Sociedad*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Wilson, W. J. 1996. *When work disappears: The world of the new urban poor*. New York: Knopf
- World Bank Group. 2015. *Mind, society and behavior*. World development report. Washington. International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.

Zibechi, Raul. 2015. *Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias*. Ediciones Desde Abajo. Bogotá.

Ziccardi, Alicia. 2008. *Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI*, en: Ziccardi, Alicia *Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI*, Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Clacso-Crop, 2008